Organización Internacional del Trabajo | ACT/EMP

Impulsando la productividad en América Latina

INFORME REGIONAL 2023

Impulsando la productividad

EN AMÉRICA LATINA

Informe Regional 2023

Organización Internacional del Trabajo | ACT/EMP

Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2023

Primera edición 2023

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo están protegidas por derechos de autor en virtud del Protocolo 2 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, se pueden reproducir extractos breves de ellos sin autorización, siempre y cuando se indique la fuente. Para derechos de reproducción o traducción, la solicitud debe dirigirse a ILO Publications (Rights and Licensing), International Labour Office, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, o por correo electrónico: rights@ilo.org. La Oficina Internacional del Trabajo acoge favorablemente dichas solicitudes.

Las bibliotecas, instituciones y otros usuarios registrados en una organización de derechos de reproducción pueden hacer copias de conformidad con las licencias que se les otorgan para este fin. Visite www.ifrro.org para hallar la organización de derechos de reproducción de su país.

Impulsando la productividad en América Latina. Lima: OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP), 2023. 90 pp.

ISBN: 9789220401125 (versión impresa)

ISBN: 9789220401132 (versión web PDF)

Datos de catalogación de la OIT

Productividad, creación de empleo, crecimiento económico, organizaciones empresariales y de empleadores, trabajo decente, desarrollo sostenible.

Las designaciones empleadas en las publicaciones de la OIT, que se encuentran de conformidad con la práctica de las Naciones Unidas, y el material presentado en ellas no implican la expresión de ninguna opinión de la Oficina Internacional del Trabajo sobre el estado legal de ningún país, área o territorio o sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus fronteras.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en artículos, estudios y otras contribuciones firmadas corresponde exclusivamente a sus autores, y su publicación no constituye un respaldo de la Oficina Internacional del Trabajo a las opiniones expresadas en ellos. Las referencias a nombres de empresas y productos y procesos comerciales no implican respaldo a estos por parte de la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de no mencionar una empresa, producto o proceso comercial en particular no indica desaprobación.

Puede encontrar información sobre publicaciones de la OIT y productos digitales en: www.ilo.org/publns.

Diseño, maquetación y concepto editorial: Ana Periche Acosta

ADVERTENCIA

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español *o/a* para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres.

Índice

Prefacio xii

Resumen ejecutivo 1

Capítulo 1: Productividad en América Latina 4

Gráfico 1.1.1 Crecimiento del PIB real y de la PTF, 2022 5

Gráfico 1.1.2 Crecimiento de la PTF, 2000-2022 6

Gráfico 1.2.1 Productividad laboral por hora trabajada, 2022 7

Gráfico 1.2.2 Productividad laboral por hora trabajada, 2000-2022 7

Gráfico 1.3.1 Productividad laboral por persona empleada, 2022 8

Gráfico 1.3.2 Productividad laboral por persona, 2000-2022 9

Gráfico 1.4.1 PIB per cápita (dólares internacionales de 2022 utilizando PPP), 2022 10

Gráfico 1.4.2 Tendencia del PIB per cápita (dólares internacionales de 2022 utilizando PPP), 2022 10

Capítulo 2: Entorno para hacer negocios 11

1. Estabilidad macroeconómica **11**

Gráfico 2.1.1 PIB real (millones de dólares de 2022, PPC), 2022 12

Gráfico 2.1.2 Tendencia del PIB real (millones de dólares, PPC) 12

Gráfico 2.1.3 Inflación general del IPC y subyacente (excluyendo comida y energía del IPC), 2022 12

Gráfico 2.1.4 Inflación general del IPC – Tendencia 13

Gráfico 2.1.5 Deuda del gobierno general como porcentaje del PIB, 2022 14

Gráfico 2.1.6 Deuda del gobierno general como porcentaje del PIB 14

Gráfico 2.1.7 Pagos al servicio de la deuda externa otorgada por el FMI como porcentaje del INB, 2021 14

Gráfico 2.1.8 Tendencia de los pagos al servicio de la deuda externa otorgada por el FMI como porcentaje del INB 14

2. Desarrollo de habilidades y calidad educativa **15**

Gráfico 2.2.1 Escolaridad promedio, 2020 15

Gráfico 2.2.2 Tendencia de la escolaridad promedio 15

Gráfico 2.2.3 Resultados de la prueba PISA en la asignatura de matemática, 2018 16

Gráfico 2.2.4	Resultados de la prueba PISA en la asignatura de ciencias, 2018	17
Gráfico 2.2.5	Resultados de la prueba PISA en la asignatura de lectura, 2018	18
Gráfico 2.2.6	Tendencia de los resultados de la prueba PISA en la asignatura de matemática para América Latina	18
Gráfico 2.2.7	Tasa de participación laboral de la población total (PL) y con educación avanzada (PLEA), 2022	19
Gráfico 2.2.8	Tendencia de la tasa de participación laboral de la población con educación avanzada (PLEA)	19
Gráfico 2.2.9	Proporción de la fuerza laboral con educación avanzada (FLEA), 2022	20
Gráfico 2.2.10	Proporción de la fuerza laboral con educación avanzada (FLEA), 2022	20
Gráfico 2.2.11	Capacidades físicas, habilidades duras y habilidades blandas que las empresas encuestadas valoran, así como las que consideran faltantes	21
Gráfico 2.2.12	Puntaje de las habilidades actuales de la fuerza laboral	22
Gráfico 2.2.13	Puntaje de las habilidades futuras de la fuerza laboral	22
Gráfico 2.2.14	Tendencia del puntaje de las habilidades actuales en la fuerza laboral	22
Gráfico 2.2.15	Tendencia del puntaje de las habilidades futuras en la fuerza laboral	22
3. Mercados laborales inclusivos y flexibles		**23**
Gráfico 2.3.1	Participación laboral desagregada por sexo, 2022	23
Gráfico 2.3.2	Tendencia de la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres en puntos porcentuales	24
Gráfico 2.3.3	Tasa de desempleo, 2022	25
Gráfico 2.3.4	Proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian ni están en capacitación, 2022	25
Gráfico 2.3.5	Tendencia de la tasa de desempleo	26
Gráfico 2.3.6	Tendencia de la proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian ni están en capacitación	26
Gráfico 2.3.7	Tasa de subempleo, 2021	26
Gráfico 2.3.8	Tendencia de la tasa de subempleo	26
4. Transición fuera de la informalidad		**27**
Gráfico 2.4.1	Proporción del empleo informal sobre el total	28
Gráfico 2.4.2	Tendencia de la proporción del empleo formal sobre el total	28
Gráfico 2.4.3	Proporción de empleo informal desagregada por sexo, 2021	29
Gráfico 2.4.4	Tendencia de la proporción de empleo informal desagregada por sexo	29
Gráfico 2.4.5	Proporción de empleo informal para la población de jóvenes de entre 15 y 24 años, 2021	29

Gráfico 2.4.6 Tendencia de la proporción de empleo informal para la población de jóvenes de entre 15 y 24 años 29
Gráfico 2.4.7 Proporción de empleo informal desagregada por nivel de educación, 2021 30
Gráfico 2.4.8 Tendencia de la proporción de empleo informal desagregada por nivel de educación 30
Gráfico 2.4.9 Proporción de empleo informal desagregada por zona urbana/rural, 2021 31
Gráfico 2.4.10 Tendencia de la proporción de empleo informal desagregada por zona urbana/rural 31
5. Emprendimiento e innovación 32
Gráfico 2.5.1 Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, 2020 32
Gráfico 2.5.2 Tendencia del gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB 32
Gráfico 2.5.3 Índice general, 2019 33
Gráfico 2.5.4 Acceso a financiamiento, 2019 33
Gráfico 2.5.5 Actividad industrial, 2019 34
Gráfico 2.5.6 Habilidades, 2019 34
Gráfico 2.5.7 Investigación y desarrollo, 2019 35
Gráfico 2.5.8 Tecnología de la información y la comunicación (TIC), 2019 35
Gráfico 2.5.9 Tendencia del índice de preparación para la tecnología de punta (máx.=1) 35
Gráfico 2.5.10 Monitor Global de Emprendimiento (% de los encuestados), 2017 36
6. Acceso a crédito y servicios financieros 37
Gráfico 2.6.1 Proporción de la población de 15 años o mayor que posee una cuenta en alguna institución financiera o con un provedor de servicios de dinero móvil, 2021 38
Gráfico 2.6.2 Tendencia de la proporción de la población de 15 años o mayor que posee una c uenta en alguna institución financiera o con un provedor de servicios de dinero móvil 38
Gráfico 2.6.3 Préstamos pendientes en alguna institución financiera de pymes como porcentaje del PIB, 2021 39
Gráfico 2.6.4 Tendencia de los préstamos pendientes en alguna institución financiera de pymes (%PIB) 39
Gráfico 2.6.5 Tasa de interés de préstamos, 2022 39
Gráfico 2.6.6 Tendencia de la tasa de interés de préstamos 39
7. Infraestructura física, digital y conectividad de mercados 40
Gráfico 2.7.1 Número de suscripciones a banda ancha por cada 100 personas, 2021 40
Gráfico 2.7.2 Tendencia del número de suscripciones a banda ancha por cada 100 personas 40
Gráfico 2.7.3 Índice de percepción de la calidad de infraestructura con una escala del 1 al 7 (mejor): infraestructura total, 2017 41

Gráfico 2.7.4 Índice de percepción de la calidad de infraestructura con una escala del 1 al 7 (mejor): infraestructura de suministro eléctrico, 2017 41
Gráfico 2.7.5 Índice de percepción de la calidad de infraestructura con una escala del 1 al 7 (mejor): infraestructura portuaria, 2017 42
Gráfico 2.7.6 Índice de percepción de la calidad de infraestructura con una escala del 1 al 7 (mejor): transporte aéreo, 2017 42
Gráfico 2.7.7 Índice de percepción de la calidad de infraestructura con una escala del 1 al 7 (mejor): carreteras, 2019 42
Gráfico 2.7.8 Tendencia del índice de percepción de la calidad de infraestructura con una escala del 1 al 7 (mejor): infraestructura total 43
Gráfico 2.7.9 Índice de penetración de mercados, 2020 44
Gráfico 2.7.10 Tendencia del índice de penetración de mercados 44
Gráfico 2.7.11 Índice de HH de concentración de mercado, 2020 45
Gráfico 2.7.12 Tendencia del índice de HH de concentración de mercado 45

8. Derechos de propiedad y Estado de derecho 46

Gráfico 2.8.1 Calidad regulatoria con una escala del 0 al 100 (mejor), 2020 46
Gráfico 2.8.2 Tendencia de la calidad regulatoria con una escala del 0 al 100 (mejor) 46
Gráfico 2.8.3 Percepción del Estado de derecho con una escala del 0 al 100 (mejor) 47
Gráfico 2.8.4 Tendencia de la percepción del Estado de derecho con una escala del 0 al 100 (mejor) 47
Gráfico 2.8.5 Índice de derechos de propiedad, 2022 48
Gráfico 2.8.6 Tendencia del índice de derechos de propiedad 48

9. Gobernanza y políticas anticorrupción 49

Gráfico 2.9.1 Índice de percepción de la corrupción con una escala del 0 al 100 (mejor), 2022 50
Gráfico 2.9.2 Tendencia del índice de percepción de la corrupción con una escala del 0 al 100 (mejor) 50
Gráfico 2.9.3 Índice de control de corrupción con una escala del 0 al 100 (mejor), 2022 50
Gráfico 2.9.4 Tendencia del índice de control de corrupción con una escala del 0 al 100 (mejor) 50

Capítulo 3: Análisis descriptivo de la relación entre las variables que crean un entorno propicio para hacer negocios y la productividad de los países 51

Gráfico 3.1 Porcentaje de jóvenes que no trabajan ni estudian ni están en capacitación, y la productividad laboral por hora trabajada, 2022 52
Gráfico 3.2.1 Tasa de informalidad laboral y productividad laboral por hora trabajada, 2022 53
Gráfico 3.2.2 Tasa de informalidad laboral y productividad laboral por hora trabajada, 2022 53
Gráfico 3.3 Índice de preparación de la tecnología de punta y productividad laboral por hora trabajada, 2019 54

Gráfico 3.4 Préstamos pendientes por cada 1 000 habitantes en bancos comerciales y productividad laboral por hora trabajada, 2021 54
Gráfico 3.5 Número de suscripciones a internet de banda ancha por cada 100 personas y productividad laboral por hora trabajada, 2021 55
Gráfico 3.6.1 Índice de calidad regulatoria y productividad laboral por hora trabajada 56
Gráfico 3.6.2 Índice de percepción de Estado de derecho y productividad laboral por hora trabajada, 2020 56
Gráfico 3.6.3 Índice de derechos de propiedad y productividad laboral por hora trabajada 57
Gráfico 3.7.1 Índice de control de la corrupción y productividad laboral por hora trabajada, 2020 57
Gráfico 3.7.2 Índice de percepción de la corrupción y productividad laboral por hora trabajada 58

Capítulo 4: Áreas prioritarias de política pública para impulsar la productividad en América Latina 59

Referencias bibliográficas 63

Prefacio

El bajo crecimiento de la productividad en los países de América Latina y el Caribe explica, en parte, el escaso desarrollo productivo y económico de la región, lo que a su vez afecta en forma negativa la creación de trabajo decente y la calidad de vida de millones de personas. Por ende, los mandantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideran prioritario mejorar la productividad como forma de promover un mayor desarrollo social y económico de la región. En su 341.ª reunión, en marzo de 2021, el Consejo de Administración de la OIT analizó el documento *El trabajo decente y la productividad*, que destaca la necesidad de abordar, desde una perspectiva sistémica, los diversos factores que inciden en el aumento de la productividad y su efecto catalizador sobre la creación de trabajo decente, el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida.

En 2022, la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe publicó el *Informe regional: Transición digital, cambio tecnológico y políticas de desarrollo productivo en ALC: desafíos y oportunidades*, que se aproxima al tema desde múltiples aristas y muestra cómo la productividad de la región ha venido cayendo con respecto a la del resto del mundo, incluso en comparación con otras zonas de países emergentes. De acuerdo con el *Informe*, los datos muestran que existe una enorme heterogeneidad en el nivel de la productividad entre países, así como entre empresas de diferente tamaño y pertenecientes a distintos sectores de actividad. El *Informe* señala que las mipymes latinoamericanas representan actualmente el 99 por ciento del universo de empresas y el 67 por ciento del empleo. Sin embargo, su participación en el PIB regional es de tan solo el 25 por ciento, mientras que, en la Unión Europea, la cifra promedio por país es del 56 por ciento del PIB (CEPAL 2020). En sus conclusiones, el *Informe* ofrece una serie de recomendaciones generales que toman en cuenta estos elementos y que sirvieron de estímulo para emprender la presente investigación.

La publicación del *Informe regional* en 2022 motivó a los mandantes empresariales de la OIT a solicitar el análisis de la situación específica de los países del continente. Por esa razón, en 2023, la Oficina Regional de la OIT abrió una línea de investigación sobre la situación de la productividad en América Latina. Para ello, se desarrollaron nueve estudios nacionales para **Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Uruguay**, con el fin de conocer los factores que más impactan en la productividad y ofrecer una base empírica sobre la cual puedan presentarse recomendaciones para mejorar la situación. Si bien las soluciones para mejorar la productividad deben generarse a nivel nacional mediante la aplicación de políticas públicas consistentes, el conocimiento generado por estos estudios nacionales ofrece una mirada a las tendencias regionales.

Este nuevo *Informe regional 2023: Impulsando la productividad en América Latina* analiza dimensiones clave para generar un entorno de negocios propicio para mejorar la productividad en América Latina, retomando nueve dimensiones clave definidas en *Impulsando la productividad: una guía para organizaciones empresariales* en 2020, en donde se especifica la importancia del entorno para hacer negocios en términos de elevar la productividad. Estos componentes son la estabilidad macroeconómica; el desarrollo de habilidades y calidad educativa; la existencia de mercados laborales inclusivos y flexibles; la transición de la informalidad a la formalidad; la capacidad de promover el emprendimiento y la innovación; el acceso al crédito y a servicios financieros; la infraestructura física y digital; la vinculación con mercados internacionales; el respeto al derecho de propiedad y la vigencia del Estado de derecho; y buenas prácticas de gobernanza y políticas anticorrupción.

El primer capítulo de este *Informe* analiza el crecimiento de la productividad en América Latina respecto a otras regiones de países en desarrollo y a las economías de la OCDE[1]. En el análisis, se ilustra el estancamiento relativo de la productividad latinoamericana durante las últimas décadas. Posteriormente, el capítulo 2 presenta diversos factores del entorno para hacer negocios que limitan el crecimiento de la productividad en América Latina, cuantificando la magnitud de las brechas con relación a las economías de la OCDE. El capítulo 3 subraya los factores que presentan una mayor correlación estadística con las estadísticas de productividad laboral. Por último, el capítulo 4 presenta áreas de oportunidad concretas para la participación de los gobiernos y diversos actores sociales en la búsqueda de mejorar el entorno para hacer negocios e incrementar la productividad. La evidencia y análisis que se muestran en este *Informe regional* servirán a las organizaciones empresariales como insumo para presentar estrategias en diferentes instancias de diálogo social con el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y otras partes interesadas.

Agradecemos a quienes trabajaron con ACT/EMP para elaborar este *Informe regional 2023*, incluidos los representantes de las organizaciones empresariales que acompañaron el proceso para la generación de información que nutrió el documento. También agradecemos al economista Jorge Ramírez Mata por su liderazgo en el desarrollo de este trabajo de investigación, así como a Alsacia San Martín por su valioso trabajo como asistente de investigación. Además, agradecemos a Jorge Cornejo, quien realizó la revisión de estilo de los textos, y a Ana Periche Acosta por la edición y diseño gráfico de esta publicación. También agradecemos a Tulio Cravo, Especialista Regional de la OIT en Políticas Públicas y Productividad, por su apoyo en el proceso de revisión de pares.

El producto final es el resultado de la colaboración de todos los miembros del equipo regional de ACT/EMP en América Latina y el Caribe. En particular, queremos hacer un agradecimiento muy especial al equipo de producción y supervisión general del trabajo realizado, integrado por los Especialistas de ACT/EMP Roberto Villamil, Andrés Yurén y José Luis Viveros.

Claudia Coenjaerts
Directora Regional *a. i.*
Oficina Regional de la OIT
para América Latina y el Caribe

Deborah France-Massin
Directora
Oficina de Actividades para los
Empleadores de la OIT

1 En este reporte, se consideran las estadísticas de las 20 economías latinoamericanas con mayor PIB, sujeto a la disponibilidad de datos: 1. Argentina, 2. Belice, 3. Bolivia, 4. Brasil, 5. Chile, 6. Colombia, 7. Costa Rica, 8. Ecuador, 9. El Salvador, 10. Guatemala, 11. Guyana, 12. Honduras, 13. México, 14. Nicaragua, 15. Panamá, 16. Paraguay, 17. Perú, 18. Suriname, 19. Uruguay, 20. Venezuela.

«La evidencia empírica muestra que la productividad laboral es el factor económico más importante para fijar los salarios a un nivel que permita a las empresas retener trabajadores y crear empleos. Cuanto mayor sea la productividad, mayor será el nivel de los salarios y mayor la capacidad de las empresas para crear empleos. El crecimiento de la productividad también es una condición necesaria que permite a las empresas mejorar las condiciones generales de trabajo».

Impulsando la productividad: una guía para organizaciones empresariales
Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT, 2020

Resumen ejecutivo

La productividad total de los factores de América Latina registró tasas de crecimiento menores que el promedio de los países miembros de la OCDE y que otras regiones en desarrollo, entre el año 2000 y el 2022. Mientras que la productividad total de los factores de África Subsahariana creció al 0,7 por ciento anual en dicho periodo, en América Latina el promedio de crecimiento anual fue negativo, con una variación anual media de -0,7 por ciento (The Conference Board 2023). Dicho fenómeno es preocupante si se tiene en cuenta que el aumento de la productividad es esencial para garantizar un crecimiento económico sostenible en el largo plazo que mejore los estándares de vida de la población (Krugman 1997).

En la guía *Impulsando la productividad* de la OIT (2020), se identifican las condiciones necesarias para crear un entorno de negocios propicio para el aumento de la productividad. Con base en ello y en la disponibilidad de datos para las economías de América Latina, en el presente *Informe* se analizaron nueve condiciones del entorno de negocios: estabilidad macroeconómica; calidad educativa y desarrollo de habilidades; mercados laborales inclusivos y flexibles; transición fuera de la informalidad; emprendimiento e innovación; acceso a crédito y servicios financieros; infraestructura física y digital y conectividad de mercados; derechos de propiedad y Estado de derecho; y gobernanza y políticas anticorrupción.

En términos del componente macroeconómico, el entorno ideal es aquel con crecimiento económico sostenido y un equilibrio en las finanzas públicas, así como una tasa de inflación estable. Sin embargo, la región enfrenta retos importantes en este componente. Entre el año 2000 y el 2022[2], la inflación promedio en América Latina ha sido consistentemente mayor que la inflación promedio en los países miembro de la OCDE. La varianza regional es importante. En 2022, Venezuela registró una inflación anual de tres dígitos, mientras que Bolivia y Panamá tuvieron inflaciones inferiores al 3 por ciento en el mismo año (Banco Mundial 2021c).

La educación de calidad es crucial para aprovechar el potencial productivo de la fuerza laboral en una economía. En este componente, América Latina registra un rezago significativo frente al promedio de los países de la OCDE. La escolaridad promedio de América Latina es tres años menor que la de los países de la OCDE, 9 años frente a 12 años (UNESCO 2023a). El rezago también se ve claramente en el ámbito de la calidad educativa, ya que, en el promedio de las economías de América Latina, seis de cada diez estudiantes no alcanzan el mínimo de competencias académicas en matemática (Banco Mundial 2023a). Todo ello repercute en los niveles educativos y habilidades de los trabajadores. La proporción de fuerza laboral con educación avanzada en los países de la OCDE es el doble de la que se tiene en los países de América Latina (ILOSTAT 2023a).

Por otro lado, los mercados laborales inclusivos y flexibles son esenciales para que en una economía se aproveche el capital humano disponible. No obstante, los grupos vulnerables, como las mujeres y la población joven, tienden a enfrentar mayores dificultades para acceder al mercado laboral en las economías latinoamericanas. Todas las economías de la región registran tasas de participación laboral menores para las mujeres que para los hombres (ILOSTAT 2023b). En el caso de la población joven, el 20 por ciento de las personas de entre 15 y 24 años no trabajan ni estudian ni están en capacitación (ILOSTAT 2023b). Esto implica un desaprovechamiento claro del potencial productivo en la región. En línea con el fomento de la inclusión de los grupos vulnerables en el empleo decente, es necesario impulsar la formalización de empresas y empleos en América Latina. A nivel regional, cinco de cada diez personas ocupadas lo hacen en trabajos informales (ILOSTAT 2023c). Esta tasa es aún mayor para los jóvenes, las personas mayores, los trabajadores con menor nivel de educación y las poblaciones rurales.

2 Periodo considerado en este estudio.

El emprendimiento por oportunidad y la innovación son catalizadores del desarrollo productivo. En este sentido, las economías de América Latina invierten un porcentaje relativamente bajo del PIB en investigación y desarrollo. En 2020, invirtieron en promedio solo el 0,35 por ciento del PIB. Mientras tanto, el promedio de los países de la OCDE fue seis veces mayor (UNESCO 2023b). Otra condición importante para impulsar la productividad es el acceso al crédito, en especial para facilitar el crecimiento de las empresas. Sin embargo, en la región, cuatro de cada diez personas ni siquiera tienen una cuenta bancaria, mientras que, en las economías de la OCDE, el 97 por ciento tienen ya una cuenta (Banco Mundial 2021a). En el caso de las compañías, la principal brecha de acceso a crédito se observa en las empresas de menor tamaño. Los préstamos pendientes por parte de las mipymes representan apenas el 5,3 por ciento del PIB en América Latina (Fondo Monetario Internacional 2023a).

La infraestructura física y digital y la conectividad de mercados constituyen la séptima condición analizada en este *Informe*. En el contexto de la calidad de la infraestructura física, existe un notable contraste entre la región y los países miembros de la OCDE. En el primer grupo, en promedio, la población percibe una calidad de la infraestructura significativamente más baja (Banco Mundial 2017). Este rezago es desalentador debido a la importancia de la infraestructura para impulsar la productividad de una economía. En el caso de la infraestructura digital, en la OCDE hay 34 suscripciones a internet de banda ancha por cada 100 personas, mientras que en América Latina el número de suscripciones es 14 por cada 100 personas, es decir, menos de la mitad (Union Internacional de Telecomunicaciones 2023). Así, la inclusión digital de las empresas es otro reto en América Latina, ya que, en el caso de las mipymes, facilitar el proceso de digitalización lleva a un aumento en los ingresos y mayor innovación, entre otros beneficios (OIT 2021c, 2022b). En términos de la conectividad con los mercados internacionales, durante el periodo de 1992 a 2020, el índice de penetración de exportaciones de la región aumentó escasamente, mientras que, en esos años, el índice de la OCDE se incrementó significativamente hasta ser cuatro veces mayor que el promedio regional (World International Trade Statistics 2021). Esto indica que las exportaciones de las economías de la OCDE suelen alcanzar más destinos de exportación que las economías latinoamericanas.

Para generar confianza y atraer inversiones que mejoren el entorno de negocios es necesario establecer un marco de derechos de propiedad, así como garantizar la seguridad del Estado de derecho. El Banco Mundial mide y publica índices sobre la percepción de la calidad regulatoria y el Estado de derecho en distintos países, incluidas las economías de América Latina. De acuerdo con estos índices, se ha observado un deterioro en la región durante las últimas décadas, así como un incremento de las brechas frente al promedio de la OCDE (Banco Mundial 2023b). Además, se considera que los derechos de propiedad en América Latina están reprimidos, mientras que estos se consideran libres en el promedio de la OCDE (The Heritage Foundation 2023). Los derechos de propiedad influyen en la percepción de riesgo de invertir en una economía, por lo que su fortalecimiento es esencial para atraer inversiones a la región.

Por último, la gobernanza y las políticas anticorrupción son esenciales para garantizar un entorno en el que los recursos de la economía se asignen eficientemente y las empresas puedan impulsar su productividad. Sin embargo, en América Latina se perciben altos niveles de corrupción que imposibilitan la transparencia de las instituciones públicas y reflejan un alto uso del poder público para beneficio privado. De acuerdo con el índice de control de corrupción del Banco Mundial, la percepción de los niveles de corrupción en la región ha empeorado durante el periodo de 1996 a 2020 (Banco Mundial 2023b).

Además del diagnóstico de cada componente del entorno para hacer negocios, en este *Informe* se presentan distintas relaciones estadísticamente significativas entre la productividad laboral por hora trabajada y las variables del entorno para hacer negocios. A pesar de que esta metodología no establece una relación causal, es decir, no se sabe si una variable es la causa de un mejor o peor resultado en otra variable, el establecimiento de relaciones de correlación crea las bases para futuras investigaciones.

Como primer resultado, en las economías de América Latina existe una relación negativa entre la proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian ni están en capacitación y la productividad laboral. Dentro de la muestra de países con datos disponibles, Guatemala registra la proporción más alta de jóvenes en esta situación y la más baja productividad laboral por hora trabajada. En contraste, Uruguay registra la menor proporción de jóvenes en esta situación y los mayores niveles de productividad laboral. Asimismo, la tasa de informalidad laboral del empleo total y la tasa de informalidad laboral de los jóvenes tienen una relación negativa con la productividad laboral por hora trabajada. Es decir, los países con mayores tasas de informalidad tienden a registrar menores niveles de productividad laboral.

Otro resultado importante de este análisis es la relación positiva y significativa entre la productividad laboral por hora trabajada y el índice de preparación de la tecnología de punta. La misma relación se observa en el caso de los préstamos pendientes por cada 1 000 habitantes y la productividad laboral, así como en el número de suscripciones a internet de banda ancha por cada 100 personas y la productividad laboral. Estos resultados sugieren que mientras mayores sean el índice de preparación de tecnología de punta, el número de préstamos y el número de suscripciones a internet de banda ancha, mayores son los niveles de productividad laboral de las economías. Así, economías como Venezuela y Bolivia registran los niveles más bajos de productividad laboral junto con los números más bajos de suscripciones a internet de banda ancha dentro de la muestra de países de la región. Por último, existe una relación positiva y significativa entre la calidad regulatoria, el Estado de derecho, los derechos de propiedad y los niveles de transparencia, y los niveles de productividad laboral por hora trabajada. En este último resultado, Uruguay registra los mayores índices de transparencia, así como los mayores niveles de productividad laboral.

En conclusión, los resultados de este *Informe* revelan la necesidad urgente de diseñar e implementar políticas que mejoren el ambiente para hacer negocios en América Latina con el fin de incrementar la productividad, el crecimiento económico y el bienestar social. Con esto en mente, se necesitan políticas que aumenten la escolaridad promedio y mejoren la calidad educativa, con el objetivo de lograr que la fuerza laboral alcance su potencial productivo. Como segunda área prioritaria, las políticas deben garantizar el aprovechamiento del capital humano en la economía permitiendo la inclusión laboral de todos los grupos poblacionales. En este ámbito, se detecta una importante área de oportunidad en incluir más a los jóvenes y mujeres en los mercados laborales. Además, es esencial impulsar el crecimiento productivo de las mipymes a través de su inclusión financiera y de posibilidades para el emprendimiento por oportunidad. La inversión pública en programas de apoyo a la productividad deberá considerar siempre la sostenibilidad de la deuda pública, para evitar poner en peligro la estabilidad de las finanzas públicas. Por último, los resultados presentados en este *Informe* indican que será indispensable establecer un marco regulatorio que garantice el Estado de derecho y la transparencia en las instituciones públicas.

Capítulo 1

Productividad en América Latina

La productividad total de los factores (PTF) es uno de los indicadores más utilizados para medir la productividad de un país, debido a que refleja la eficiencia con la que se utilizan los factores de producción en la economía (capital y trabajo). El crecimiento de la PTF se puede propiciar por adelantos en ámbitos como la innovación y la tecnología (Kim y Loayza 2019), así como mejoras en el capital humano (educación), la intensidad con la que se utilizan el capital y la mano de obra, la calidad de la gestión empresarial (Bloom, Sadum y Van Reenen 2016; Bloom y Van Reenen 2006), los cambios en las instituciones o regulaciones, y la disponibilidad de infraestructura (Moss, Nunn y Shambaugh 2020; Kim y Loayza 2019; Isaksson 2007). En términos generales, la PTF constituye una medida ampliamente usada en el análisis económico, que facilita el análisis comparativo entre la productividad de distintas economías.

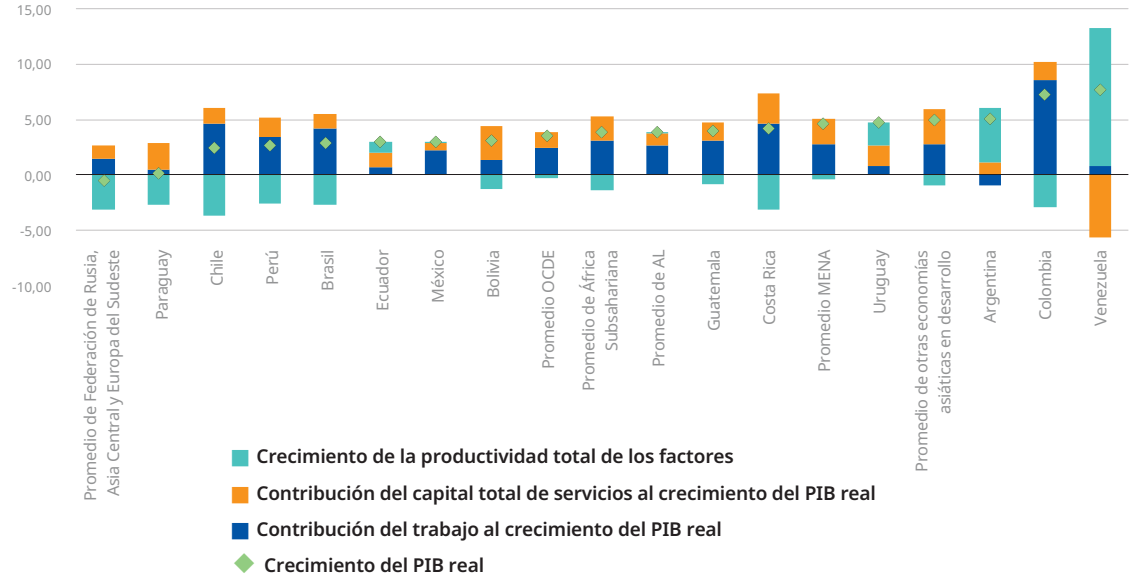
El análisis de la PTF también es relevante para entender las raíces del crecimiento del PIB real, que se deriva de tres posibles factores: mayor nivel de capital, aumento en la calidad de trabajo, e incrementos en la PTF de la economía. Es decir, la eficiencia y la intensidad del uso del capital y el trabajo son una vía directa para propiciar el crecimiento económico. De acuerdo con el economista Paul Krugman, un crecimiento económico respaldado por incrementos en la productividad es esencial para mejorar los estándares de vida de la población (Krugman 1997). Dada la relevancia de esta temática, en esta primera sección se analizan las estadísticas de PTF para las economías de América Latina (AL) y otras economías en desarrollo, incluyendo también estadísticas del crecimiento del PIB real y sus tres componentes.

La base de datos de The Conference Board (CB) presenta estadísticas de la PTF de 13 economías latinoamericanas (año 2022). Tal como se puede observar en el gráfico 1.1.1, entre dichas economías, Paraguay registró la tasa más baja de crecimiento del PIB, apenas un 0,2 por ciento, debido principalmente a una contracción en la productividad total de los factores en este país, que cayó un 2,7 por ciento en ese mismo año (2022).En el extremo opuesto se encuentra Venezuela, que registró la tasa de crecimiento del PIB real y PTF más elevada de los países de América Latina, según datos disponibles[3]. Ante esta estadística, es muy importante considerar que Venezuela registró una tasa de crecimiento negativa del PIB real, de dos dígitos, durante el periodo de 2016 a 2020, y que, en términos de productividad laboral, dicho país sigue ocupando el último puesto de América Latina. De las economías latinoamericanas con datos disponibles, solamente cinco registraron tasas de crecimiento positivas en la PTF en 2022: Ecuador, México, Uruguay, Argentina y Venezuela (véase el gráfico 1.1.1).

3 Es relevante considerar que el crecimiento en la PTF en esta ocasión se mide como la diferencia entre la tasa de crecimiento del PIB y la suma de la contribución a esta tasa del capital y el trabajo. Dada esta metodología, cuando el crecimiento de la PTF es positivo, se puede interpretar como el crecimiento económico que no es explicado ni por el capital ni por el trabajo. Así, el caso de Venezuela muestra un crecimiento de la PTF significativamente elevado, el cual puede ser explicado en gran parte por un incremento en los precios y la producción de petróleo venezolano, que se vio fortalecida por la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania (CEPAL 2022a).

Gráfico 1.1.1

Crecimiento del PIB real y de la PTF, 2022



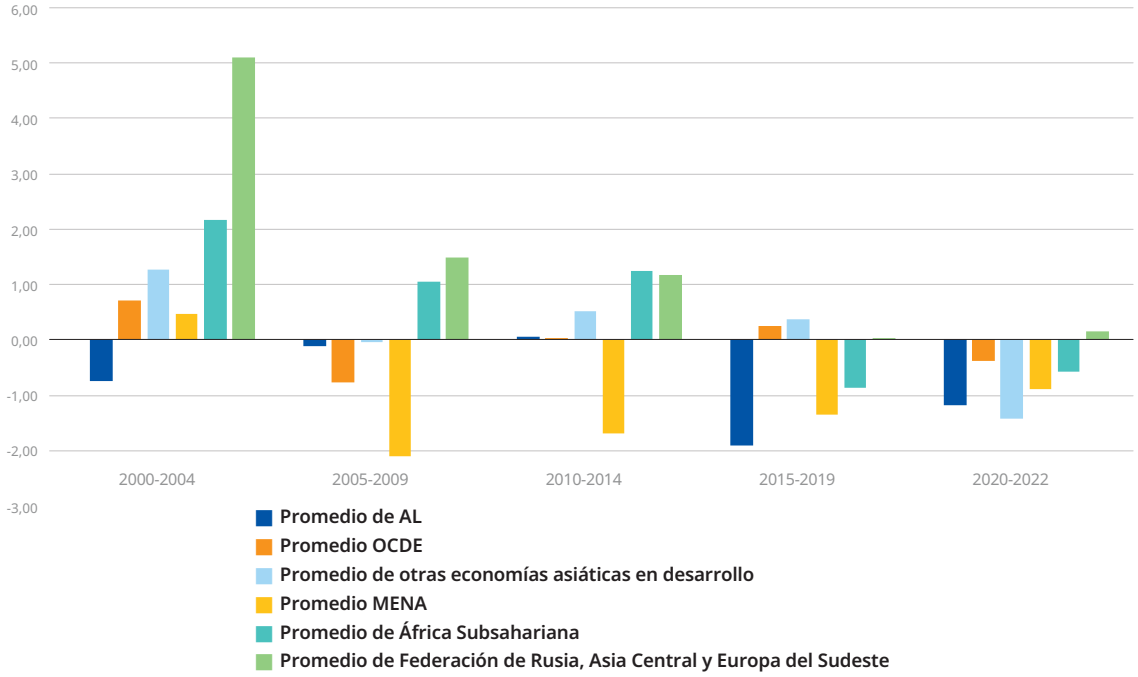
Fuente: The Conference Board (2023).

Es importante mencionar que el crecimiento de la PTF tiende a ser altamente variable, ya que la mayoría de las economías con un crecimiento positivo de la PTF en 2022 habían tenido tasas de crecimiento negativas en años anteriores. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, la economía no había registrado una tasa positiva desde el año 2014. La volatilidad en el crecimiento de la PTF puede deberse a distintos factores internos y externos que impactan en la economía, así como a errores de medición o modificaciones en el cálculo. Ante la alta variabilidad anual en las estadísticas de la PTF, es conveniente considerar también los datos con un horizonte de tiempo más largo. Por ello, se presenta el gráfico 1.1.2, que incluye el promedio de la tasa de crecimiento de la PTF para los quinquenios comprendidos entre los años 2000 y 2019, junto con el rango correspondiente al periodo de 2020 a 2022, es decir, el periodo a partir del inicio de la crisis de COVID-19.

En el quinquenio previo a la pandemia de COVID-19 (2015-2019), la tasa de crecimiento de la PTF de América Latina fue negativa, con un valor de -1,9 por ciento. Esta fue la tasa más baja de todas las economías en desarrollo, lo que incluye a Medio Oriente y el Norte de África (MENA por sus siglas en inglés), África Subsahariana, las economías en desarrollo de Asia, así como la Federación de Rusia, Asia Central y Europa del Sudeste. De hecho, las últimas dos regiones registraron tasas positivas de crecimiento en la PTF durante ese mismo quinquenio, lo que contrasta con la contracción de la PTF observada en América Latina. La problemática es mayor aún si se considera que la brecha de productividad frente a los países de la OCDE se encuentra en aumento, ya que la PTF promedio de estas economías registró un aumento en el quinquenio (2015-1019), en contraste con la disminución observada en América Latina. A partir de la pandemia de COVID-19, la tasa de crecimiento de la PTF en América Latina ha continuado por un sendero negativo, y ha registrado una contracción promedio anual del 1,2 por ciento.

Gráfico 1.1.2

Crecimiento de la PTF, 2000-2022



Fuente: The Conference Board (2023).

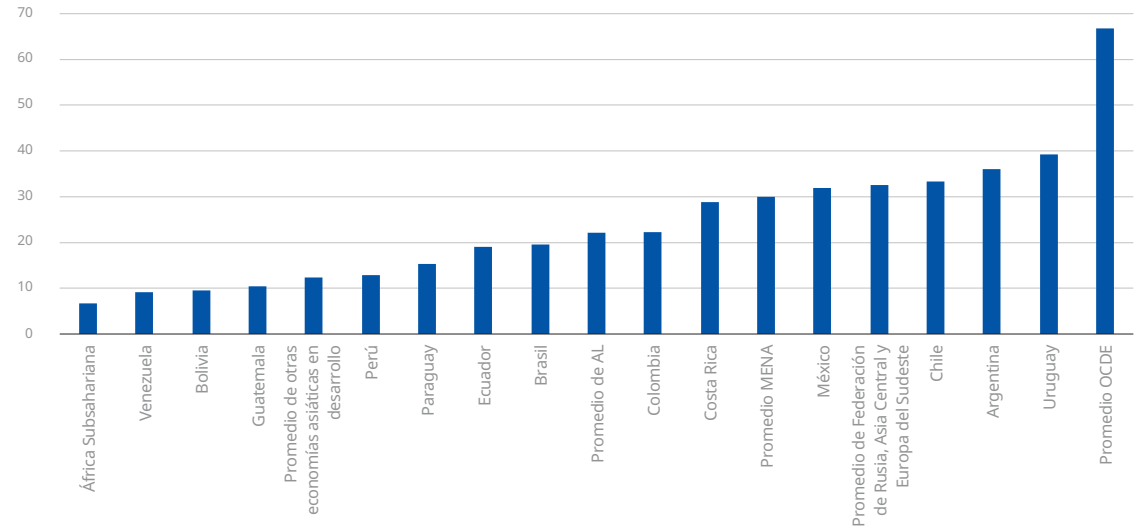
Otra importante medida de productividad que considerar es la productividad laboral, la cual se puede medir por hora trabajada o por persona empleada. La primera medición es más precisa debido a que solamente considera el tiempo en el que la fuerza laboral se encuentra trabajando (The Conference Board 2022). En 2022, la economía latinoamericana con la productividad laboral por hora trabajada más baja fue Venezuela, con 9,1 dólares de los Estados Unidos de América, nivel cercano a la productividad promedio por hora en África Subsahariana (6,6 dólares). Mientras tanto, la productividad promedio por hora en América Latina fue de 22,1 dólares. En los países de la OCDE, la productividad promedio por hora fue tres veces mayor, de 66,7 dólares por hora (véase el gráfico 1.2.1). Ninguna economía latinoamericana registró un nivel igual o mayor. La mayor productividad por hora trabajada en América Latina se registró en el Cono Sur. Las economías de Uruguay, Argentina y Chile fueron las que registraron mejores resultados en este ámbito. En el caso de Uruguay, la economía con el más alto nivel de América Latina, se han observado tasas positivas en el crecimiento de la productividad laboral en la mayoría de los años desde el comienzo del siglo XXI, y se han registrado los mayores niveles de crecimiento durante el superciclo de las materias primas, hasta el año 2013. A pesar de que este crecimiento en la economía significó una disminución en la desigualdad y la pobreza del país, se observaron diferencias significativas en la productividad por sector de la economía y tamaño de las empresas[4] (CEPAL 2017).

4 Esto subraya la necesidad de cotejar estadísticas de la productividad a nivel sectorial. Sin embargo, a la fecha de elaboración de este *Informe*, no se encontraron datos de productividad laboral sectorial comparables entre distintas economías de América Latina.

Gráfico 1.2.1

Productividad laboral por hora trabajada, 2022

(dólares internacionales de 2022 utilizando PPP)



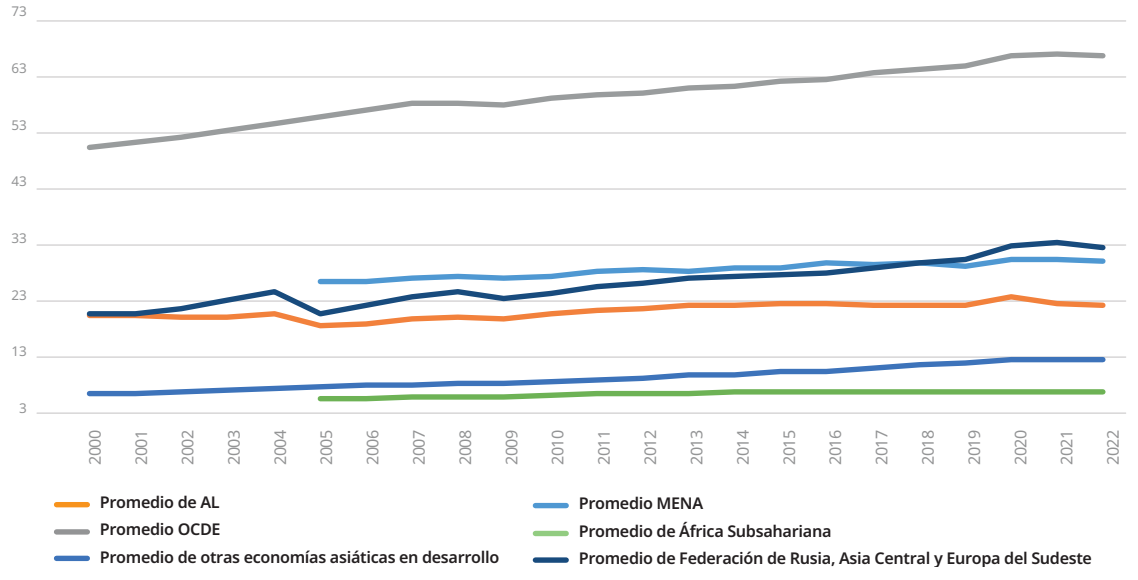
Fuente: The Conference Board (2023).

El gráfico 1.2.2 presenta la trayectoria de la productividad laboral por hora trabajada en América Latina durante el periodo de 2000 a 2022. Se puede observar una creciente brecha en la productividad laboral por hora trabajada entre el promedio de los países de la región y los de la OCDE. Además, se observa que la productividad por hora ha crecido más rápido en otras regiones que en AL. Este es el caso de la Federación de Rusia, Asia Central y Europa del Sudeste. En el año 2000, esta región registró una productividad por hora de 20,5 dólares y para 2022 su productividad por hora fue de 32,6 dólares. Siguiendo el mismo orden, estos valores para AL fueron 20,2 dólares y 22,1 dólares. Asimismo, se observa que de 2000 a 2022, las economías asiáticas en desarrollo aumentaron en dos veces su productividad por hora trabajada, de 6,4 dólares a 12,3 dólares por hora.

Gráfico 1.2.2

Productividad laboral por hora trabajada, 2000-2022

(dólares internacionales de 2022 utilizando PPP)



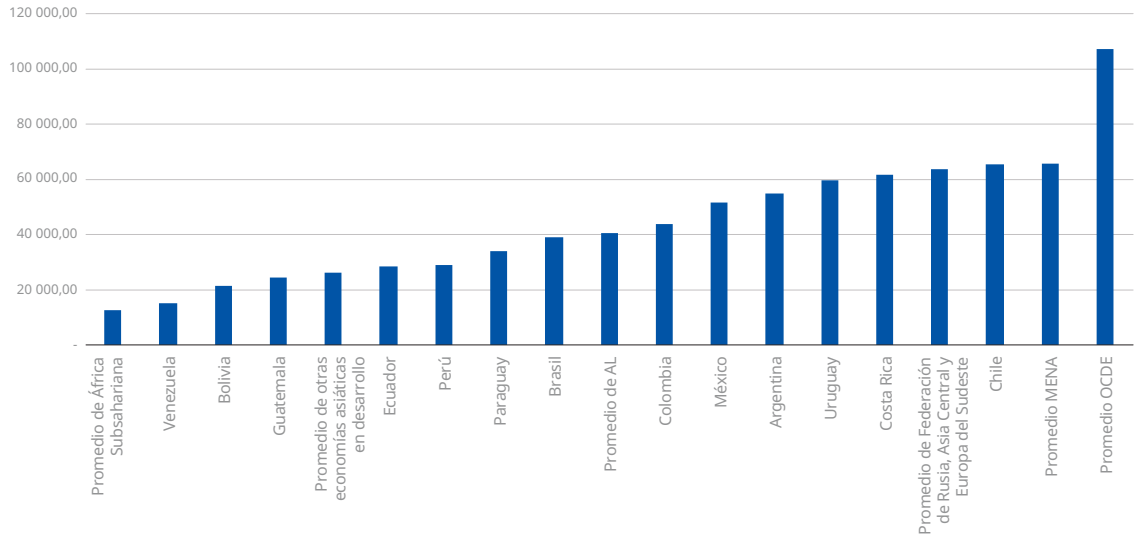
Fuente: The Conference Board (2023).

En el caso de la productividad laboral por persona empleada, Venezuela también registró el valor más bajo de América Latina en 2022, que fue 2,6 veces menor que el promedio de AL y siete veces menor que el promedio de la OCDE. Bolivia ocupó el segundo lugar más bajo con 21 387 dólares por persona, casi la mitad del promedio de AL. Estos datos indican cómo Venezuela y Bolivia están significativamente rezagadas en materia de productividad laboral respecto al promedio de AL. En el caso de Bolivia, se observó que, en el periodo de 2005 a 2022, hubo un incremento en la productividad laboral por persona empleada; sin embargo, la diferencia con el resto de la región persistió. En 2022, Chile registró la mayor productividad por persona empleada en AL, con un valor de 65 460 dólares. Sin embargo, la productividad por persona en Chile y en todas las economías latinoamericanas estuvo por debajo del nivel promedio de la OCDE y el de los países MENA.

Gráfico 1.3.1

Productividad laboral por persona empleada, 2022

(dólares internacionales de 2022 utilizando PPP)

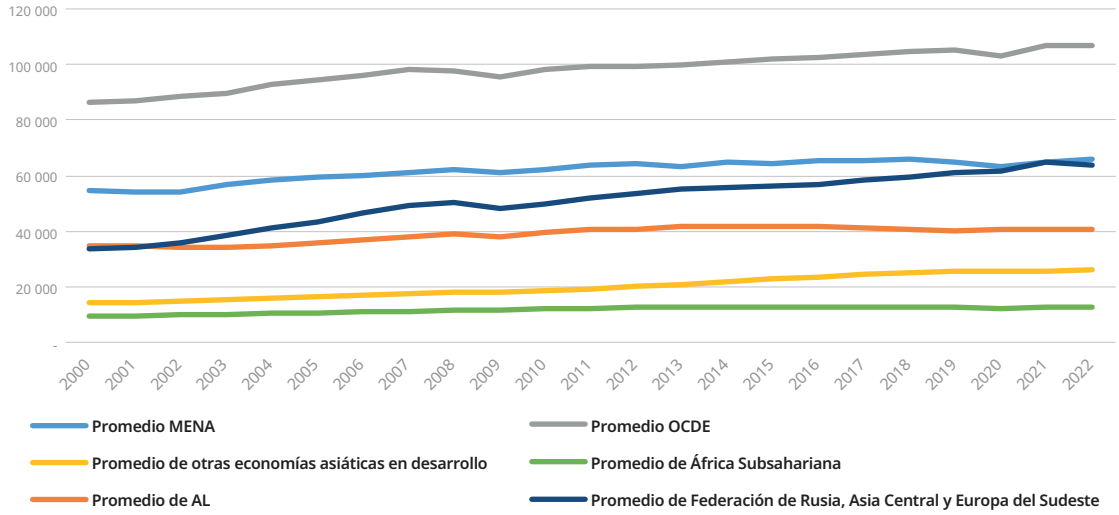


Fuente: The Conference Board (2023).

En el gráfico 1.3.2, se observa la tendencia de la productividad laboral por persona empleada para el periodo de 2000 a 2022, en distintas regiones de países en desarrollo y en las economías de la OCDE. Una problemática que se observa en este gráfico es el bajo crecimiento de la productividad por persona empleada en AL. En este ámbito, la productividad de la Federación de Rusia, Asia Central y Europa del Sudeste registraba un valor menor que el promedio de AL en el año 2000. Sin embargo, en 2022, la productividad en dicha región fue significativamente mayor que la de AL. Por otro lado, mientras que en América Latina y África Subsahariana la productividad por persona empleada avanzó marginalmente en dicho periodo, en las economías asiáticas en desarrollo la productividad laboral por persona se multiplicó por 1,8. Además de ello, la brecha de productividad laboral por persona entre América Latina y el promedio de la OCDE aumentó significativamente durante este periodo.

Gráfico 1.3.2

Productividad laboral por persona, 2000-2022



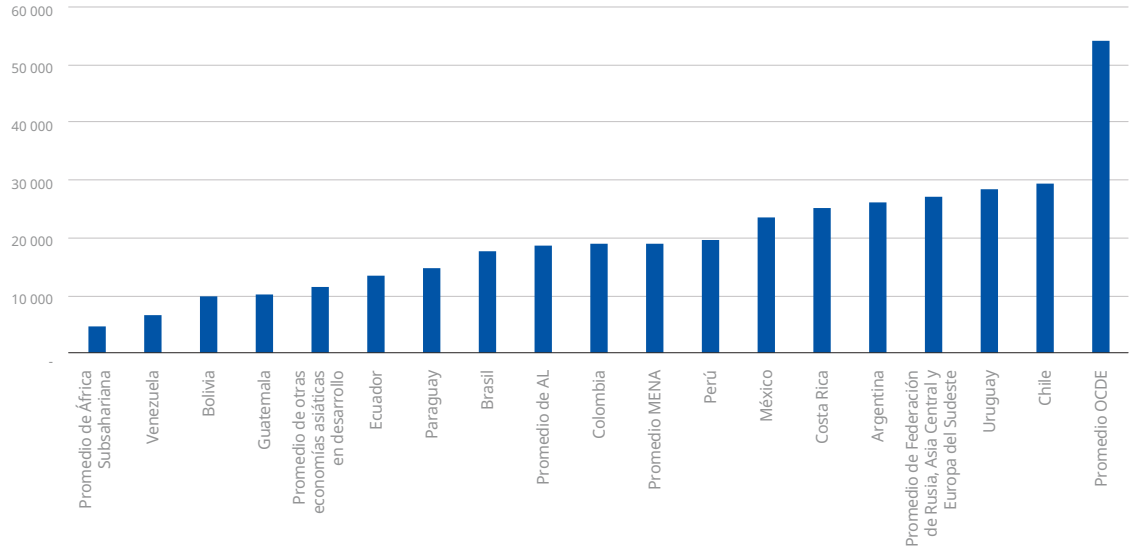
Fuente: The Conference Board (2023).

El PIB per cápita es un indicador que refleja los estándares de vida de una población. Mayores niveles de PIB per cápita en una economía indican una mayor capacidad de consumo de bienes y servicios en la población. Este indicador es distinto del PIB por persona empleada, ya que considera a toda la población del país, no solamente a los que forman parte de la fuerza laboral. El gráfico 1.4.1 presenta las estadísticas de PIB per cápita de América Latina. En el año 2022, Venezuela y Bolivia reportaron los PIB per cápita más bajos entre las economías de la región, con valores de 6 629 y 9 827 dólares, respectivamente. Esto coincide plenamente con el caso de la productividad laboral por persona, en el que Venezuela y Bolivia ocupan también los últimos lugares en América Latina, lo que resalta la importancia de implementar mejoras regulatorias y de política pública para acelerar el crecimiento de la productividad.

El promedio del PIB per cápita en América Latina fue de 18 724 dólares, nivel muy similar a lo observado en el promedio del Medio Oriente y el Norte de África. Sin embargo, es muy importante destacar la varianza regional, ya que la economía con mayor PIB per cápita de América Latina (Chile) tiene 4,4 veces el de la economía con menor PIB per cápita (Venezuela). Por otro lado, el promedio de PIB per cápita de los países de la OCDE es significativamente más elevado que el de cualquiera de las economías latinoamericanas. Estos datos resaltan las disparidades de ingreso entre los países de AL, así como la brecha de la región con respecto al promedio de las economías de la OCDE.

Gráfico 1.4.1

PIB per cápita (dólares internacionales de 2022 utilizando PPP), 2022

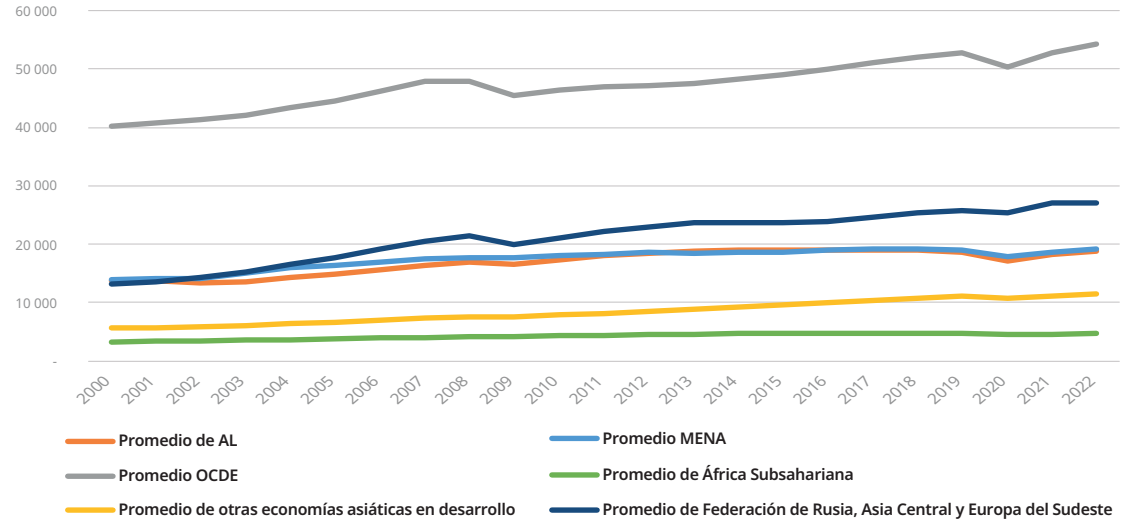


Fuente: The Conference Board (2023).

El gráfico 1.4.2 muestra el camino del PIB per cápita, en el periodo de 2000 a 2022, para América Latina y otros grupos de países. Se observa que tanto América Latina, como el promedio de la Federación de Rusia, Asia Central y Europa del Sudeste, registraban niveles muy similares de PIB per cápita en el año 2000. Sin embargo, el PIB per cápita de la Federación de Rusia, Asia Central y Europa del Sudeste creció a una tasa mayor y, para el año 2022, fue alrededor de 1,4 veces lo registrado en América Latina. Del mismo modo, en el gráfico 1.4.2 se puede observar cómo la brecha de ingreso per cápita entre América Latina y los países OCDE se incrementó de manera importante en este mismo periodo.

Gráfico 1.4.2

Tendencia del PIB per cápita (dólares internacionales de 2022 utilizando PPP), 2022



Fuente: The Conference Board (2023).

Capítulo 2

Entorno para hacer negocios

1. Estabilidad macroeconómica

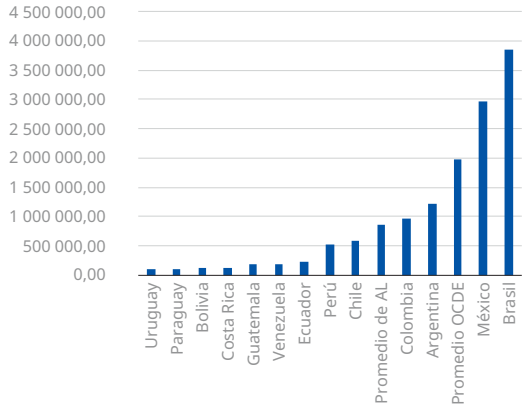
La estabilidad macroeconómica, reflejada como políticas fiscales saludables, una deuda pública sostenible y un crecimiento de la economía en el largo plazo (Ocampo 2005), es un factor clave para crear un entorno de negocios propicio para la productividad. Una búsqueda de estabilidad económica significa estabilizar e impulsar la demanda agregada, al mismo tiempo que se solucionan los problemas estructurales de la oferta en una economía (OIT 2020a). En este sentido, es importante decir que la productividad y el crecimiento económico están intrínsecamente relacionados. La productividad se reconoce como un motor clave para el crecimiento económico (OIT 2021a). La desaceleración y/o caídas del crecimiento económico, en especial si resultan en crisis económicas, conllevan una debilitación del *stock* de capital y los mercados laborales (OCDE 2016). Esto resulta en una mayor desaceleración del crecimiento de la productividad total de los factores, el cual ha registrado un desempeño débil a nivel global (OCDE 2016).

La economía global ha sufrido choques importantes en los últimos años, lo que ha llevado a una desaceleración de la actividad económica a nivel mundial. El impacto de la pandemia de COVID-19, el conflicto armado entre la Federación de Rusia y Ucrania, así como el aumento de la inflación, han llevado a predicciones poco optimistas respecto al crecimiento de la economía en los años siguientes. Asimismo, en un intento por controlar la inflación, los bancos centrales han incrementado las tasas de interés, lo que ha llevado a mayores costos de financiamiento de la deuda (CEPAL 2022c, 2023a). La economía de América Latina se ha visto afectada por la incertidumbre del contexto internacional. Por lo tanto, las variables que se ilustran en este apartado macroeconómico pueden reportar cifras claramente atípicas para los estándares de la región.

The Conference Board publica el PIB real de numerosas economías alrededor del mundo, incluidas 13 economías de América Latina, utilizando dólares de poder de paridad de compra para que el indicador sea comparable entre países. En el gráfico 2.1.1, se observa que las economías más grandes de la región, es decir, aquellas con los mayores niveles de PIB real, son Brasil, México, Argentina y Colombia (en ese orden en particular). En el extremo opuesto, se encuentran las economías más pequeñas de la región: Uruguay y Paraguay. En términos del crecimiento económico, el año 2022 mostró una importante varianza para las economías latinoamericanas: mientras que Panamá registró un crecimiento cercano al 11 por ciento anual, economías como la de Paraguay mostraron un avance prácticamente nulo (Banco Mundial 2023). A nivel regional, el periodo que abarca entre 1990 y 2022 se ha caracterizado por un crecimiento económico paulatino en América Latina, a un ritmo marginalmente superior al del promedio de las economías de la OCDE. Asimismo, en el par de años que correspondieron a la pandemia de COVID-19, la región registró valores del PIB inferiores al nivel de 2019. Fue en el año 2022 que el PIB regional se recuperó y alcanzó y superó el valor observado previo a la crisis.

Gráfico 2.1.1

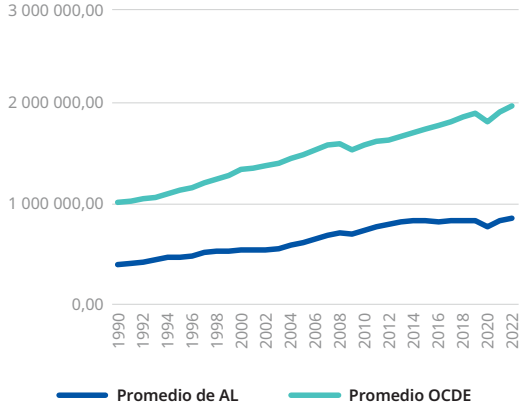
PIB real (millones de dólares de 2022, PPC), 2022



Fuente: The Conference Board (2023).

Gráfico 2.1.2

Tendencia del PIB real (millones de dólares, PPC)



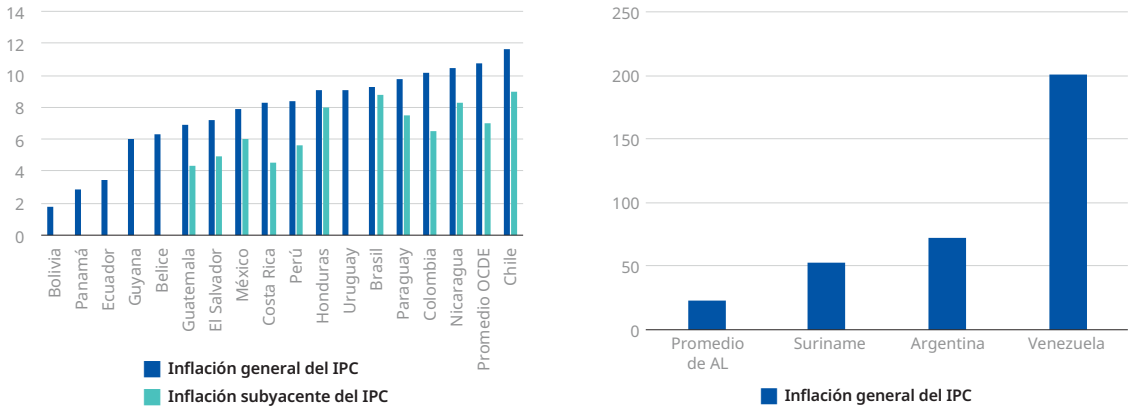
Fuente: The Conference Board (2023).

La estabilidad de precios en una economía es fundamental para brindar confianza a los consumidores y mantener estable la demanda agregada de la economía (Ocampo 2005). La inflación del índice de precios al consumidor (IPC) mide el cambio en los precios de la canasta de consumo de cada país; mientras que la inflación subyacente del IPC mide el cambio en los precios de la canasta de consumo, excluyendo los bienes de comida y energía. En el gráfico 2.1.3, se observa que el país de AL con menor inflación en 2022 fue Bolivia, con una inflación general del IPC del 1,7 por ciento; le sigue la inflación general de Panamá, con una tasa del 2,8 por ciento. Adicionalmente, la estabilidad de los precios de los hidrocarburos durante este periodo puede ser explicada por el control de precios para algunos productos de la canasta familiar, así como por las subvenciones.

Para los países con datos disponibles sobre inflación subyacente, se observa que Costa Rica reportó la más baja, con una tasa del 4,5 por ciento, sin embargo, para ese mismo año, su inflación general fue del 8,2 por ciento. Estas tasas siguen estando por debajo de las que se registraron para el promedio de la OCDE, las cuales fueron un 10,7 por ciento para la inflación general del IPC y un 7 por ciento para la inflación subyacente. Las economías con mayor inflación subyacente fueron Brasil y Chile, con tasas de alrededor del 8 por ciento. Asimismo, las economías con mayores tasas de inflación general del IPC fueron Suriname, Argentina y Venezuela. Los primeros dos países registraron tasas de inflación de dos dígitos, mientras que la de Venezuela llegó a los tres dígitos.

Gráfico 2.1.3

Inflación general del IPC y subyacente (excluyendo comida y energía del IPC), 2022

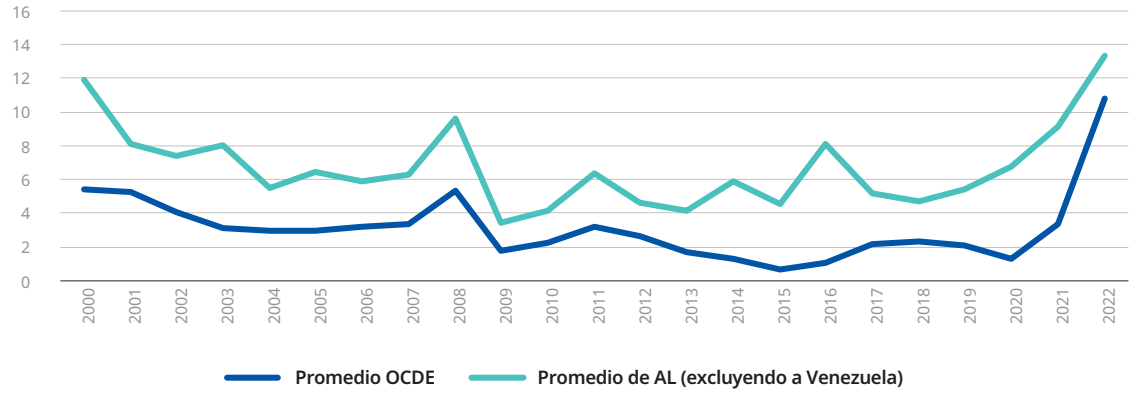


Fuente: Banco Mundial (2021c).

En el gráfico 2.1.4, se puede observar la tendencia en los niveles promedio de inflación del IPC para América Latina. Este gráfico no considera la inflación de Venezuela, debido a que esta economía ha registrado tasas de tres dígitos desde el año 2015 y se considera como un dato sumamente atípico en la región. Con esto en mente, el gráfico muestra cómo la inflación general del IPC de los países de la OCDE ha sido consistentemente menor que la inflación promedio de AL. Además, las tasas de inflación superaron los niveles registrados previamente a la pandemia de COVID-19, ya que desde el año 2020 han registrado incrementos marginales. En 2022, tanto la OCDE como AL registraron las tasas de inflación más altas desde el año 2000, con un 13,3 por ciento para la región y un 10,7 por ciento para el promedio OCDE. Los menores incrementos de precios en las economías de la OCDE contribuyen a mantener la estabilidad en los niveles de consumo dentro de la economía.

Gráfico 2.1.4

Inflación general del IPC – Tendencia



Fuente: Banco Mundial (2021c).

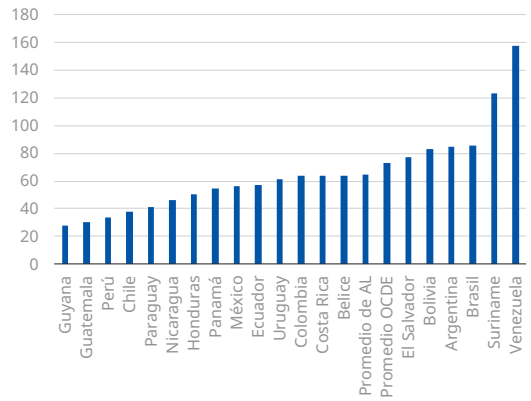
La deuda pública puede ser usada como un instrumento para desarrollar importantes proyectos y programas que impulsen la productividad y, a su vez, lleven a un mayor crecimiento económico que disminuya los riesgos de una deuda no sostenible (FMI 2020). De manera alternativa, un alto endeudamiento puede significar una alta presión de repago y llevar a montos anuales en servicios de deudas que sobrecargan las finanzas públicas. Por lo tanto, para las economías latinoamericanas es importante encontrar un balance en las finanzas públicas que permita hacer un uso eficiente y responsable de los recursos públicos.

La economía con menor deuda pública como porcentaje del PIB fue Guyana en el año 2022, con un valor del 27,8 por ciento. En este año, el promedio de deuda en las economías de AL fue del 64,9 por ciento, mientras que los países de la OCDE promediaron un 73 por ciento. Por otro lado, Suriname y Venezuela fueron los países con deudas públicas como porcentajes del PIB más elevadas, y rebasaron el 100 por ciento en ambos casos. Asimismo, Brasil registró una deuda pública del 85 por ciento del PIB, que es 20 puntos porcentuales mayor que el promedio de la región (gráfico 2.1.5). Un estudio reciente de la deuda pública en América Latina destaca que la economía de Brasil enfrenta el reto de mantener un crecimiento promedio de la economía del 1,2 por ciento en el periodo de 2022 a 2027 si desea mantener la sostenibilidad de su deuda (Ocampo y Eyzaguirre 2023).

En el gráfico 2.1.6, se observa que el promedio de deuda pública del gobierno general como porcentaje del PIB ha aumentado desde el año 2007, para los países de AL y las economías que pertenecen a la OCDE. En el periodo que abarca de 2007 a 2022, el promedio de deuda de las economías de AL ha sido más bajo que el promedio de la OCDE, a excepción del año 2020. En este año, el promedio de la OCDE fue del 78,4 por ciento y el de AL fue del 80,7 por ciento, debido a las necesidades de gasto atípicas ocasionadas por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. A partir de este año, se observó una tendencia hacia menores niveles de endeudamiento en ambos grupos de países. Sin embargo, el nivel de deuda pública como porcentaje del PIB en América Latina aún no baja al nivel que se observaba en el año 2019, en términos del porcentaje del PIB.

Gráfico 2.1.5

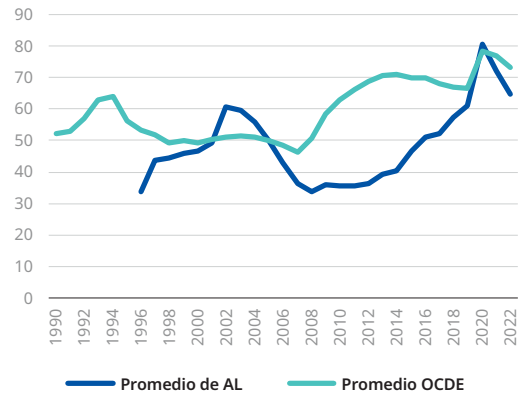
Deuda del gobierno general como porcentaje del PIB, 2022



Fuente: FMI (2023b).

Gráfico 2.1.6

Deuda del gobierno general como porcentaje del PIB

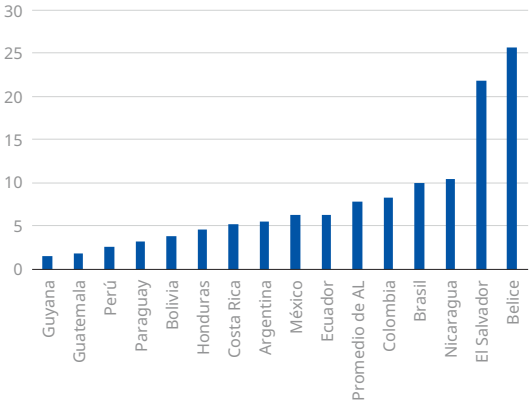


Fuente: FMI (2023b).

El gráfico 2.1.7 muestra el nivel de pagos a los servicios de la deuda externa otorgada por el Fondo Monetario Internacional como porcentaje del ingreso nacional bruto (INB), respecto a las economías de América Latina con datos disponibles a 2021. En este ámbito, Guyana y Guatemala son las economías con los valores más bajos para ese año, con 1,4 y 1,8 por ciento respectivamente. Por otro lado, los valores más altos fueron 21,8 por ciento para El Salvador y 25,6 por ciento para Belice. Estos valores fueron alrededor de tres veces mayores que el promedio de AL, que fue del 7,7 por ciento para el año 2021. A nivel regional, el gráfico 2.1.8 muestra que el promedio de pagos a los servicios de deuda externa otorgados por el FMI como porcentaje del INB ha ido aumentando paulatinamente desde el año 2010, cuando se encontraba en un nivel promedio del 3,8 por ciento del INB. A partir de este año, el porcentaje aumentó hasta registrar un valor del 7,7 por ciento en 2021.

Gráfico 2.1.7

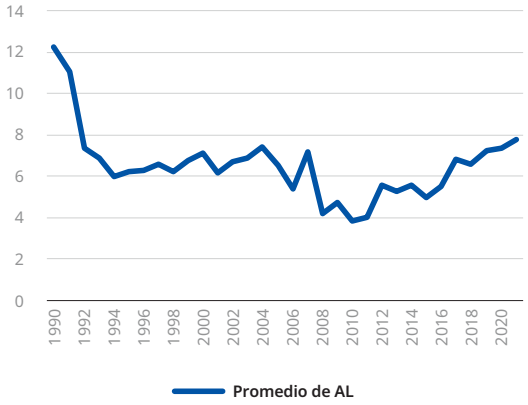
Pagos al servicio de la deuda externa otorgada por el FMI como porcentaje del INB, 2021



Fuente: Banco Mundial (2023c).

Gráfico 2.1.8

Tendencia de los pagos al servicio de la deuda externa otorgada por el FMI como porcentaje del INB



Fuente: Banco Mundial (2023c).

2. Desarrollo de habilidades y calidad educativa

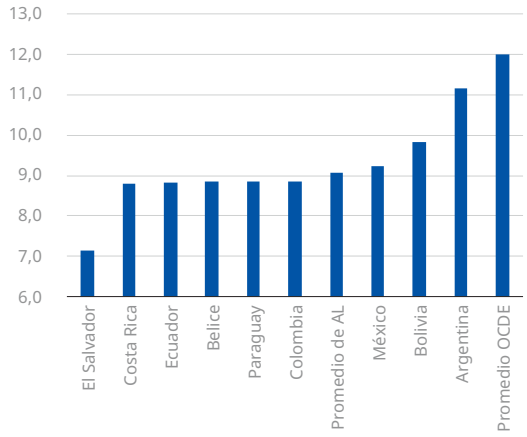
La educación es uno de los factores con mayor relación con la productividad de un país, ya que sienta las bases para una fuerza laboral capacitada y de alto valor agregado (Becker 1994; CBI 2017; OIT 2020a). La educación es esencial para el desarrollo de habilidades de la fuerza laboral y para su contribución a la productividad de las empresas (OIT 2020a). En América Latina, durante el periodo de 2006 a 2017, la satisfacción de la población con el sistema de educación decreció significativamente, del 63 al 56 por ciento (OCDE 2019). En esta temática, una de las variables más importantes para entender el rezago educativo de la región es la escolaridad promedio, indicador que ilustra el potencial de un trabajador para producir alto valor agregado (OIT 2020a).

En el gráfico 2.2.1, se observan los años de escolaridad promedio para las economías de América Latina con datos disponibles. En 2020, último año con datos disponibles, El Salvador registró el valor más bajo, con 7,2 años, el cual es significativamente menor que el segundo valor más bajo, que fue de 8,8 años para Costa Rica. En el caso de esta economía, la baja asistencia de los niños en la educación preescolar puede representar un obstáculo para el rendimiento académico y la permanencia en la escuela; asimismo, el país enfrenta el reto de promover el desarrollo de habilidades en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática (STEM) en la población (OCDE 2017).

México, Bolivia y Argentina son las tres economías que se encuentran por encima de la escolaridad promedio de AL, con escolaridades de 9,2, 9,8 y 11,1 años respectivamente. Sin embargo, el promedio de los países de la OCDE fue de 12 años para ese mismo año, por lo que se observa que ninguna economía en AL alcanza la escolaridad promedio del grupo de países de la OCDE. A lo largo del periodo de 2006 a 2020, la escolaridad promedio en AL ha experimentado un aumento. Sin embargo, este progreso no ha sido suficiente para cerrar la brecha con el promedio de los países de la OCDE. En 2006, el promedio de años de escolaridad en AL fue de 7,1, mientras que en la OCDE fue de 11. Para el año 2020, el promedio de años de escolaridad en AL aumentó a 9,1, pero en la OCDE fue de 12. Estos datos revelan que AL ha avanzado en cuanto a la escolaridad promedio de su población, pero aún se encuentra rezagada por tres años en promedio con respecto a los países de la OCDE.

Gráfico 2.2.1

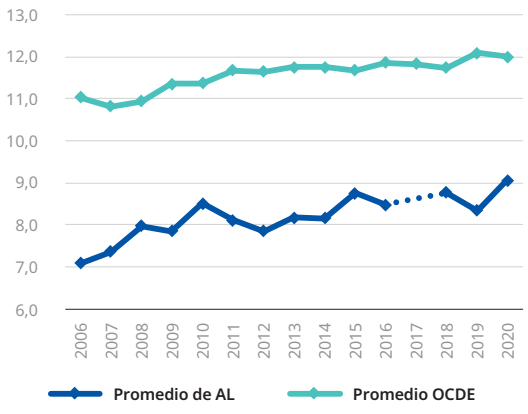
Escolaridad promedio, 2020



Fuente: UNESCO (2023a).

Gráfico 2.2.2

Tendencia de la escolaridad promedio



Fuente: UNESCO (2023a).

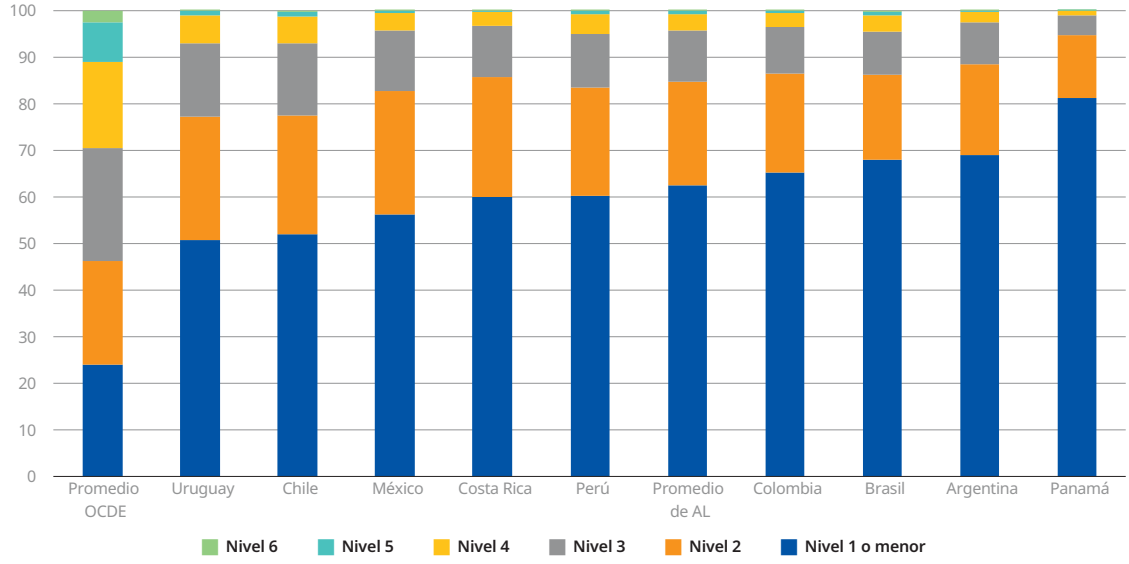
Sin embargo, incrementar la escolaridad promedio no es suficiente para impulsar el potencial del capital humano en una economía, para ello también es esencial mejorar la calidad educativa, la cual se puede medir y comparar a través de la prueba PISA. Un aumento en el rendimiento de los estudiantes de la prueba PISA está asociado con incrementos de hasta un 1,74 por ciento en el PIB per cápita (Hanushek y Woessmann 2012). Esta prueba mide las competencias académicas en matemática, ciencias y lectura. Con ello, ofrece un perfil de las habilidades promedio de los estudiantes de 15 años de los países donde se aplica el examen. Los resultados se segmentan en seis categorías, de menor a mayor nivel de habilidades, en donde la categoría 1 representa el peor resultado.

En el gráfico 2.2.3, se observa el porcentaje de estudiantes en cada una de las seis categorías. Se puede observar que la economía que contaba con un menor porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos de matemática (categoría 1) fue Uruguay, con un valor del 50,7 por ciento en el año 2018. En el extremo opuesto, Panamá fue la economía con mayor porcentaje de estudiantes en este grupo: casi ocho de cada diez estudiantes de 15 años se encontraban en la última categoría. El caso de Argentina es digno de análisis, ya que es el segundo país con el porcentaje más alto de estudiantes en la categoría más baja de habilidades matemáticas, a pesar de ser el país con el nivel de escolaridad promedio más alto de América Latina.

Ante las estadísticas nacionales, también es importante reconocer que cada economía puede exhibir resultados significativamente diversos entre sus diferentes regiones o estados. En este ámbito, el financiamiento de la educación pública en Argentina proviene de los gobiernos estatales (88 por ciento); en el caso de Brasil, el 44 por ciento proviene de gobiernos estatales y el 42 por ciento, de gobiernos municipales; mientras que, en el caso de Chile, México y Colombia, la mayoría del financiamiento proviene del gobierno central, lo que permite una distribución más uniforme de los recursos (UNESCO 2020). A nivel regional, todos los países de América Latina con datos disponibles reportaron rendimientos académicos más bajos que el promedio de la OCDE. en el año 2018..

Gráfico 2.2.3

Resultados de la prueba PISA en la asignatura de matemática, 2018

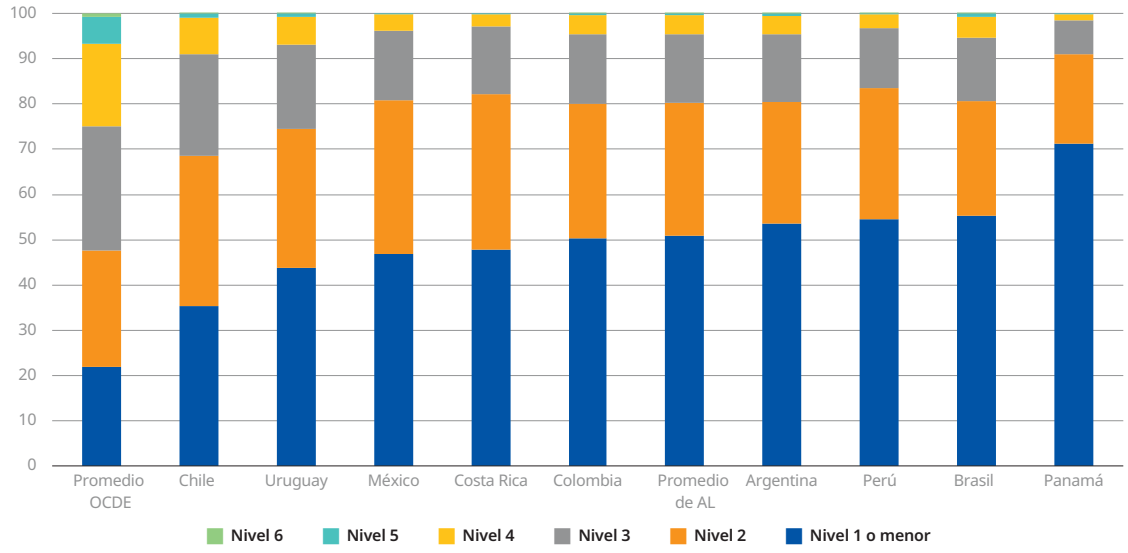


Fuente: Banco Mundial (2023a).

En el gráfico 2.2.4, se observan los resultados para las competencias en ciencias en el año 2018. Chile registró el porcentaje más bajo de estudiantes de 15 años que no cuentan con las competencias mínimas en ciencias, con un valor del 35,3 por ciento. Sin embargo, los países de la OCDE promediaron uno más bajo, del 21,9 por ciento, mientras que el de AL fue del 50,9 por ciento para ese mismo año. En Chile, se creó la reforma Subvención Escolar Preferencial, la cual otorga recursos adicionales a escuelas que atienden a estudiantes pobres, proporcionando una cantidad fija por estudiante más un aumento basado en la concentración de pobreza, lo que combina rendición de cuentas y financiamiento estatal para mejorar la educación a largo plazo. Con ello, se ha observado un impacto positivo en la inclusión y el rendimiento estudiantiles (UNESCO 2020). Panamá volvió a registrar el valor más alto de estudiantes de 15 años sin las competencias mínimas, del 71,2 por ciento.

Gráfico 2.2.4

Resultados de la prueba PISA en la asignatura de ciencias, 2018

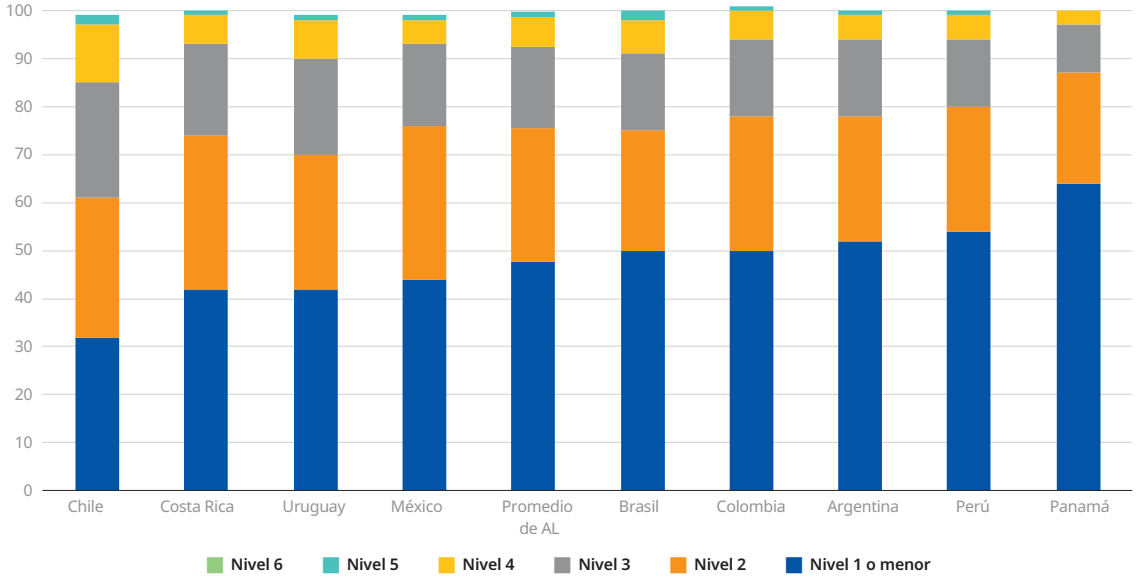


Fuente: Banco Mundial (2023a).

El gráfico 2.2.5 muestra los resultados de la prueba PISA aplicada en el año 2018 para las competencias en lectura. En promedio, en América Latina, casi cinco de cada diez estudiantes carecían de dichas habilidades. En este caso, Chile vuelve a ser el país con menor porcentaje de estudiantes de 15 años que no cuentan con las competencias mínimas en lectura. Por otro lado, Panamá registró el mayor porcentaje de ellos, con un valor del 64 por ciento. Es decir, seis de cada diez estudiantes panameños no contaban con las competencias mínimas en ciencias en 2018. En resumen, Panamá es el país que reportó los resultados más bajos en comparación con el resto de los países de AL en 2018. Por otro lado, Uruguay y Chile registraron los mejores resultados (entendidos como el mayor número de estudiantes con las competencias mínimas).

Gráfico 2.2.5

Resultados de la prueba PISA en la asignatura de lectura, 2018

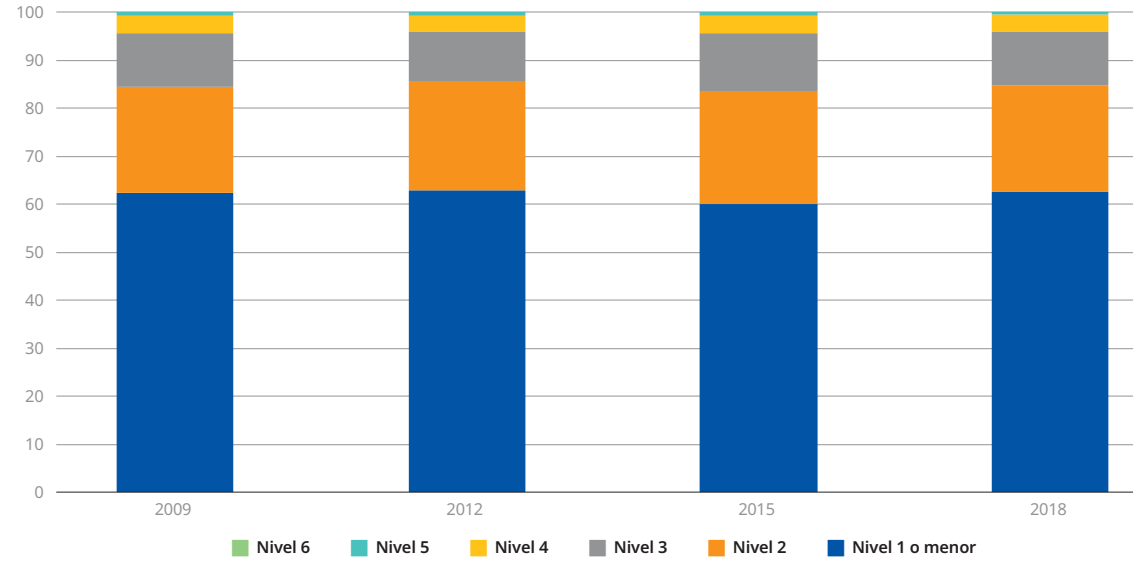


Fuente: Banco Mundial (2023a).

Debido a que la prueba PISA se aplica cada tres años, se tienen resultados para cuatro años en el periodo de 2009 a 2018. Con esto en mente, se observa que, para 2009, 2012, 2015 y 2018, alrededor de seis de cada diez estudiantes latinoamericanos no contaban con el mínimo de competencias en matemática. En otras palabras, el gráfico 2.2.6 ilustra que, en América Latina, no se han observado mejoras en términos de aumento del porcentaje de estudiantes con el mínimo de competencias en el área de matemática. Con ello, la brecha en términos de calidad educativa frente a las economías de la OCDE se ha mantenido, lo cual mitiga el potencial del capital humano latinoamericano y frena el crecimiento de la productividad laboral de la región.

Gráfico 2.2.6

Tendencia de los resultados de la prueba PISA en la asignatura de matemática para América Latina



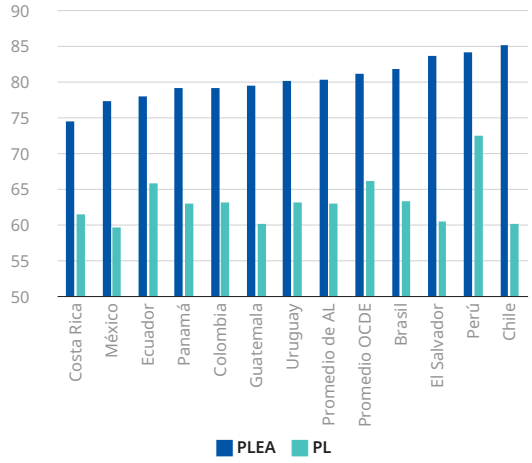
Fuente: Banco Mundial (2023a).

La tasa de participación laboral (PL) se calcula como la fuerza laboral de una economía sobre el total de personas en edad de trabajar; asimismo, la tasa de participación laboral con educación avanzada (PLEA) muestra la proporción de fuerza laboral con educación avanzada del total de personas en edad de trabajar que registran los niveles de educación más altos. Se observa una brecha entre las dos tasas de participación para todas las economías de la región, donde la PLEA fue significativamente mayor que la PL, para todas las economías de la región, en el año 2022. Estas brechas destacan que invertir en un sistema de educación que aumente la escolaridad puede influir de manera positiva en la participación laboral de la población, incrementando la reserva de talento a la cual las empresas tienen acceso.

El gráfico 2.2.7 muestra que Costa Rica registró la tasa más baja de PLEA, 74,5 por ciento, con una PL del 61,5 por ciento. La economía con mayor PLEA fue Chile, con una tasa del 85,1 por ciento; sin embargo, registró una de las tasas más bajas de PL, un 60,1 por ciento. Por otro lado, la economía con menor PL fue México, con una tasa del 59,8 por ciento, mientras que la mayor tasa de PL fue reportada por Perú, con un 72,5 por ciento. A nivel regional, el gráfico 2.2.8 muestra que la PLEA ha disminuido para los países de AL y los que pertenecen a la OCDE, en el periodo de 2002 a 2019. A partir de la crisis de la pandemia de COVID-19, se observó una caída drástica en la PLEA de América Latina y, en menor medida, en la de los países de la OCDE, seguida de una recuperación en ambos niveles.

Gráfico 2.2.7

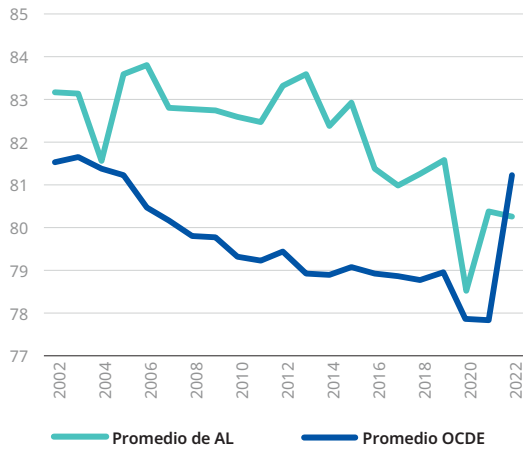
Tasa de participación laboral de la población total (PL) y con educación avanzada (PLEA), 2022



Fuente: ILOSTAT (2023a).

Gráfico 2.2.8

Tendencia de la tasa de participación laboral de la población con educación avanzada (PLEA)



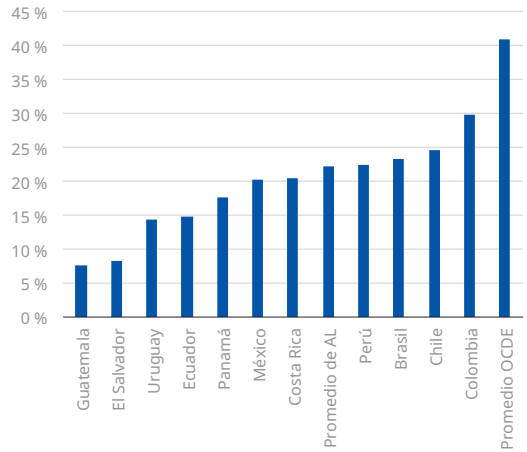
Fuente: ILOSTAT (2023a).

La proporción de fuerza laboral con educación avanzada (FLEA) puede reflejar la calidad de la fuerza laboral de un país. El gráfico 2.2.9 muestra la proporción de FLEA en el año 2022. Se observa que, en Guatemala, se registró el valor más bajo dentro de los países de AL con datos disponibles, un 7,4 por ciento. El Salvador registró el segundo valor más bajo, con un 8,3 por ciento para ese mismo año. Mientras tanto, las economías con mayores porcentajes fueron Chile, con 24,5 por ciento, y Colombia, con 29,8 por ciento, registrando valores más bajos que el promedio de la OCDE, del 40,8 por ciento. Estos países han lanzado programas como Mi Futuro, en Chile, y Graduados, en Colombia, como respuesta al creciente número de opciones educativas y laborales. Estas plataformas brindan información detallada sobre instituciones de educación superior, proyecciones laborales y carreras disponibles, lo que ayuda a los estudiantes a evaluar sus opciones y planificar su futuro profesional (Fiszbein, Cosentino y Cumsille 2016).

La trayectoria a lo largo del tiempo de la proporción de fuerza laboral con educación avanzada se observa en el gráfico 2.2.10, para el promedio de AL y el de los países de la OCDE. Este último grupo ha registrado consistentemente valores más altos en el periodo de 1998 a 2022. En el primer año que se observa, el promedio de AL fue del 11 por ciento y el promedio de la OCDE fue del 27 por ciento. En el año más reciente del gráfico, la proporción de fuerza laboral con educación avanzada fue del 22,1 por ciento para AL y del 40,9 por ciento para la OCDE. Así, se observa un aumento de aproximadamente 2 puntos porcentuales en la brecha. La educación superior en la región brinda la oportunidad de obtener empleos con mayores ingresos, ya que los graduados de programas universitarios obtienen, en promedio, un retorno adicional del 104 por ciento en comparación con quienes solo tienen diploma de secundaria, con una importante variación en el retorno según el tipo de institución y el campo de estudio elegido, y las carreras STEM son las que por lo general ofrecen mayores rendimientos (Valenzuela y Yáñez 2022).

Gráfico 2.2.9

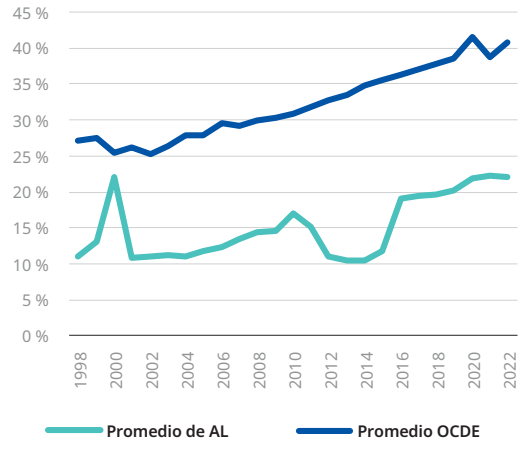
Proporción de la fuerza laboral con educación avanzada (FLEA), 2022



Fuente: ILOSTAT (2023a).

Gráfico 2.2.10

Proporción de la fuerza laboral con educación avanzada (FLEA), 2022



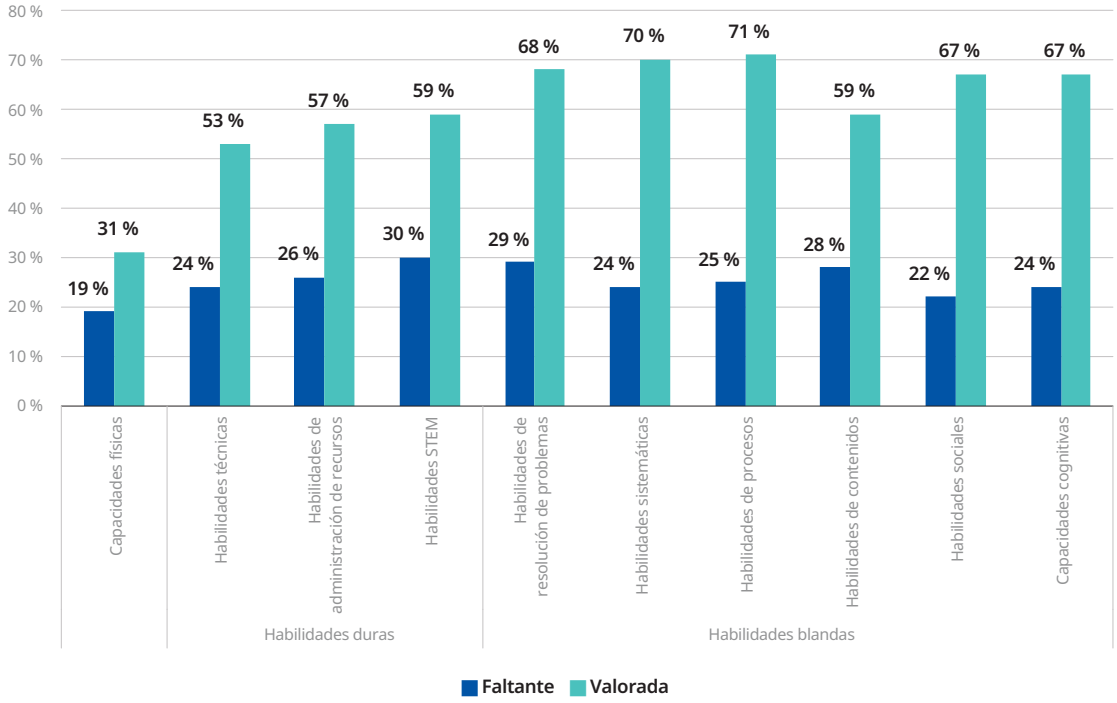
Fuente: ILOSTAT (2023a).

La pandemia de COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización y de adopción de tecnología, incrementando la presión en el desarrollo de nuevas habilidades en la fuerza laboral. Así, la economía digital podría llegar a representar el 24 por ciento del PIB mundial en el año 2025, lo que destaca la importancia de facilitar la transición de América Latina hacia la era digital (Rivas 2018). McKinsey (2018) estima que el tiempo empleado en habilidades tecnológicas aumentará en un 50 por ciento en el caso de la fuerza laboral de los Estados Unidos de América, y que la demanda por habilidades de programación aumentará en un 90 por ciento en el periodo de 2016 a 2030. Asimismo, un estudio del BID encuentra que el 50 por ciento de los trabajos en América Latina pueden ser automatizados (Rivas 2018). Por lo tanto, la alfabetización digital de la fuerza laboral es esencial. En países como Chile, Ecuador, Perú y México, menos de la mitad de los adultos que realizaron la prueba PIAAC (siglas en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de Competencias en Adultos) reportaron un conocimiento suficiente en el uso de computadoras para tareas profesionales básicas (OIT 2022b). Las empresas ya están enfrentando dificultades para ocupar vacantes debido a una brecha de habilidades en la fuerza laboral (OIT 2017). Para evitar que esta brecha sea persistente en el tiempo, es necesario invertir en el desarrollo de habilidades de los trabajadores.

En línea con los cambios que trajo la pandemia de COVID-19 en la adopción de nueva tecnología, las modalidades de trabajo y la demanda por habilidades, el BID publicó los resultados de la Encuesta sobre Adopción Tecnológica, Empleo y Comercio Internacional (2020), que se realizó a 500 empresas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. El documento destaca que el 19 por ciento de las empresas reportó una falta de capacidades físicas en su capital humano; el 27 por ciento, una falta de habilidades duras; y el 26 por ciento, una falta de personal con habilidades blandas (BID 2021). Así, el gráfico 2.2.11. muestra las habilidades específicas que constituyen cada categoría y las respuestas de la encuesta.

Gráfico 2.2.11

Capacidades físicas, habilidades duras y habilidades blandas que las empresas encuestadas valoran, así como las que consideran faltantes



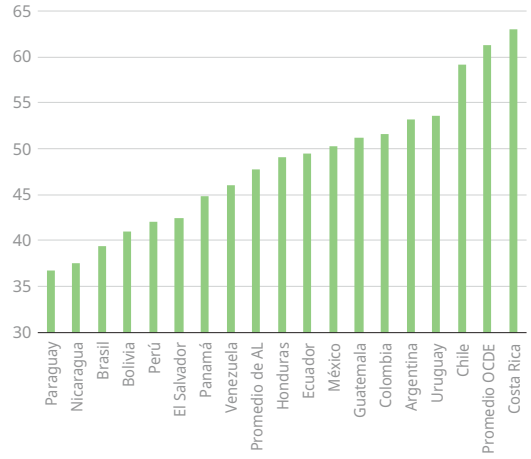
Fuente: elaboración propia con información de BID (2021).

El índice de competitividad global calcula un puntaje para la inversión en habilidades futuras y actuales de la fuerza laboral en una economía. El WEF utiliza una escala en la que 100 es el mejor puntaje. Esta medida refleja la calidad de las habilidades de la fuerza laboral dados los recursos de la economía invertidos en ellas. En el gráfico 2.2.12, se observa que Paraguay fue la economía con el puntaje más bajo para las habilidades actuales de la fuerza laboral en el año 2019, con un valor de 36,8, seguido por Nicaragua con 37,5 y Brasil con 39,4. La economía con el puntaje más alto fue Costa Rica, con un valor de 63, el cual fue más elevado que el promedio de la OCDE. En esta economía fue aprobada en 2019 la Ley de Educación Dual, mediante la cual el Instituto Nacional de Aprendizaje apoyaba con becas para el aprendizaje de los participantes en el programa (Smeck, Oviedo y Fiszbein 2020).

Por otro lado, el gráfico 2.2.13 muestra el *ranking* de países para la inversión en habilidades futuras de la fuerza laboral en 2019. En este caso, Nicaragua reportó el puntaje más bajo, con un valor de 37,7, en penúltimo lugar se encontraba El Salvador, con 40,0 y, en antepenúltimo, Paraguay, con 42,3. Las economías con los puntajes más altos fueron Argentina, con 61,6, Uruguay, con 64,7, y Costa Rica, con 70,0. Sin embargo, ninguna economía reportó un puntaje más alto que el promedio de la OCDE, de 71,0. Por lo tanto, es importante que las economías en América Latina inviertan estratégicamente en mejorar tanto las habilidades actualmente demandadas en el mercado laboral, como las que serán requeridas en el futuro.

Gráfico 2.2.12

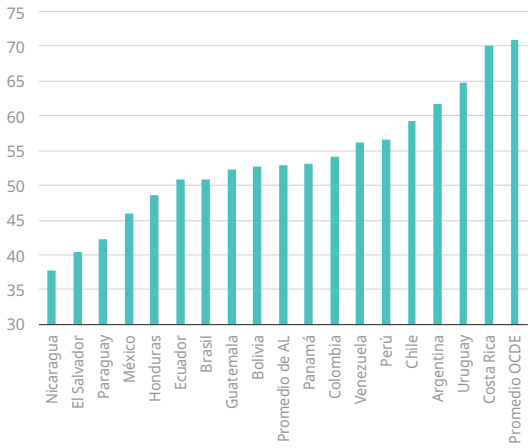
Puntaje de las habilidades actuales de la fuerza laboral



Fuente: WEF (2019).

Gráfico 2.2.13

Puntaje de las habilidades futuras de la fuerza laboral

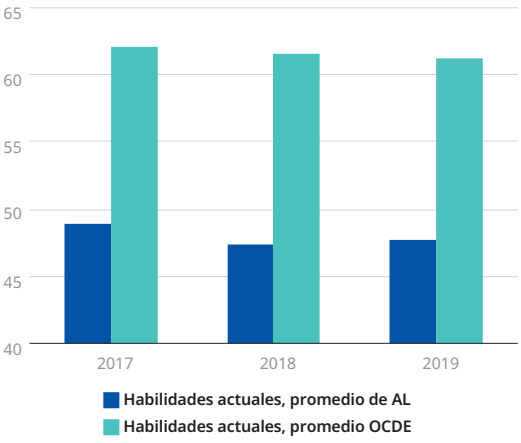


Fuente: WEF (2019).

En el gráfico 2.2.14, se observan los puntajes de las habilidades actuales de la fuerza laboral en el periodo de 2017 a 2019. En este rango, se observa una brecha entre los promedios de AL y de la OCDE. En 2017, el promedio de la OCDE fue un 26 por ciento mayor que el de AL. Para el año 2019, esta diferencia fue del 28 por ciento, por lo que se observó un aumento en la brecha de las habilidades actuales de la fuerza laboral. Adicionalmente, el puntaje de AL pasó de 48,9 a 47,7, registrando un retroceso. Debido a que los datos llegan hasta 2019, el impacto que la pandemia de COVID-19 tuvo en las habilidades de la fuerza laboral no se ve reflejado en el gráfico. Por otro lado, en términos de las habilidades futuras de la fuerza laboral, el gráfico 2.2.15 muestra el promedio de AL y el de los países de la OCDE. Así, la región ha registrado una tendencia casi plana en el periodo de 2017 a 2019.

Gráfico 2.2.14

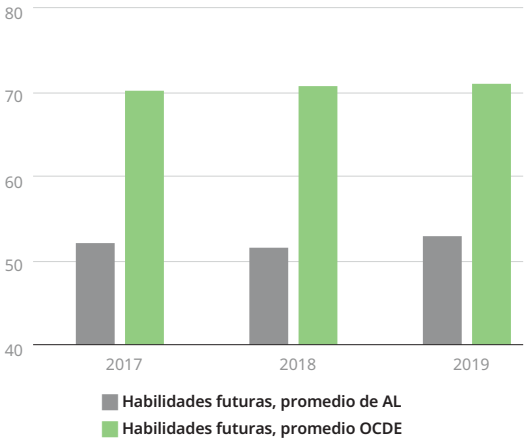
Tendencia del puntaje de las habilidades actuales en la fuerza laboral



Fuente: WEF (2019).

Gráfico 2.2.15

Tendencia del puntaje de las habilidades futuras en la fuerza laboral



Fuente: WEF (2019).

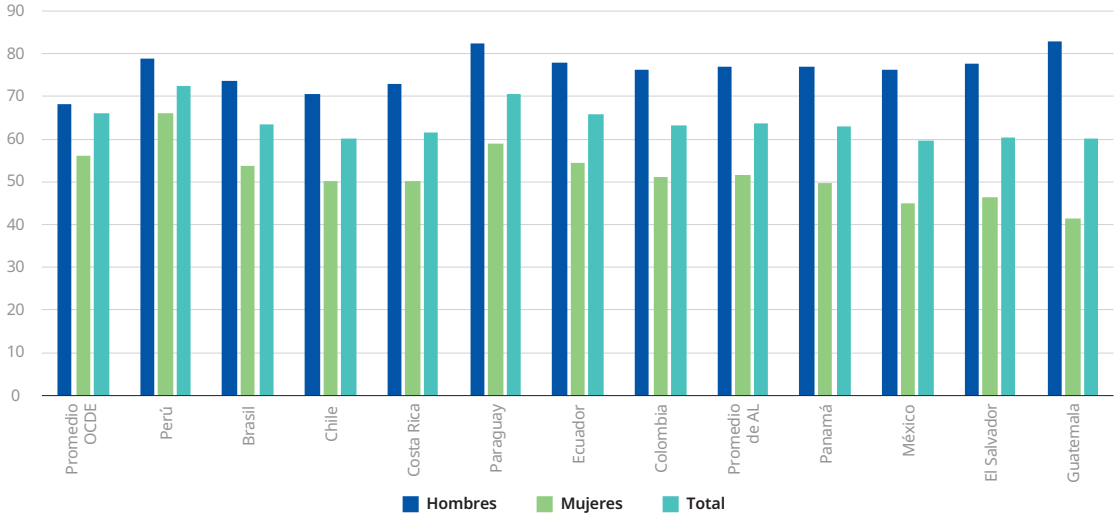
3. Mercados laborales inclusivos y flexibles

Ciertos grupos poblacionales cuentan con una mayor probabilidad de estar desempleados, subempleados o sufrir discriminación laboral. Por ejemplo, las mujeres, las personas de menor o mayor edad, aquellas con discapacidades, o las personas de color (OCDE 2013; FMI 2021; OIT 2022a). Esta situación no solo genera el desaprovechamiento de recursos humanos y su potencial productivo, sino que produce un efecto nocivo en los integrantes de estos grupos, que suelen ser más negativamente impactados durante los periodos de crisis (OIT 2022a; OCDE 2022). Los retornos a la inclusión laboral se han cuantificado ya en diversos estudios. Por ejemplo, Hsieh *et al.* (2019) estiman que la mejora del acceso laboral sobre la base de género y raza en los Estados Unidos de América, entre 1960 y 2010, explica del 20 al 40 por ciento del crecimiento del PIB. Otro estudio encuentra que la productividad agregada aumenta cuando hay mayores oportunidades de trabajo para las mujeres (Hazarika, Khraiche y Kutlu 2023). Promover la integración de los grupos vulnerables a la fuerza laboral garantiza su ingreso reduciendo la desigualdad de ingresos a nivel nacional. El FMI explica que esta desigualdad puede inhibir el crecimiento; asimismo, aumentar el ingreso de la población puede incrementar la demanda agregada y la productividad laboral (FMI 2021).

La tasa de participación laboral desagregada por sexo es relevante para observar si un grupo está sobrerrepresentado o subrepresentado en la fuerza laboral. El gráfico 2.3.1 muestra que todas las economías latinoamericanas con datos disponibles reportaron una tasa mayor para los hombres que para las mujeres, en 2022. Asimismo, Perú es la economía de AL con menor brecha, pues registra una tasa del 79,0 por ciento para los hombres y del 66,0 por ciento para las mujeres. Sin embargo, esta diferencia entre tasas fue de mayor magnitud que la que reportó el promedio de la OCDE, que registró una tasa del 68,0 por ciento para los hombres y del 56,1 por ciento para las mujeres. La economía con la mayor brecha de América Latina fue Guatemala, que registró una tasa de participación laboral para los hombres equivalente a dos veces la tasa de las mujeres. Además, la mayoría del empleo de las mujeres en el país es informal con una tasa del 84 por ciento en el año 2021 (ILO STAT 2023c). Un estudio del Banco Mundial encuentra que, en Guatemala, el PIB per cápita podría aumentar en un 35 por ciento aproximadamente si se cerraran las brechas de género en el empleo; el valor de esta estimación es mayor que el promedio de la región, que tendría un incremento de casi el 20 por ciento (Banco Mundial 2022).

Gráfico 2.3.1

Participación laboral desagregada por sexo, 2022

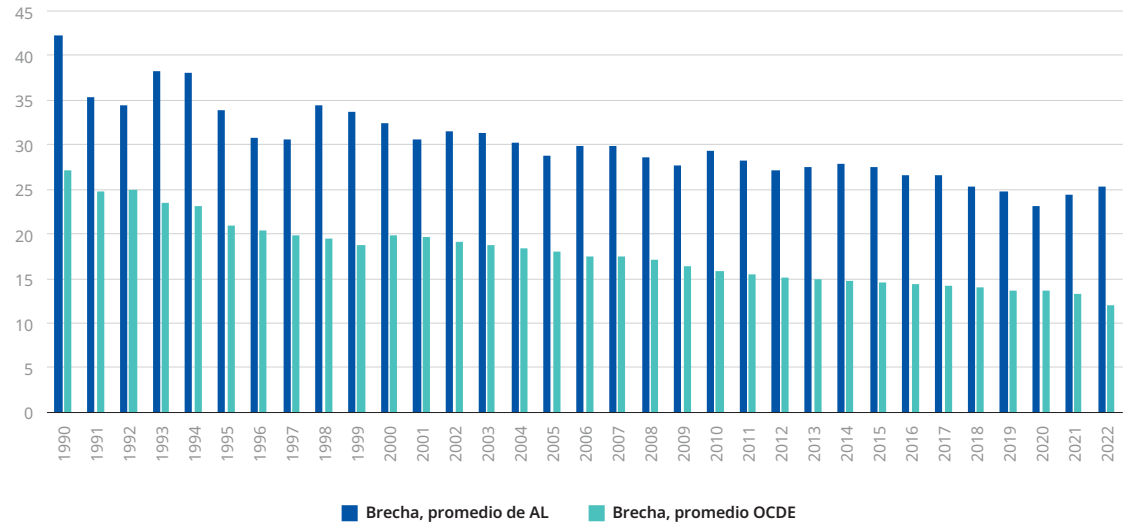


Fuente: ILOSTAT (2023b).

En el gráfico 2.3.2, se observan las diferencias en las tasas de participación laboral entre hombres y mujeres para el promedio de AL y el promedio de los países de la OCDE. Ambos grupos de países han registrado una reducción en las brechas a lo largo del periodo de 1990 a 2022. Sin embargo, AL registró mayores diferencias que la OCDE, en términos de participación laboral entre hombres y mujeres, para todos los años del gráfico. En 1990, las brechas fueron de 42,3 puntos porcentuales para el promedio de AL y 27,1 puntos porcentuales para el promedio de la OCDE. En el año 2022, los valores fueron de 25,4 y 11,9 puntos porcentuales respectivamente. Es decir, en el último año con datos disponibles (2022), los hombres latinoamericanos contaban con una tasa de participación laboral 25,4 puntos porcentuales mayor que la de las mujeres.

Gráfico 2.3.2

Tendencia de la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres en puntos porcentuales



Fuente: cálculo propio con datos de ILOSTAT (2023b).

El desempleo en un país representa la proporción de la fuerza laboral que está buscando empleo y no lo encuentra. Una economía con tasas de desempleo altas puede ser síntoma de diferentes problemáticas. Por ejemplo, de una falta de flexibilidad en los mercados laborales, cuando los trabajadores enfrentan problemas para integrarse a las actividades económicas que requieran sus habilidades. En este ámbito, reducir las barreras al empleo es una vía importante para que los trabajadores puedan desplazarse libremente hacia los sectores más productivos de la economía (OIT 2020a). El *ranking* de países en AL para la tasa de desempleo en el año 2022 se observa en el gráfico 2.3.3, en donde se ilustra cómo El Salvador fue la economía con menor tasa de desempleo, que llegó a un valor del 3 por ciento. En segundo lugar se encuentra Guatemala, con un 3,1 por ciento, y en tercero México, con un 3,3 por ciento. Estas tasas están por debajo del promedio de la OCDE (5,4 por ciento) y del promedio de AL (6,6 por ciento).

Por otro lado, las economías con mayores tasas de desempleo fueron Brasil, con un 9,2 por ciento, Colombia, con un 10,6 por ciento, y Costa Rica, con un 11,3 por ciento. El desempleo estructural de Costa Rica se puede explicar en buena medida por la dificultad de las empresas para ocupar los puestos vacantes debido a que los solicitantes no cuentan con las habilidades requeridas (INEC 2022). Asimismo, la tasa de desempleo de jóvenes de entre 15 y 24 años fue del 30 por ciento para Costa Rica en el tercer trimestre de 2022, equivalente a dos veces el promedio de la región, destacando las barreras que enfrentan los jóvenes para ocuparse en el mercado laboral costarricense (OIT 2023). La fuerza laboral de jóvenes representa una oportunidad para mejorar la productividad en América Latina, debido a que reportan niveles de calificación y destreza tecnológica superiores a los de la generación anterior (CEPAL 2023b). Adicionalmente, el empleo joven produce efectos económicos y sociales positivos, como la integración social, el fomento de la ciudadanía y estabilidad política, y la reducción de la pobreza (Dietrich 2012; Azeng y Yogo 2013). Los jóvenes en América Latina registran una mayor rotación ocupacional, lo

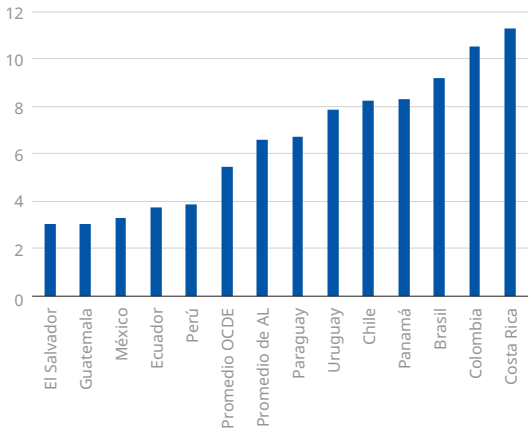
que dificulta su acumulación de experiencia y desarrollo de habilidades, reduce sus probabilidades de encontrar un trabajo y aumenta el riesgo de que sean despedidos. Este contexto desincentiva la entrada de jóvenes a la fuerza laboral e incluso reduce su motivación para continuar con sus estudios (OIT 2023).

En el gráfico 2.3.4, se muestra la proporción de jóvenes que no se encontraban trabajando ni estudiando ni en capacitación (año 2022). En este caso, Uruguay (14,3 por ciento), Chile (14,8 por ciento) y Costa Rica (17,2 por ciento) fueron las economías con mejores cifras. Sin embargo, ninguna economía de AL estuvo por debajo del promedio de la OCDE, que fue del 14,2 por ciento para ese mismo año. En el extremo opuesto se encuentran las economías con mayores tasas de inactividad entre los jóvenes. En esta categoría, se observa que El Salvador y Colombia registraron valores de 23,5 y 24,4 por ciento respectivamente, mientras que Guatemala registró el valor más alto debido a que tres de cada diez jóvenes no trabajaban ni estudiaban ni se capacitaban (año 2022).

En este ámbito, es muy importante resaltar que una tasa de desempleo relativamente baja puede no ser suficiente para crear mercados laborales inclusivos si no se promueve la participación de los jóvenes en la fuerza laboral. Por ejemplo, El Salvador registró la tasa de desempleo más baja en 2022, sin embargo, fue una de las tres economías con una proporción más alta de jóvenes que no trabajan ni estudian ni están en capacitación.

Gráfico 2.3.3

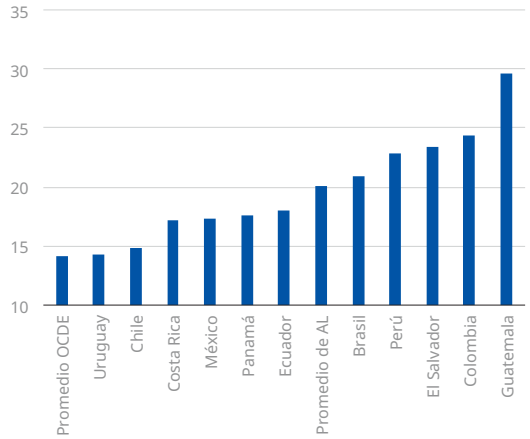
Tasa de desempleo, 2022



Fuente: ILOSTAT (2023d).

Gráfico 2.3.4

Proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian ni están en capacitación, 2022

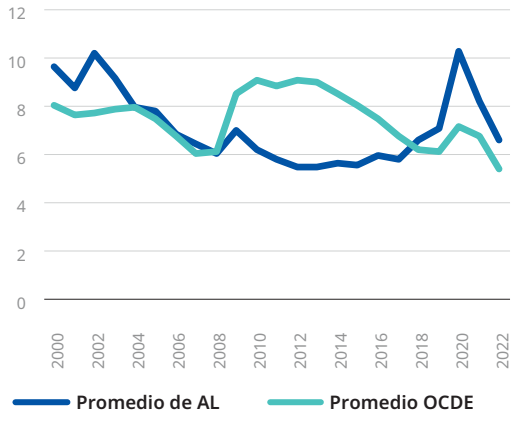


Fuente: ILOSTAT (2023b).

El gráfico 2.3.5 muestra las tendencias de las tasas de desempleo del promedio de AL y de la OCDE para el periodo de 2000 a 2022. Se observa que ambos grupos de países registraron menores tasas en el último año con relación a las que se observaron en el primer año del periodo. De 2008 a 2018, AL registró tasas menores que las de la OCDE. A partir de este año, se observaron en AL tasas mayores que en el promedio de las economías de la OCDE. Más adelante, en 2020, AL registró su tasa más elevada desde 2002, con un valor del 10,2 por ciento, lo que puede ser explicado por la pandemia de COVID-19. Por otro lado, el gráfico 2.3.6 muestra el promedio de la proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian ni están en capacitación para AL, el cual ha sido mayor que el registrado para la OCDE en el periodo de 2003 a 2022. En este primer año, la región reportó una proporción del 22,1 por ciento y la OCDE, 13,7 por ciento, mientras que para el año 2022 estos valores fueron 20 y 14 por ciento, un cierre en la brecha entre ambos grupos de países. Sin embargo, la proporción de jóvenes en AL que no están participando en la fuerza laboral ni invirtiendo en su capital humano, representa aún uno de los más grandes desafíos en términos de mejorar la productividad laboral, ya que dos de cada diez jóvenes latinoamericanos no están invirtiendo en la mejora de sus habilidades ni están contribuyendo a la generación de valor agregado en la economía de sus países.

Gráfico 2.3.5

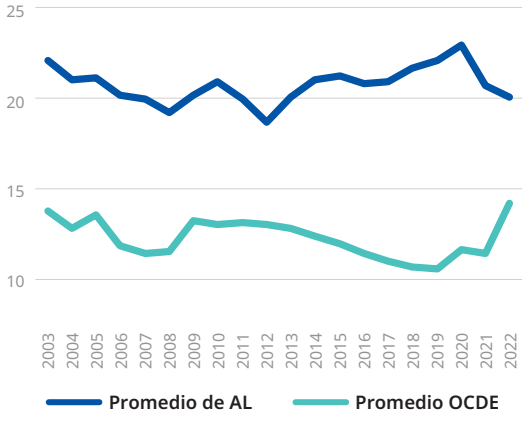
Tendencia de la tasa de desempleo



Fuente: ILOSTAT (2023d).

Gráfico 2.3.6

Tendencia de la proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian ni están en capacitación

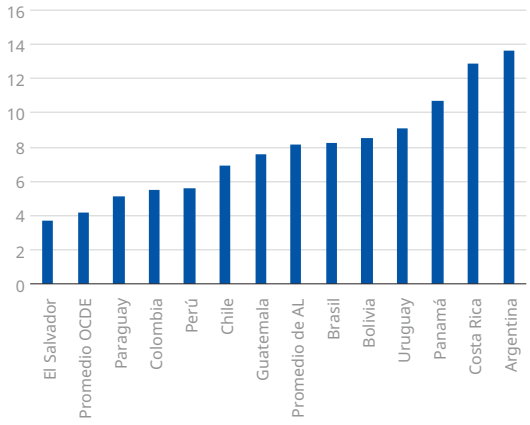


Fuente: ILOSTAT (2023b).

La tasa de subempleo brinda información sobre la proporción de la fuerza laboral que considera que podría trabajar un mayor número de horas pero no encuentra un empleo que le permita hacerlo. Esto representa una falta de aprovechamiento del potencial productivo de la fuerza laboral. En este ámbito, el gráfico 2.3.7 muestra las estadísticas para las diferentes economías latinoamericanas con datos disponibles. El promedio de AL para ese año fue de un 8,1 por ciento, con una importante varianza en los datos a nivel nacional. Por ejemplo, El Salvador registró la menor tasa en 2021, con un valor del 3,7 por ciento, el cual fue menor que el promedio de la OCDE, de un 4,2 por ciento para ese mismo año. Por otro lado, las economías de AL con tasas más altas fueron Panamá, con un 10,7 por ciento, Costa Rica, con un 12,9 por ciento, y Argentina, con un 13,7 por ciento. El gráfico 2.3.8 muestra las tasas de subempleo promedio para AL y la OCDE. Se observa que el promedio de la región ha sido consistentemente más elevado que el de los países de la OCDE en el periodo de 2004 a 2021. En este primer año, la tasa de subempleo promedio de la región fue 3,5 veces mayor que el promedio de la OCDE. En 2021, esta proporción fue de casi dos veces. Por lo tanto, se observa una reducción en la brecha entre las tasas de subempleo entre AL y el promedio de la OCDE.

Gráfico 2.3.7

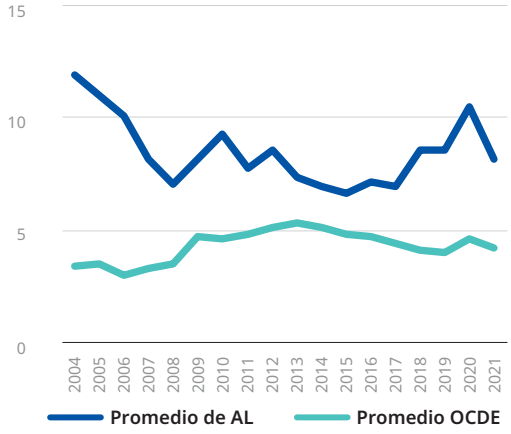
Tasa de subempleo, 2021



Fuente: ILOSTAT (2023b).

Gráfico 2.3.8

Tendencia de la tasa de subempleo



Fuente: ILOSTAT (2023b).

4. Transición fuera de la informalidad

Con la Recomendación núm. 204, la OIT busca que los Estados Miembros se centren en facilitar la transición para salir de la informalidad, crear nuevos trabajos formales y prevenir una mayor informalidad (OIT 2015). De esta manera, se recomienda a los países medir y evaluar tanto los factores como las características de la informalidad en cada contexto nacional. Ello debido a que la informalidad puede dificultar el acceso de las empresas a capital, así como su adopción de tecnología, su inversión para expandir el negocio y su participación en mercados internacionales (Ulyssea 2020; Loayza 2009). La informalidad puede también suponer una cultura de evasión fiscal, incumplimiento legal e ineficiencia en los procesos productivos (Ulyssea 2018; Loayza 2018). Adicionalmente, se ha observado que los trabajadores de las empresas informales presentan menores niveles de productividad en comparación con los trabajadores de las empresas formales (Banco Mundial 2019a). Esto resalta la importancia de las políticas públicas para reducir la informalidad. Además, las políticas de desarrollo productivo (PDP) pueden abordar la problemática de informalidad mediante programas que impulsen el dinamismo en los sectores productivos del país, permitiendo que las empresas formales crezcan y absorban un mayor número de trabajadores informales (OIT 2016). Este enfoque holístico es una oportunidad de política pública que puede impulsar la productividad del país al mismo tiempo que fomenta la transición a la formalidad.

De acuerdo con la OCDE (2019), existe una trampa de desarrollo en la región que puede ser explicada en gran parte por la falta de incentivos que enfrentan los empleadores y trabajadores para formalizarse. De este modo, la baja productividad constituye una de las trampas de desarrollo, en la que factores como la concentración de las exportaciones en sectores de poca complejidad y la falta de inversión en la competitividad y en las capacidades productivas de las empresas, inhiben el crecimiento de la productividad agregada (OCDE 2019). Además, algunos autores destacan que la productividad en las empresas informales es menor que la que reportan las empresas formales, por lo que concluyen en la relevancia de estudiar los factores que llevan a que las empresas operen en la informalidad (Amin, Ohnsorge y Okou 2020).

En términos de las causas de fondo de la informalidad, Loayza, Servén y Sugawara (2009) encuentran que la informalidad en América Latina tiene diversas raíces, como la baja calidad de los servicios públicos, un marco regulatorio que no incentiva la formalización, así como una falta de monitoreo del cumplimiento de las legislaciones laborales. Si a estas características se suman la baja escolarización y una estructura productiva basada en sectores primarios, la incidencia del empleo informal puede ser aún mayor (Loayza *et al.* 2009). Asimismo, los niveles de desigualdad en las economías de la región pueden incrementar el tamaño de la economía informal (Takanohashi, Ribeiro y Schneider 2023).

Cada economía presenta historias diversas, como en el caso de Perú, que experimentó aumentos en la tasa de informalidad laboral durante la última década del siglo XX por un incremento del tamaño de los sectores económicos con mayor incidencia de trabajos informales, así como un aumento de los costos laborales no salariales, que desmotivaron a los empleadores a optar por contratos laborales formales (Chong, Galdo y Saavedra-Chanduvi 2007).

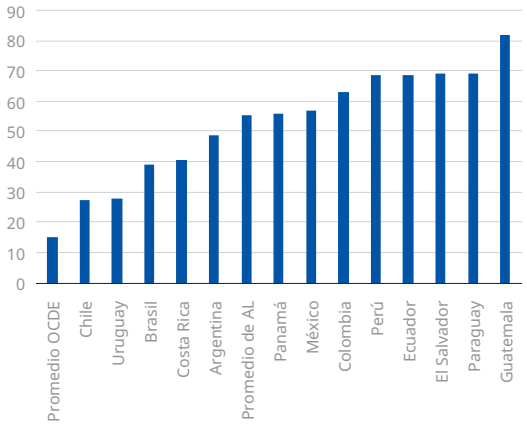
El gráfico 2.4.1 muestra las estadísticas nacionales en términos de la proporción de empleo informal sobre el total, para las economías de AL, en el año 2021, último con datos comparables disponibles. Como primer punto, se observa que el promedio de los países de la OCDE estuvo por debajo del promedio de todas las economías en América Latina, registrando un valor del 15,1 por ciento. El promedio de AL para este año fue del 55,18 por ciento. En la región, Chile fue la economía con menor proporción de empleo informal, con un valor del 27,4 por ciento; en segundo lugar estuvo Uruguay, con un 27,9 por

ciento; y, en tercer lugar, Brasil, con un 39,2 por ciento. Los países con mayores proporciones de empleo informal fueron El Salvador, con un 69,0 por ciento, Paraguay, con un 69,3 por ciento, y Guatemala, con un 81,9 por ciento. Es importante destacar la varianza en los datos nacionales, ya que se observa que la economía con mayor empleo informal registró una tasa casi tres veces la de la economía con menor empleo informal en América Latina.

En un aspecto positivo, se puede mencionar que, en América Latina, la proporción de empleo informal sobre el total ha disminuido en el periodo de 2007 a 2021. Sin embargo, la brecha de la región con los países de la OCDE es significativa para todos los años que se observan en el gráfico 2.4.2. En 2007, la proporción de empleo informal fue del 66,6 por ciento en AL y del 14,6 por ciento en los países de la OCDE. En el año más reciente con datos disponibles (2021), la región registró un valor del 55,1 por ciento y la OCDE, uno del 15,1 por ciento.

Gráfico 2.4.1

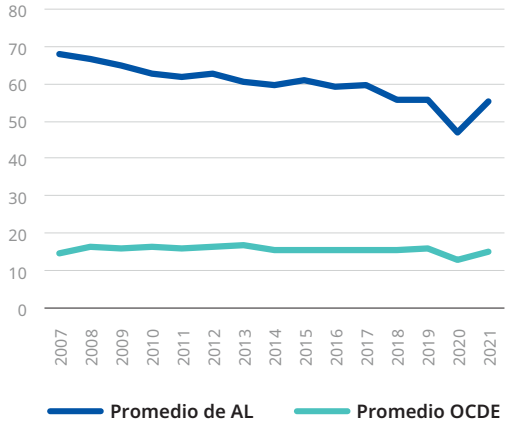
Proporción del empleo informal sobre el total



Fuente: ILOSTAT (2023c).

Gráfico 2.4.2

Tendencia de la proporción del empleo formal sobre el total

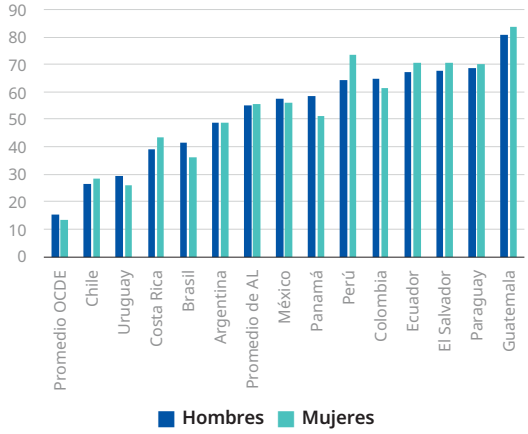


Fuente: ILOSTAT (2023c).

La proporción de empleo informal puede variar dependiendo de los distintos grupos de la población. En el gráfico 2.4.3, se observa que la brecha de género en la proporción de empleo informal puede ser positiva o negativa, dependiendo de qué economía se observe, en el último año que cuenta con datos comparables disponibles (2021). En promedio, en América Latina, la proporción de empleo informal de las mujeres ha sido mayor que la de los hombres, para casi todos los años que se observan en el gráfico 2.4.4. En términos del último año de los datos (2021), la proporción de empleo informal para las mujeres y hombres de América Latina se encontró en un nivel cercano al 55 por ciento. Sin embargo, esta diferencia puede no ser representativa de la situación a nivel nacional en múltiples países, debido a que la magnitud y el signo de la brecha difieren significativamente entre las distintas economías latinoamericanas. Por ejemplo, Perú es la economía que registró la mayor brecha en los niveles de informalidad de acuerdo con el sexo: las mujeres registraron una proporción de empleo informal del 73,6 por ciento y los hombres, un 64,2 por ciento.

Gráfico 2.4.3

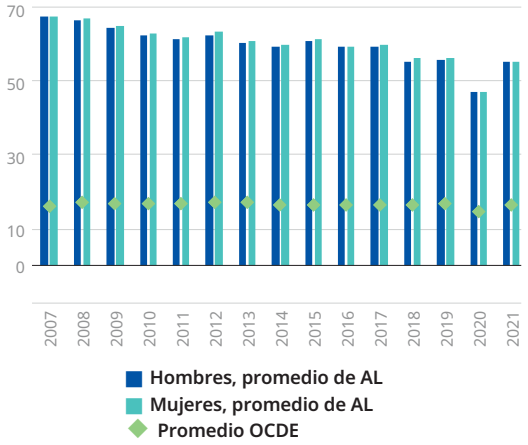
Proporción de empleo informal desagregada por sexo, 2021



Fuente: ILOSTAT (2023c).

Gráfico 2.4.4

Tendencia de la proporción de empleo informal desagregada por sexo

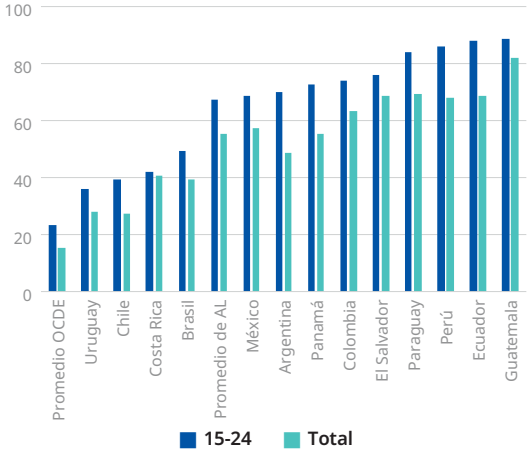


Fuente: ILOSTAT (2023c).

La proporción de jóvenes que se emplean de manera informal es un factor relevante en el análisis de los mercados laborales debido a que empezar la participación en el mercado laboral en la informalidad dificulta la futura transición al mercado formal. Con esto en mente, en el gráfico 2.4.5 se observa que, en el año 2021, los niveles de informalidad en la población joven fueron mayores que los niveles promedio, para todas las economías de América Latina. Las menores tasas fueron un 36,4 por ciento para Uruguay, un 39,3 por ciento para Chile y un 42,0 por ciento para Costa Rica. Sin embargo, todas esas economías registraron mayores valores que el promedio de la OCDE, del 23,2 por ciento para ese año. Las economías latinoamericanas con mayores proporciones de empleo informal en la población de 15 a 24 años fueron Perú, Ecuador y Guatemala. En esta última economía, casi nueve de cada diez jóvenes se emplean de manera informal. En América Latina, la proporción de empleo informal en los jóvenes de 15 a 24 años ha disminuido en el periodo de 2007 a 2021, llegando a siete de cada diez jóvenes en el último año. A pesar de esta reducción, el promedio de la OCDE es significativamente menor y registra una relación de casi dos jóvenes en un empleo informal por cada diez, para todos los años del gráfico 2.4.6.

Gráfico 2.4.5

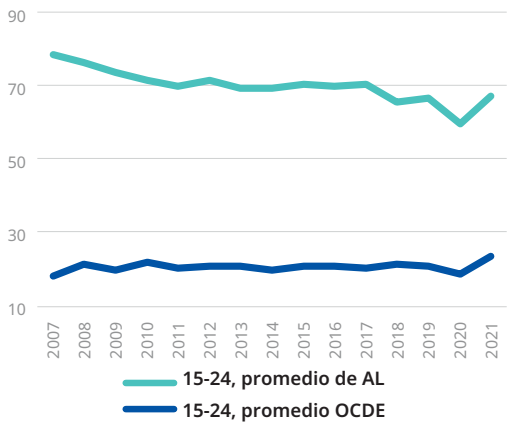
Proporción de empleo informal para la población de jóvenes de entre 15 y 24 años, 2021



Fuente: ILOSTAT (2023c).

Gráfico 2.4.6

Tendencia de la proporción de empleo informal para la población de jóvenes de entre 15 y 24 años



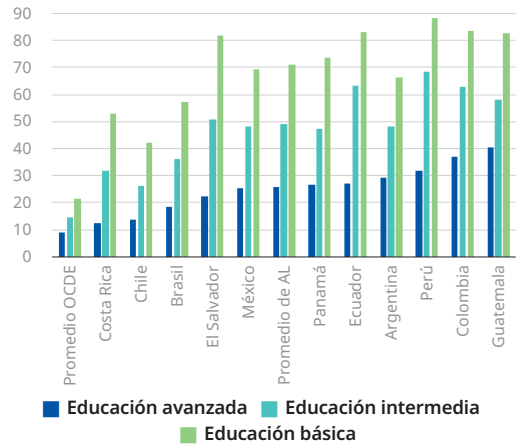
Fuente: ILOSTAT (2023c).

De acuerdo con un estudio de la OCDE sobre América Latina, existen disparidades en las escolaridades promedio de la población dependiendo de su nivel socioeconómico; a mayor ingreso, mayores son los años de escolaridad. Con esto en mente, se destacan tres vías en la relación entre la educación y el empleo informal. La primera se debe a que un ingreso bajo limita las posibilidades de estudiar por un mayor número de años; la segunda vía es la falta de oportunidades de capacitación que se presentan en el empleo informal, así como la imposibilidad de los trabajadores de utilizar las habilidades aprendidas en sectores de bajo valor agregado en sectores más productivos; y, por último, el empleo informal no tiene acceso a programas formales de capacitación (OCDE 2019).

En el gráfico 2.4.7, se observa que todas las economías de AL registraron una relación negativa entre la proporción de empleo informal y el nivel educativo para el año 2021; es decir que, a mayor nivel educativo, menor fue la proporción de empleo informal, y viceversa, a menor nivel educativo, mayor proporción de empleo informal. Costa Rica fue la economía con menor empleo informal en la población con educación avanzada, con un 12,6 por ciento, mientras que Guatemala registró el valor más alto, con un 40,3 por ciento. Chile registró las proporciones más bajas de empleo informal para los grupos de educación intermedia y básica, con un 26,1 y un 42,3 por ciento respectivamente. Por otro lado, Perú registró los valores más altos para estos grupos con un 68,4 por ciento para la educación intermedia y un 88,2 por ciento para la básica. La relación negativa entre la proporción de empleo informal y el nivel educativo se observa en el promedio de AL para todos los años del periodo de 2007 a 2021. En 2021, la proporción de empleo informal en la población con educación avanzada de AL fue del 25,8 por ciento, un 49,2 por ciento para la educación intermedia y un 71 por ciento para la básica, mientras que la proporción de empleo informal para el promedio de la OCDE fue del 15,1 por ciento.

Gráfico 2.4.7

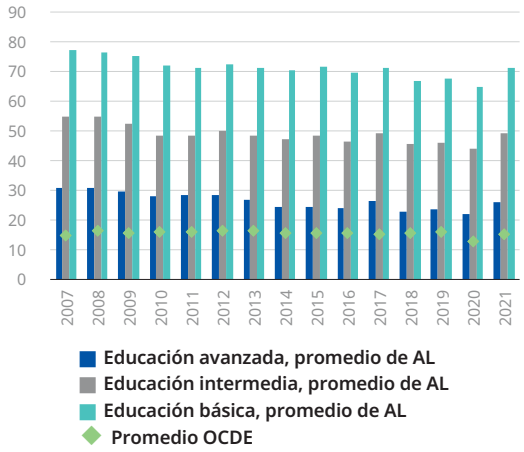
Proporción de empleo informal desagregada por nivel de educación, 2021



Fuente: ILOSTAT (2023c).

Gráfico 2.4.8

Tendencia de la proporción de empleo informal desagregada por nivel de educación



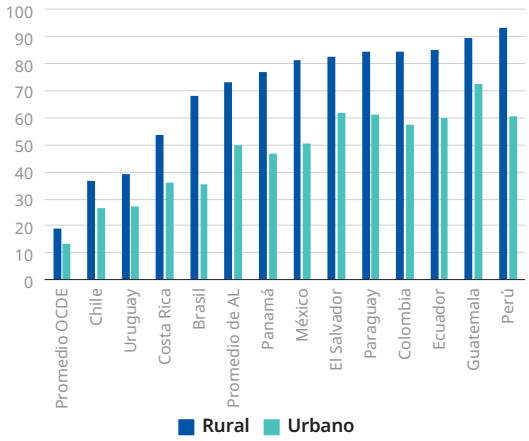
Fuente: ILOSTAT (2023c).

En el gráfico 2.4.9, se observa que todas las economías de AL registran proporciones de empleo informal mayores en las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas. El promedio de AL en el año 2021 registró una proporción del 72,8 por ciento para las zonas rurales y del 49,6 por ciento para las urbanas. Chile fue la economía con menor proporción de empleo informal en la población rural y en la urbana.

Perú fue la economía con mayor empleo informal en las zonas rurales, y Guatemala lo fue para las zonas urbanas. Adicionalmente, Brasil, Panamá, México y Perú registraron diferencias de aproximadamente 30 puntos porcentuales entre las proporciones de las zonas urbanas y las rurales, las más elevadas dentro de la muestra de países de AL. En el periodo de 2008 a 2021, se observó una reducción en la proporción de empleo informal en las zonas rurales y urbanas de AL. En el primer año que se observa en el gráfico 2.4.10, la proporción de empleo informal en las zonas rurales para el promedio de AL fue del 85,6 por ciento, mientras que en 2021 fue del 72,8 por ciento. Asimismo, la proporción de empleo informal en las zonas urbanas para estos años fue del 60,7 por ciento en 2008 y del 49,5 por ciento en 2021.

Gráfico 2.4.9

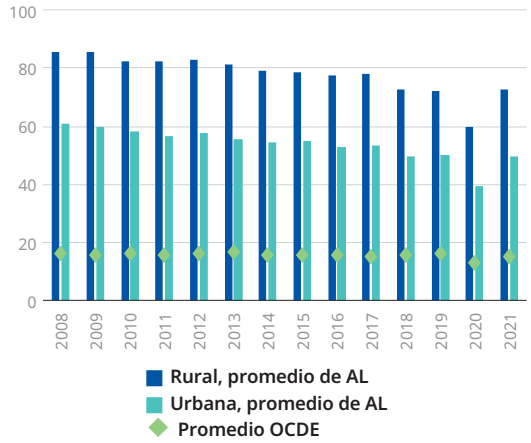
Proporción de empleo informal desagregada por zona urbana/rural, 2021



Fuente: ILOSTAT (2023c).

Gráfico 2.4.10

Tendencia de la proporción de empleo informal desagregada por zona urbana/rural



Fuente: ILOSTAT (2023c).

5. Emprendimiento e innovación

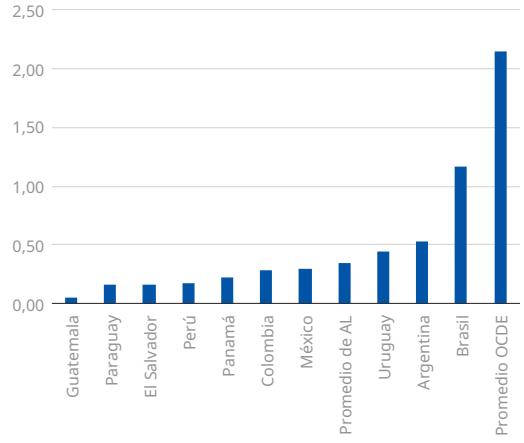
La innovación impacta de manera positiva en el crecimiento productivo de un país (Crespi y Zuniga 2012) y se relaciona con la creación y difusión de nuevos productos, procesos y métodos (OCDE 2015). Por otro lado, la innovación repercute también en los nuevos emprendimientos (Bessant y Tidd 2007) e impacta de manera positiva en los procesos y comportamientos de las organizaciones (March 1991). Algunas de las variables o indicadores que se utilizan para medir la innovación son la cantidad de patentes activas o concedidas en una economía y la inversión en investigación y desarrollo (I+D), regularmente expresada en relación con el PIB. El cambio tecnológico y la innovación tienen un papel fundamental para impulsar el crecimiento de la productividad. Desde los primeros modelos de crecimiento económico, se ha reconocido que las tecnologías de vanguardia y las mejoras tecnológicas desempeñan un papel esencial en el aumento de la productividad total de los factores, y se habla mayormente de qué tan cerca se encuentra una economía de la frontera tecnológica cuando se busca mejorar su PTF (Moss, Nunn y Shambaugh 2020).

En el gráfico 2.5.1, se observa el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB para las economías de AL con datos disponibles. En el año 2020, los porcentajes más bajos fueron 0,05 por ciento para Guatemala, 0,16 por ciento para Paraguay y 0,17 por ciento para El Salvador. Por otro lado, solo tres economías de AL registraron porcentajes mayores que el promedio de AL: Uruguay, con un 0,45 por ciento, Argentina, con un 0,53 por ciento, y Brasil, con un 1,17 por ciento. Estos valores fueron inferiores al promedio de la OCDE para ese año, que fue del 2,15 por ciento, casi dos veces lo registrado en el mejor de los casos en AL. En el caso de Argentina, Brasil y Chile, el gasto de las empresas en investigación y desarrollo es de 50 dólares por persona, significativamente menor que el rango de 200 a 700 dólares que se observa en los países desarrollados (UNESCO 2004). Asimismo, en términos de los casos resaltables positivamente en la región, México reporta la mayor proporción de investigadores empleados en el sector privado (37 por ciento), y Chile, el mayor número de publicaciones científicas por millón de habitantes (633) (UNESCO 2021).

El gráfico 2.5.2 muestra la tendencia del gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB para los promedios de AL y la OCDE, en el periodo de 1996 a 2020. Se observa que la brecha entre los dos grupos de países aumentó en este periodo. En 1996, el promedio de AL fue 0,28 por ciento y el promedio de la OCDE fue 1,36 por ciento. Al final del periodo, en el año 2020, AL registró un valor del 0,35 por ciento y la OCDE, un 2,15 por ciento. A pesar de que ambos registraron un incremento, el aumento de AL fue a un ritmo más lento, por lo que se expandió la brecha frente a la OCDE.

Gráfico 2.5.1

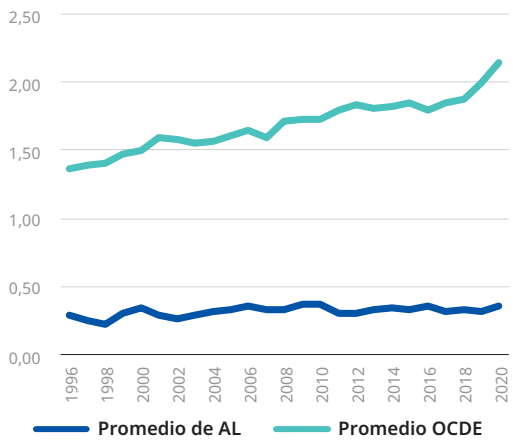
Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, 2020



Fuente: UNESCO (2023b).

Gráfico 2.5.2

Tendencia del gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB



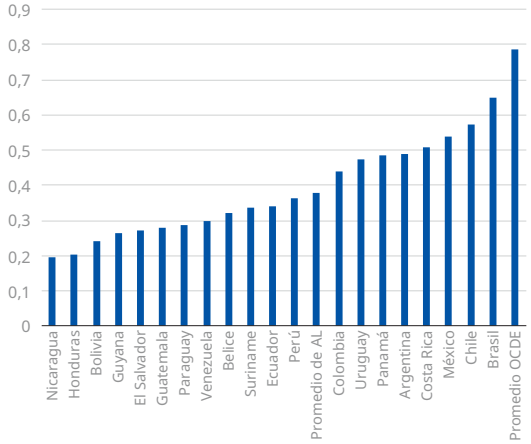
Fuente: UNESCO (2023b).

El índice de preparación para la tecnología de punta es estimado por la Conferencia de las Naciones Unidades sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) con el objetivo de evaluar con un número del 0 al 1 (mejor) la capacidad de un país de adoptar tecnología de punta. Este considera cinco categorías: acceso a financiamiento, actividad industrial, habilidades, investigación y desarrollo, y TIC. El año 2019 es el último con datos disponibles para las economías de América Latina.

En el gráfico 2.5.3, se observan los resultados del índice total. Nicaragua registró el índice más bajo, con un valor de 0,19, seguido por Honduras, con 0,2, y Bolivia, con 0,24. Las economías con los índices más altos fueron México, con 0,53, Chile, con 0,57, y Brasil, con 0,64. Los valores de todas las economías de Latinoamérica fueron más bajos que el promedio de la OCDE, que fue de 0,78 para ese año.

Gráfico 2.5.3

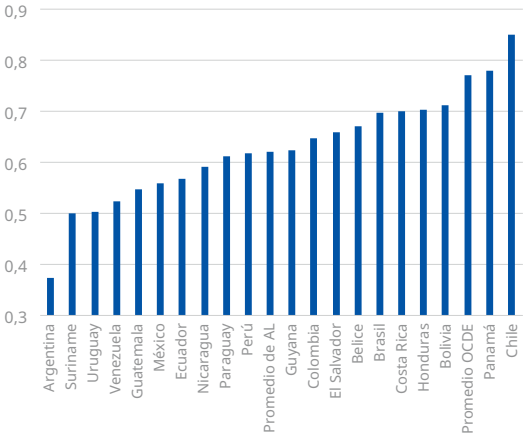
Índice general, 2019



Fuente: UNCTAD (2022).

Gráfico 2.5.4

Acceso a financiamiento, 2019



Fuente: UNCTAD (2022).

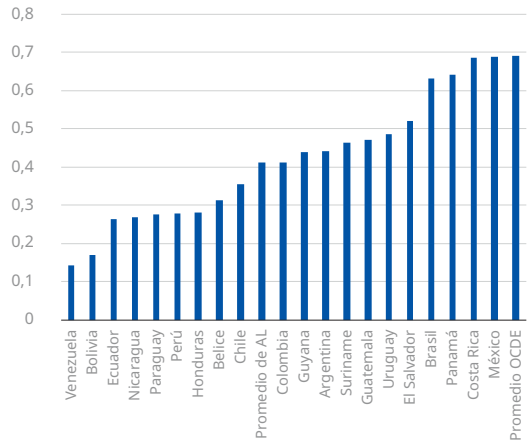
El acceso a financiamiento en el sector privado es un factor clave para acelerar el uso y la implementación de la tecnología de punta. En este ámbito, los índices más bajos fueron 0,37 en Argentina, 0,49 en Suriname y 0,5 en Uruguay. Se observa que la diferencia entre el índice más bajo y el segundo más bajo es significativa, lo que ilustra el rezago de Argentina en acceso a financiamiento para el uso e implementación de tecnología de punta.

El promedio de AL para esta categoría fue 0,62, mientras que, el promedio de la OCDE fue 0,77. Las economías con mejores resultados en AL fueron Panamá y Chile.

El gráfico 2.5.5 muestra los resultados del índice para la categoría de actividad industrial en el año 2019. En este caso, Venezuela registró el índice más bajo, con un valor de 0,14, seguido por Bolivia, con un valor de 0,17, y Ecuador, con un valor de 0,26. Se observa el rezago pronunciado de Venezuela y Bolivia en esta categoría. El promedio de AL fue 0,4 y el promedio de la OCDE fue 0,69. Para esta categoría, el promedio de la OCDE fue mayor que el del resto de las economías de AL. Asimismo, las economías con mayores índices fueron Panamá, con 0,64, Costa Rica, con 0,685, y México, con 0,688. Estas dos últimas economías registraron índices muy cercanos al promedio de la OCDE.

Gráfico 2.5.5

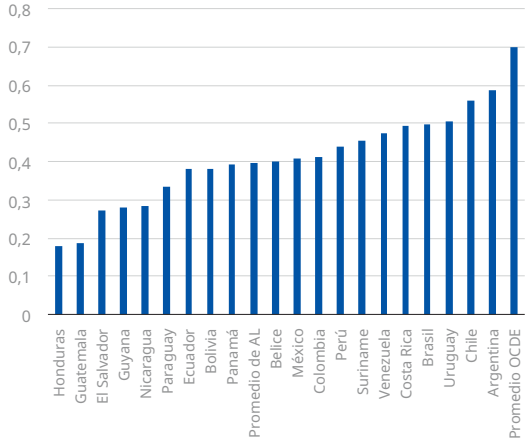
Actividad industrial, 2019



Fuente: UNCTAD (2022).

Gráfico 2.5.6

Habilidades, 2019



Fuente: UNCTAD (2022).

La categoría de habilidades considera las habilidades de la población adquiridas por medio de educación y las desarrolladas en el lugar de trabajo por la fuerza laboral. Las economías de AL con valores más bajos para esta categoría fueron Honduras, con 0,18, seguida de Guatemala con un valor cercano, 0,185, y El Salvador, con un índice moderadamente mayor de 0,27. El promedio de AL fue de 0,39, y, una vez más, el promedio de la OCDE fue mayor que el del resto de las economías de AL, con un valor de 0,69. Los mayores índices en AL fueron los de Uruguay, con un valor de 0,5, Chile, con 0,55, y Argentina, con 0,58.

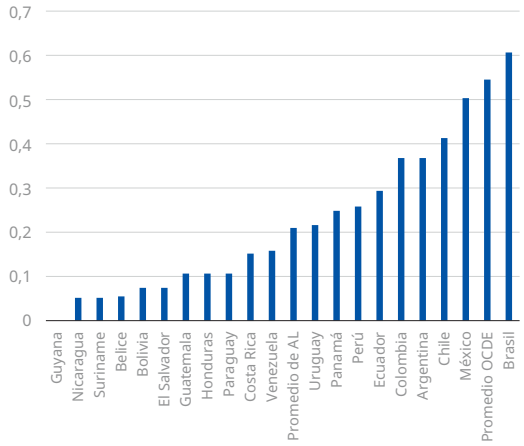
Es relevante mencionar que Argentina registró el valor más bajo para la categoría de acceso a financiamiento, pero el más alto en habilidades, lo que resalta la necesidad de desagregar el índice.

En términos de investigación y desarrollo (gráfico 2.5.7), Guyana registró el valor más bajo, con un índice de 0, y Nicaragua y Suriname fueron los segundos más bajos, con valores de 0,05. El promedio de AL fue dos veces menor que el promedio de la OCDE. Chile y México se encuentran entre las tres economías de AL con mayores índices en investigación y desarrollo, con un valor de 0,4 para Chile y 0,5 para México. Brasil es la economía con el índice más alto, un valor de 0,6, el cual fue superior al promedio de la OCDE.

La última categoría mide la infraestructura en tecnología de la información y la comunicación (TIC) (gráfico 2.5.8). Nicaragua es la economía con el índice más bajo, con un valor de 0,2, seguida por Honduras, con 0,27, y Bolivia, con 0,28. El promedio de AL vuelve a ser significativamente menor que el promedio de la OCDE, registrando índices de 0,44 y 0,81, respectivamente. Las tres economías de AL con mayores índices fueron Costa Rica, con un valor de 0,5, Chile, con 0,59, y Uruguay, con 0,62. Se observa que la región está rezagada en temas de infraestructura en TIC por la diferencia significativa entre el resultado de todas las economías latinoamericanas y el promedio de la OCDE.

Gráfico 2.5.7

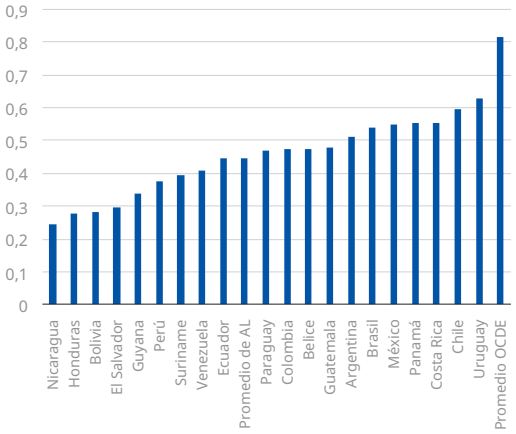
Investigación y desarrollo, 2019



Fuente: UNCTAD (2022).

Gráfico 2.5.8

Tecnología de la información y la comunicación (TIC), 2019

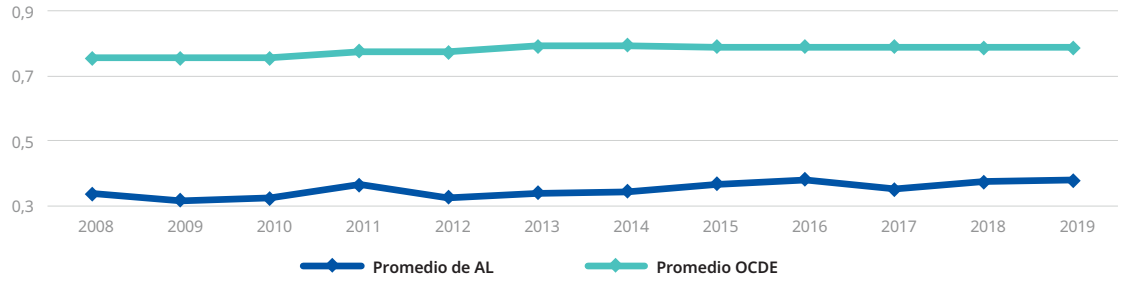


Fuente: UNCTAD (2022).

El gráfico 2.5.9 muestra la tendencia del índice total de preparación para la tecnología de punta. Tanto el promedio de AL como el de la OCDE aumentaron en el periodo de 2008 a 2019. En el primer año, la región registró un índice de 0,33, y para el último año fue de 0,37. En el caso del promedio de la OCDE, estos valores fueron 0,75 y 0,78. A pesar de estos incrementos, la diferencia entre los dos grupos de países fue significativa para todos los años del gráfico, lo que muestra el rezago persistente de América Latina respecto a las economías de la OCDE.

Gráfico 2.5.9

Tendencia del índice de preparación para la tecnología de punta (máx.=1)



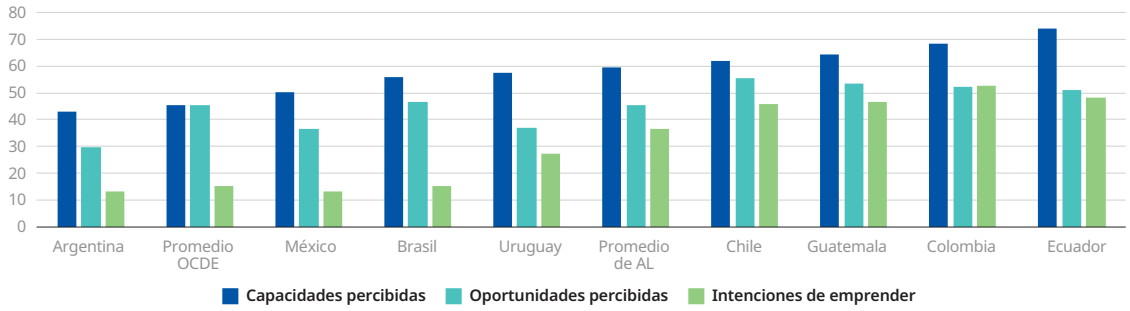
Fuente: UNCTAD (2022).

Los emprendimientos son una parte vital del desarrollo y la productividad de un país. No obstante, hay que tener en cuenta que existen emprendimientos de oportunidad y de necesidad. Los emprendimientos de necesidad se refieren a aquellos en los que las personas se ven obligadas a iniciar un negocio por diversas razones, como una inadecuada formación profesional y falta de capacitación con base en las necesidades del mercado laboral para encontrar un empleo en la economía formal, falta de información sobre vacantes, y falta de empleos en la economía, entre otros. En general, estos emprendimientos están asociados con la economía informal y una productividad menor (OIT 2013).

El Monitor Global de Emprendimiento (GEM por sus siglas en inglés) realiza encuestas sobre la percepción de capacidades y oportunidades que existen en un país, así como sobre las intenciones para emprender. El gráfico 2.5.10 muestra los resultados para el año 2017, el último con estadísticas disponibles. Argentina fue la economía con menores porcentajes de capacidades y oportunidades percibidas entre los encuestados, además de uno de los porcentajes más bajos para intenciones de emprender. Adicionalmente, Colombia fue el único país que no registró una brecha entre las oportunidades percibidas y las intenciones de emprender de los encuestados, además de haber reportado el segundo porcentaje más elevado de capacidades percibidas. Ecuador fue la economía con el mayor porcentaje de capacidades percibidas en 2017, con 74 por ciento de los encuestados. En este ámbito, se ilustra la necesidad de implementar nuevas encuestas a nivel regional, para contar con datos comparables actuales para las distintas economías latinoamericanas.

Gráfico 2.5.10

Monitor Global de Emprendimiento (% de los encuestados), 2017



Fuente: GEM (2017a).

6. Acceso a crédito y servicios financieros

La relación entre acceso al crédito y productividad es bidireccional, y existe un ciclo de retroalimentación. Por un lado, sin acceso al crédito y a los servicios financieros, las empresas pueden enfrentar dificultades para financiar las inversiones necesarias que les permitan mejorar su productividad. La falta de financiamiento adecuado puede limitar su capacidad para adquirir tecnología, modernizar sus operaciones, capacitar a su personal, expandirse o llevar a cabo mejoras en su infraestructura. Por otro lado, una baja productividad también puede dificultar el acceso al crédito. Las instituciones financieras evalúan el desempeño y la capacidad de pago de las empresas antes de otorgar préstamos. Si una empresa tiene una baja productividad, es posible que su rentabilidad y solvencia sean percibidas como más bajas, lo que puede llevar a restricciones en el acceso al crédito.

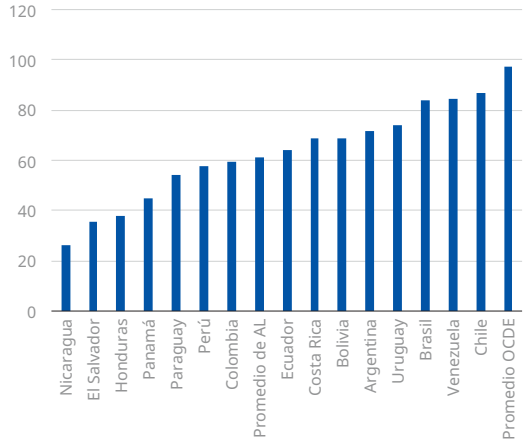
La falta de acceso al crédito es uno de los principales factores que explican la baja productividad de las mipymes en los países en desarrollo, en conjunto con las malas prácticas de gestión empresarial y la poca capacidad de delegar en los procesos de toma de decisiones (Bloom *et al.* 2010). Asimismo, Esther Duflo y Abhijit Banerjee han demostrado en diversas ocasiones, y de manera rigurosa, el efecto nocivo del bajo acceso al crédito en las pymes y grupos vulnerables, así como su relación con mantener «la trampa de la pobreza». Por otro lado, Giang *et al.* (2019) demostraron que las empresas que tienen acceso a préstamos bancarios pueden observar mejoras en su productividad, medida a través de la PTF, de entre un 8,6 y un 9,0 por ciento. Frente a las barreras que dificultan el acceso al crédito de las mipymes, la existencia de la banca nacional de desarrollo es esencial para garantizar su inclusión financiera. Estas instituciones pueden fomentar el financiamiento de emprendimientos productivos mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros que se ajusten a las necesidades de las empresas de menor tamaño. En el año 2012, la participación de la banca de desarrollo en el crédito total al sector privado de América Latina llegó a ser del 22 por ciento (CEPAL 2018).

El acceso a crédito es esencial para impulsar la productividad de un país por medio de un entorno propicio para hacer negocios. En términos de las estadísticas de las economías de AL en el año 2021 (gráfico 2.6.1), Nicaragua registró la menor proporción de posesión de cuentas en la población mayor de 15 años, con un 26 por ciento; en penúltimo lugar estuvo El Salvador, con un 35 por ciento, y en antepenúltimo, Honduras, con un 37 por ciento. El promedio de la región fue del 61 por ciento. En cuanto a las economías con mayores porcentajes, estas fueron Brasil y Venezuela, con un 84 por ciento cada una, y Chile, con un 87 por ciento. El porcentaje de la OCDE fue mayor que el de todas las economías de AL, registrando un promedio en el que casi el total de su población contaba con una cuenta en alguna institución financiera.

El alto porcentaje en Chile comparado con el resto de la región puede ser explicado parcialmente por los programas de inclusión financiera, como la implementación de la Caja Vecina (CV) y la Cuenta RUT, que han tenido un impacto positivo en cerrar las brechas de acceso a crédito en el país. Las CV permiten a la población acceder a distintos servicios financieros desde almacenes, mientras que la Cuenta RUT consiste en una tarjeta de débito disponible para cualquier ciudadano mayor de 12 años en el caso de las mujeres y de 14 años en el caso de los hombres, sin costo de apertura ni mantenimiento (Gaete 2020). El gráfico 2.6.2 muestra la tendencia de la proporción de la población con cuentas en alguna institución financiera para los promedios de AL y la OCDE en el periodo de 2011 a 2021. Se observa que la brecha entre los dos grupos de países se ha cerrado. En 2011, el promedio de AL fue del 29 por ciento y el de la OCDE fue del 89 por ciento. Mientras que, en 2021, estos valores fueron 61 y 97 por ciento, respectivamente. Por lo tanto, la diferencia entre los dos promedios pasó de 60 a 36 puntos porcentuales en una década.

Gráfico 2.6.1

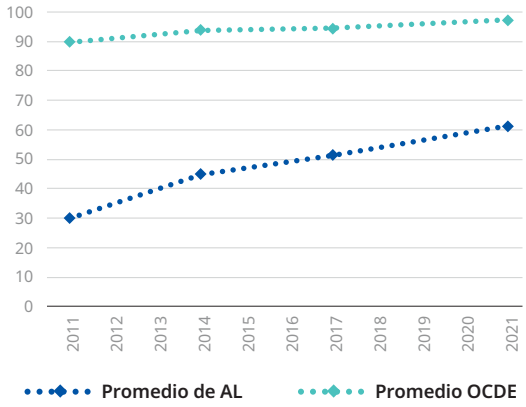
Proporción de la población de 15 años o mayor que posee una cuenta en alguna institución financiera o con un provedor de servicios de dinero móvil, 2021



Fuente: Banco Mundial (2021a).

Gráfico 2.6.2

Tendencia de la proporción de la población de 15 años o mayor que posee una cuenta en alguna institución financiera o con un provedor de servicios de dinero móvil



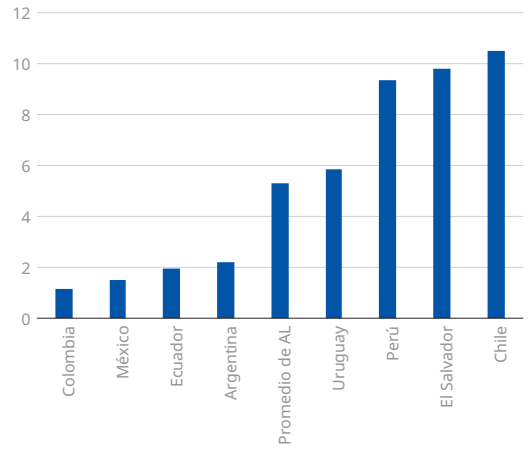
Fuente: Banco Mundial (2021a).

El acceso al crédito de las pymes es esencial para impulsar su productividad. En el gráfico 2.6.3, se observan los préstamos pendientes de pymes como porcentaje del PIB en el año 2021, para las economías de AL. Los porcentajes más bajos que se registraron fueron de 1,1 por ciento para Colombia y 1,5 por ciento para México. En el caso de Colombia, las empresas pequeñas y medianas representaban aproximadamente el 40 por ciento del valor agregado de la economía en el año 2015, y el 60 por ciento del empleo industrial. Con el objetivo de aumentar el acceso a financiamiento de las mipymes del país, se han lanzado distintos programas para cerrar las brechas entre las empresas, como el Fondo Nacional de Garantías, que facilita la entrega de colaterales ofreciendo hasta el 50 por ciento de garantías automáticas a los bancos en caso de que las empresas incumplan el pago del préstamo, así como garantías directas a empresarios (CEPAL 2020).

El promedio de AL fue de un 5,3 por ciento para ese mismo año. Las economías con mayores porcentajes fueron El Salvador, con un 9,8 por ciento, y Chile, con un 10 por ciento. Se observa que, en el año 2021, la economía de AL con mayores préstamos pendientes de pymes registró nueve veces el porcentaje de la economía con el porcentaje más bajo. Esta relación ilustra el contraste entre los países de la región. En Chile, se observa que el 70 por ciento de las instituciones encargadas del fomento productivo reportan operaciones de gasto orientadas exclusivamente a mipymes (CEPAL 2020). En promedio, los préstamos de alguna institución financiera a las a pymes en las economías latinoamericanas, como porcentaje del PIB, han aumentado en el periodo de 2011 a 2021. En este primer año fue un promedio del 3,6 por ciento, mientras que, en el último año del gráfico 2.6.4, el valor fue del 5,3 por ciento.

Gráfico 2.6.3

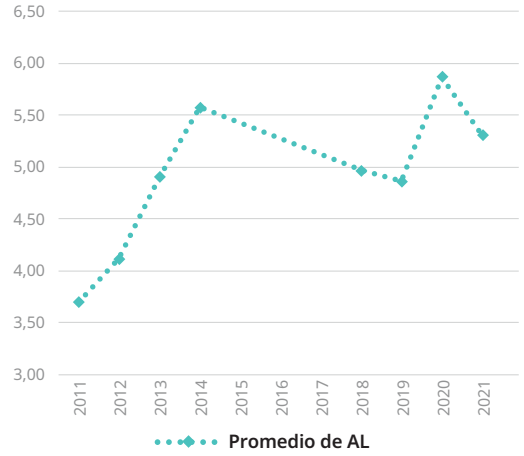
Préstamos pendientes en alguna institución financiera de pymes como porcentaje del PIB, 2021



Fuente: FMI (2023a).

Gráfico 2.6.4

Tendencia de los préstamos pendientes en alguna institución financiera de pymes (%PIB)

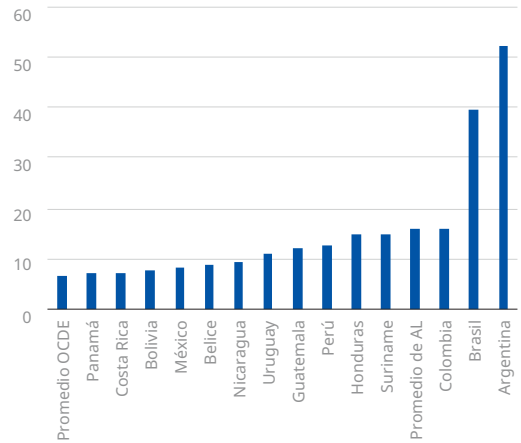


Fuente: FMI (2023a)

Un estudio de McKinsey (2015) encuentra que las pequeñas empresas suelen pagar hasta 20 veces más que las grandes empresas para obtener financiamiento. Se ha demostrado que la tasa de interés en sí es un factor con incidencia en la productividad de los países, que puede afectar el acceso y distribución de recursos (Cette, Fernald y Mojon 2016). Además, Lopez-Salido, Chikis y Goldberg (2021) argumentan cómo las tasas de interés inciden en la productividad a través de la innovación. Los autores demuestran cómo bajas tasas de interés dan más oportunidad de innovar a los rezagados tecnológicamente, lo que conduce a mayor productividad, competencia y crecimiento del mercado. Menores tasas reflejan un mayor acceso a crédito. En el gráfico 2.6.5, se observa que la tasa de interés de préstamo más baja en el año 2022 fue registrada por Panamá, con un valor del 6,9 por ciento, seguida por Costa Rica, con un 7,3 por ciento, y Bolivia, con un 7,7 por ciento. Sin embargo, estos valores estuvieron por encima del promedio de la OCDE, que fue del 6,2 por ciento para ese año. Adicionalmente, el promedio de AL fue del 15,7 por ciento, y tres economías registraron valores mayores que el promedio de la región. Estas fueron Colombia, con un 15,8 por ciento, Brasil, con un 39,4 por ciento, y Argentina, con un 52,0 por ciento. En el periodo de 2000 a 2022, el promedio de la tasa de interés de préstamos para AL ha disminuido, cerrando la brecha con el grupo de países de la OCDE. En el año 2000, AL registró una tasa del 25 por ciento y la OCDE, una del 10 por ciento. Asimismo, en el año 2022, la región registró una tasa del 15,0 por ciento y la OCDE, una del 6,2 por ciento.

Gráfico 2.6.5

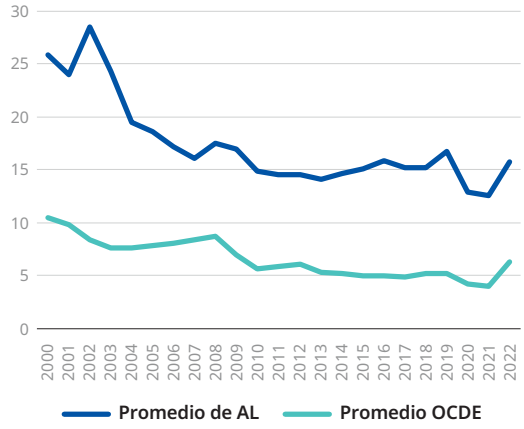
Tasa de interés de préstamos, 2022



Fuente: Banco Mundial (2023c).

Gráfico 2.6.6

Tendencia de la tasa de interés de préstamos



Fuente: Banco Mundial (2023c).

7. Infraestructura física, digital y conectividad de mercados

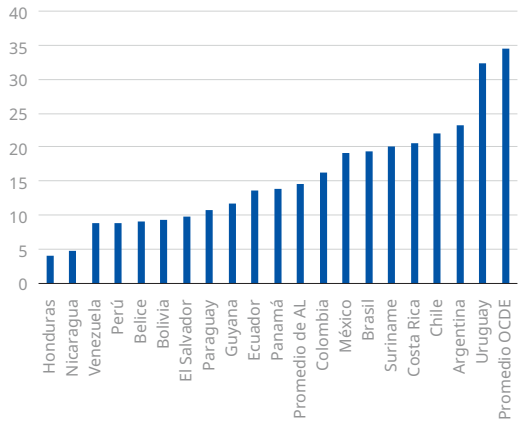
Sin una infraestructura digital adecuada, las empresas están limitadas en su crecimiento y productividad. Cuando los países en desarrollo invierten en su infraestructura digital, las empresas suelen tener mayores ingresos (McKinsey 2015). En particular para el caso de las pymes, el usar y tener acceso a la infraestructura digital tiene numerosos beneficios (aumento de ventas, reducción de costos, optimización de procesos y mayor innovación) (OIT 2021c, 2022b). Por lo tanto, en América Latina se requiere propiciar un ecosistema en el que las pymes puedan beneficiarse de la digitalización. De acuerdo con el Centro de Comercio Internacional (International Trade Centre), este ecosistema debe garantizar el acceso y las herramientas para el manejo de *big data*, crear programas con los que se puedan desarrollar habilidades complejas que faciliten la adopción de tecnologías de punta, fortalecer la calidad regulatoria de los productos digitales, e invertir en tecnologías de la información y la comunicación para cerrar las brechas entre las regiones en el interior de un país (ITC 2018).

En América Latina, la digitalización de la población ha aumentado en la última década: las redes móviles de cuarta generación (4G) alcanzaron una cobertura del 87 por ciento de la población en el año 2019 (Agudelo 2021). En términos de las suscripciones a banda ancha de internet, el acceso es menor. El gráfico 2.7.1 muestra las estadísticas sobre los usuarios de internet de banda ancha por cada 100 personas, en 2021. En este componente, Honduras reportó la menor proporción, con un valor de 4 suscripciones por cada 100 personas, un nivel 3,5 veces menor que el promedio de AL. El país de AL con mayor número de suscripciones fue Uruguay, con 32; este valor es significativamente mayor que el segundo número de suscripciones más alto, que fue Argentina, con 23 por cada 100 personas. Para este mismo año, el promedio de la OCDE fue mayor que el de cualquier economía de AL, con 34 suscripciones por cada 100 personas.

Las economías de América Latina y los países de la OCDE han aumentado significativamente la proporción de suscriptores a internet de banda ancha (véase el gráfico 2.7.2). Sin embargo, el crecimiento en los países de la OCDE ha sido mayor, registrando un valor de 1,4 suscripciones en el año 2000 y 34,3 en 2021. Por otro lado, AL registró un número de suscripciones menor de 1 en el primer año del gráfico 2.7.2 y de 14,6 para el año 2021. En este último año, el promedio de la OCDE registró un número de suscripciones mayor del doble de lo que reportó AL. La inclusión digital de las empresas es esencial para que puedan beneficiarse de la digitalización; en el año 2019, se reportó que el 44 por ciento de las empresas en la región habían comprado insumos en línea y que el 20 por ciento hicieron uso de internet para transacciones de comercio electrónico (Agudelo 2021).

Gráfico 2.7.1

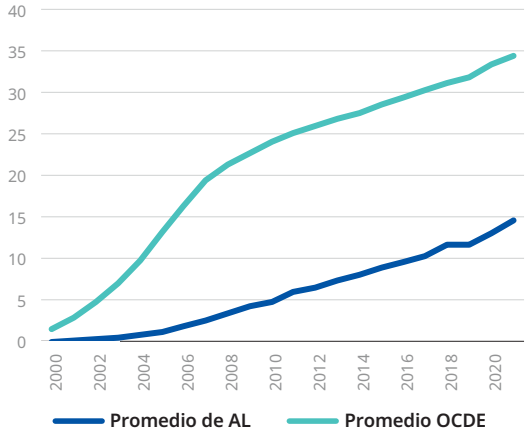
Número de suscripciones a banda ancha por cada 100 personas, 2021



Fuente: Banco Mundial (2023c).

Gráfico 2.7.2

Tendencia del número de suscripciones a banda ancha por cada 100 personas



Fuente: Banco Mundial (2023c).

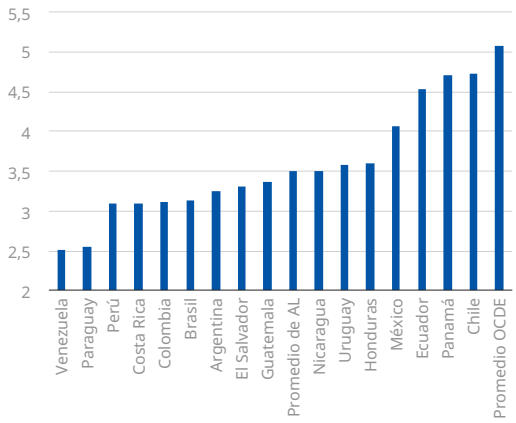
La cantidad y calidad de la infraestructura de un país cumple un papel importante en elevar sus niveles de productividad. En este sentido, se ha demostrado que las existencias de capital físico contribuyen a elevar la productividad (Duggal, Saltzman y Klein 1999; Bhatta y Drennan 2003). Sin embargo, la magnitud de la relación entre infraestructura y productividad puede variar en función el contexto del país, el tipo de infraestructura, la calidad y la forma en que se mide la relación (Deng 2013). De acuerdo con estimaciones realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina presenta una brecha importante en materia de infraestructura. Para reducirla y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, la región tendrá que incrementar su inversión en infraestructura en un 70 por ciento, hasta lograr una inversión del 3,12 por ciento anual del PIB (Brichetti *et al.* 2021).

El índice de calidad de la infraestructura es calculado por el World Economic Forum (WEF) y presentado en su reporte del índice de competitividad global. Dicho índice presenta un estimado de la percepción que se tiene sobre la calidad de la infraestructura en un país. En el gráfico 2.7.3, se observa el índice de percepción de la calidad de la infraestructura total para 2017 (último año con datos disponibles). En esta medición, Venezuela fue la economía latinoamericana con el índice más bajo, con un valor de 2,5, donde 7 es el mejor valor. El promedio de AL fue de 3,5, mientras que la economía con el índice más alto fue Chile, con un valor de 4,7. Sin embargo, el promedio de la OCDE fue de 5, mayor que el de todas las economías de América Latina.

La percepción de calidad de la infraestructura de suministro eléctrico para el año 2017 se observa en el gráfico 2.7.4, en donde Venezuela es el país con el índice más bajo, con un valor de 2,1, seguido por Paraguay con 2,6. Un estudio revela que la baja calidad en la infraestructura de suministro eléctrico en Venezuela puede ser atribuida a las insuficiencias en la gestión de los recursos por parte de las instituciones pertinentes (Jacob 2011). En el caso de los países con los índices más altos, se registraron valores de 6,0 para Uruguay y de 6,1 para Chile. Además, en Chile se reporta una de las duraciones promedio de interrupciones eléctricas más bajas, pues registró un valor de 3 horas en el año 2019, cuando el promedio de AL para ese año fue de 17 horas (Brichetti *et al.* 2021).

Gráfico 2.7.3

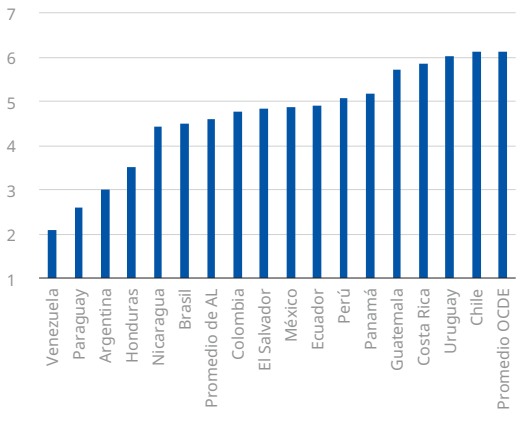
Índice de percepción de la calidad de infraestructura con una escala del 1 al 7 (mejor): infraestructura total, 2017



Fuente: Banco Mundial (2017).

Gráfico 2.7.4

Índice de percepción de la calidad de infraestructura con una escala del 1 al 7 (mejor): infraestructura de suministro eléctrico, 2017



Fuente: Banco Mundial (2017).

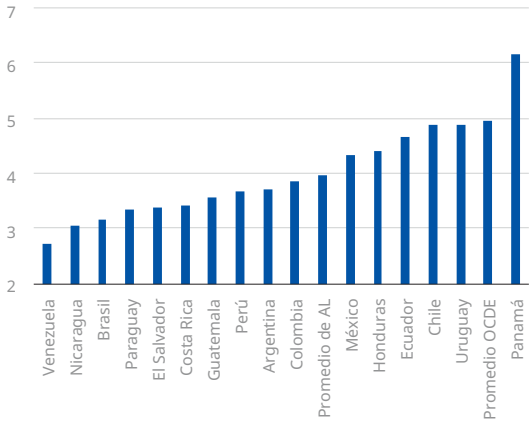
En el gráfico 2.7.5, se observa que la percepción de calidad de la infraestructura portuaria para el año 2017 fue de 3,9 para AL y de 4,9 para el promedio de la OCDE. Para ese mismo año, las economías que registraron el índice más bajo fueron Venezuela y Nicaragua, con 2,7 y 3,0 respectivamente (en una escala del 1 al 7). Por otro lado, la economía que reportó el índice más alto fue Panamá, con 6,1, el cual fue mayor

que el promedio de la OCDE. En el caso de la infraestructura del transporte áreo, Paraguay registró el índice más bajo, seguido por Venezuela. Estos índices fueron de 2,5 y 2,6, los cuales son significativamente menores que el tercer índice más bajo, que fue el de Guatemala, con 3,4. En el gráfico 2.7.6, se observa que el promedio de AL fue de 4,1 y el de los países de la OCDE fue de 5,3. En este caso, dos países de AL registraron índices por encima del promedio de los países de la OCDE: Uruguay y Panamá.

Por último, en el gráfico 2.7.7, se muestra el índice de percepción de calidad para las carreteras en el año 2019. Guatemala fue la economía de AL con el índice más bajo, en penúltimo lugar estuvo Venezuela y en antepenúltimo, Paraguay. Asimismo, el promedio de AL fue de 3,6 y el promedio de la OCDE fue de 4,9. Dos economías de AL registraron índices de calidad de la infraestructura en carreteras iguales o más elevados que el promedio de la OCDE: Ecuador, con un índice de 4,9, y Chile, con uno de 5,2. Además, también es importante reconocer los rezagos regionales en el interior de las economías latinoamericanas. Un estudio estima que se requiere una inversión anual del 1,04 por ciento del PIB de AL para cerrar la brecha en la infraestructura de caminos entre las zonas rurales y urbanas (Brichetti *et al.* 2021).

Gráfico 2.7.5

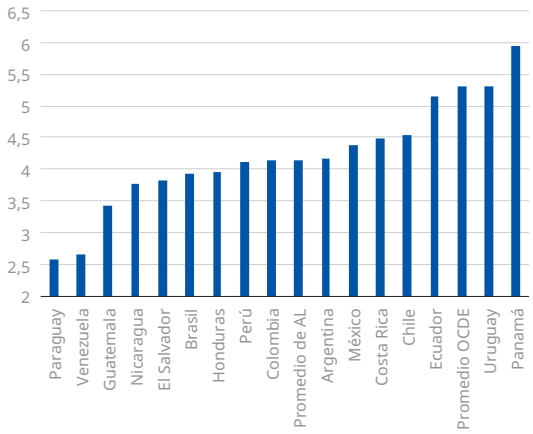
Índice de percepción de la calidad de infraestructura con una escala del 1 al 7 (mejor): infraestructura portuaria, 2017



Fuente: Banco Mundial (2017).

Gráfico 2.7.6

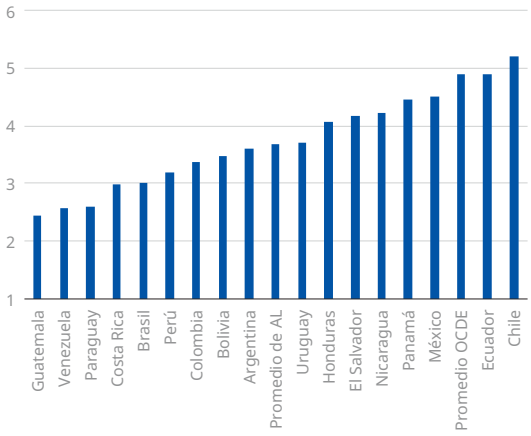
Índice de percepción de la calidad de infraestructura con una escala del 1 al 7 (mejor): transporte aéreo, 2017



Fuente: Banco Mundial (2017).

Gráfico 2.7.7

Índice de percepción de la calidad de infraestructura con una escala del 1 al 7 (mejor): carreteras, 2019

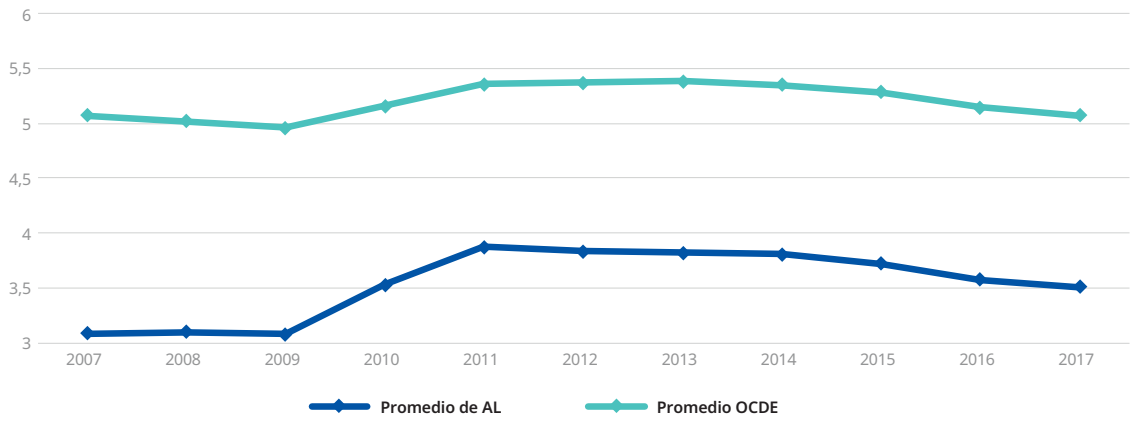


Fuente: Banco Mundial (2019b).

A nivel agregado, es importante mencionar que el índice de percepción de la calidad de la infraestructura total en América Latina retrocedió gradualmente entre 2011 y 2017, último año con datos disponibles. De igual manera, el promedio de la OCDE también registró una tendencia a la baja el mismo periodo. Mientras tanto, la brecha entre América Latina y los países de la OCDE aumentó marginalmente. En el corto plazo, es importante fomentar la actualización de este índice para contar con estadísticas recientes y comparables entre las economías de América Latina, las cuales pueden facilitar las decisiones informadas de inversión en términos de infraestructura para cada país.

Gráfico 2.7.8

Tendencia del índice de percepción de la calidad de infraestructura con una escala del 1 al 7 (mejor): infraestructura total



Fuente: Banco Mundial (2017).

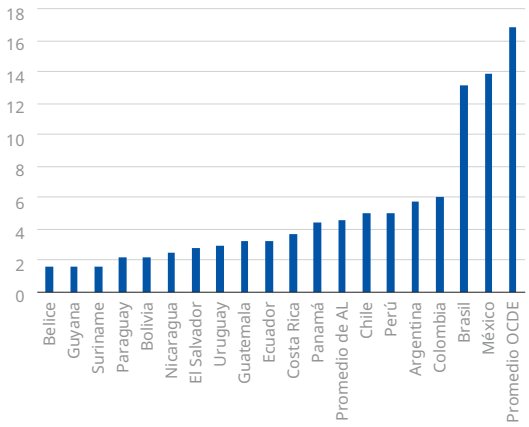
Es importante analizar la conectividad con los mercados internacionales debido a su importancia en el impulso de la productividad. La competencia internacional genera incentivos para que las empresas mejoren su nivel de eficiencia y se mantengan competitivas. Además, la conectividad con mercados internacionales también facilita la transferencia de tecnología, mejores prácticas empresariales y conocimientos técnicos; lo que a su vez eleva la productividad. La apertura a mercados internacionales también favorece la productividad de los países a través de la innovación y la diversificación del riesgo. Cuando una firma ingresa al mercado de exportación, registra incrementos de productividad derivados de las transferencias tecnológicas y economías de escalas propias del proceso (Schwarzer 2017). Por otro lado, la diversificación propicia una mejor distribución de los riesgos de inversión, lo que favorece el crecimiento económico (Acemoglu y Zilibotti 1997). Crespi y Zuniga (2012) demuestran cómo, en seis países de la región (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Uruguay), la exportación aumenta la propensión a invertir en innovación, lo que a su vez se traduce en mayor productividad.

El índice de penetración de mercados brinda información sobre el alcance de las exportaciones de un país. Las economías de AL con los índices más bajos en el año 2020 fueron Belice, con 1,4 por ciento, Guyana, con 1,5 por ciento, y Suriname, con 1,6 por ciento. El índice de la OCDE para ese año fue casi cuatro veces el índice de la región. Asimismo, todas las economías de AL se ubicaron debajo del promedio de la OCDE. Las economías con mayores índices fueron Brasil, con un valor del 13,1 por ciento, y México, con uno del 13,8 por ciento. En estas dos economías, se observa un crecimiento en las exportaciones a partir de la apertura de sus industrias a los mercados internacionales en la década de los ochenta; a pesar de que ambos países pusieron fin a su modelo de sustitución de importaciones, la transformación estructural fue distinta. En el caso de México, predominó la especialización en industrias intensivas en mano de obra, como la automotriz y la textil, con los Estados Unidos de América como su principal socio comercial. Mientras que Brasil reportó una especialización en sectores de recursos naturales, intensivos en capital (Da Costa *et al.* 2021).

La historia de las exportaciones de México y Brasil no representa la trayectoria general de América Latina. En el periodo de 1992 a 2020, mientras que el índice de penetración de mercados de la OCDE aumentaba significativamente, en América Latina se registró una trayectoria casi plana, lo que incrementó la brecha entre los dos grupos de países. En el año 1992, la región reportó un índice del 2,9 por ciento y la OCDE, uno del 9,8 por ciento. Para el año 2020, AL registró un índice del 4,4 por ciento, mientras que la OCDE, uno del 16,8 por ciento.

Gráfico 2.7.9

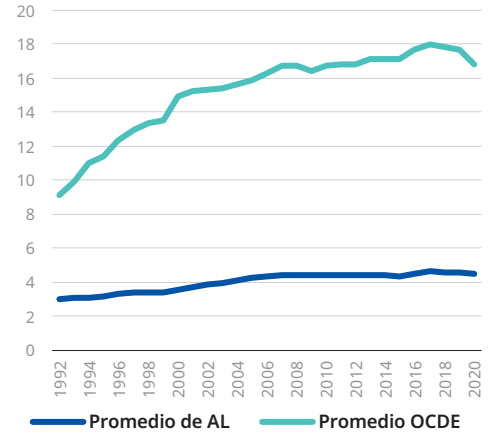
Índice de penetración de mercados, 2020



Fuente: WITS (2021).

Gráfico 2.7.10

Tendencia del índice de penetración de mercados



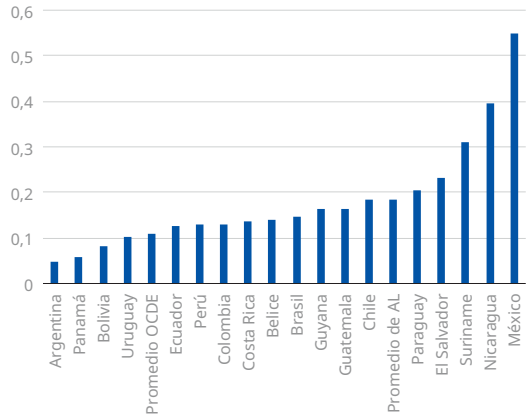
Fuente: WITS (2021).

El índice de concentración de mercados refleja la concentración de exportaciones en pocos socios comerciales utilizando un valor de 0 a 1, donde 1 indica dependencia total de un solo socio comercial, lo cual se considera como un aspecto peyorativo al generar una dependencia del ciclo económico de otro país. Las economías latinoamericanas con los mejores resultados, es decir los índices de HH (Heirfindahl-Hirschman) más bajos, en el año 2020, fueron Argentina, con 0,04, Panamá, con 0,05, y Bolivia, con 0,07 (gráfico 2.7.11). Esto indica una mayor diversificación de exportaciones con respecto al promedio de América Latina, que registró un índice de HH de 0,18 en ese mismo año. Por otro lado, las economías latinoamericanas con mayores índices de HH fueron Suriname, con 0,31, Nicaragua, con 0,39, y México, con 0,54. Es por ello que, a pesar de que México cuenta con una elevada penetración de exportaciones a nivel mundial, todavía tiene una alta dependencia de unos pocos socios comerciales, concentrando sus exportaciones mayormente en los Estados Unidos de América.

Tanto el promedio de la OCDE como el de AL para el índice de concentración de mercados han disminuido en el periodo de 1992 a 2020, lo que refleja una mayor diversificación en los socios comerciales (gráfico 2.7.12). Sin embargo, la brecha entre los dos grupos de países se incrementó en el periodo de estudio. En 1992, el índice de la región fue de 0,25 y el de la OCDE, de 0,22. En el año 2020, estos índices fueron de 0,18 para AL y 0,1 para la OCDE.

Gráfico 2.7.11

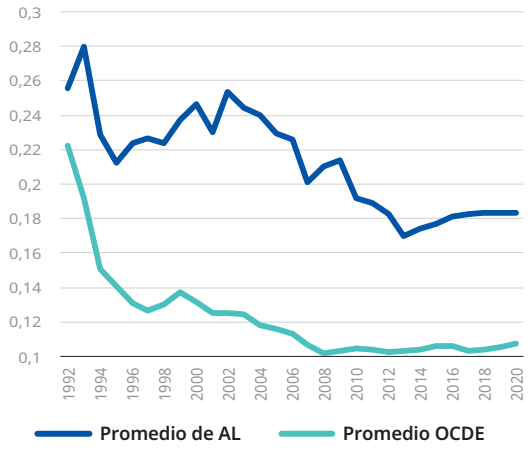
Índice de HH de concentración de mercado, 2020



Fuente: WITS (2021).

Gráfico 2.7.12

Tendencia del índice de HH de concentración de mercado



Fuente: WITS (2021).

8. Derechos de propiedad y Estado de derecho

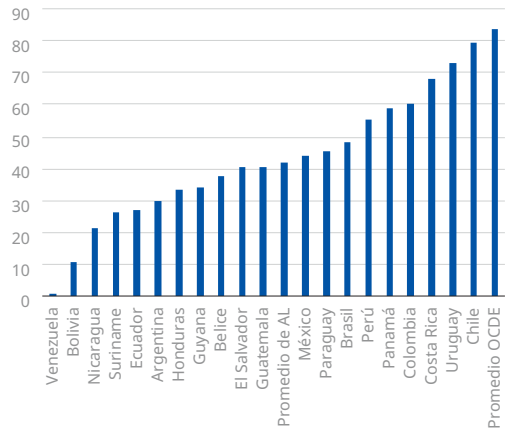
Al garantizar la protección de los derechos de propiedad, se reduce el riesgo de invertir en una economía y se promueve el acceso al financiamiento, ya que los activos pueden ser utilizados como garantía, lo que impulsa la inversión y el crecimiento de la productividad. En términos de la protección de la propiedad física, un metaanálisis de 20 estudios de distintos países de ingresos bajos y medio-bajos de América Latina, el sur de Asia, el este de Asia, y África, demuestra cómo el reconocimiento de derechos de propiedad y la tenencia de tierras agrícolas fomentan la productividad y aumentan los ingresos (Lawry *et al.* 2014).

En América Latina, la insatisfacción por los servicios de gobierno ha aumentado en los últimos años; en 2018, el 63 por ciento de los ciudadanos reportaron tener poca o nada de confianza en su gobierno. Esta caída de la confianza en los gobiernos lleva a una disminución en el pago de impuestos, lo que mitiga los ingresos gubernamentales y la inversión pública, llevando a un incumplimiento de las expectativas de los ciudadanos y una reducción de su confianza en estos; lo que crea un círculo vicioso que ha sido denotado como una trampa institucional (OCDE 2019). Dada la baja percepción de la calidad regulatoria y del Estado de derecho que se observa en América Latina, se puede destacar que algunas economías de la región se encuentran dentro de dicha trampa institucional.

El índice de calidad regulatoria utiliza una escala del 0 al 100 (mejor resultado) para medir la percepción de la capacidad del gobierno de formular e interpretar políticas y regulaciones que apoyen el desarrollo del sector privado. En el año 2020, las economías con los índices más bajos fueron Venezuela, con 0,9, Bolivia, con 11,0, y Nicaragua, con 21,0. El promedio de AL fue de 41,7 para ese mismo año, el cual fue equivalente a la mitad del índice de la OCDE. Las economías de AL con los mayores índices fueron Costa Rica, con 68,2, Uruguay, con 73,0, y Chile, con 79,3. Sin embargo, dichos valores fueron menores que el promedio de la OCDE. En el gráfico 2.8.1, se observa que la tendencia del índice de calidad regulatoria para AL ha sido negativa en el periodo de 1996 a 2020. Durante este periodo, el promedio de la OCDE registró valores constantes, lo que aumentó la brecha entre AL y las economías de la OCDE. En el año 1996, el índice de calidad regulatoria de AL fue 52 y el de la OCDE fue 83. En el año 2020, estos valores fueron 41 y 83, respectivamente. Por lo tanto, la percepción de la calidad regulatoria en AL ha ido disminuyendo a lo largo de los años, alejándose cada vez más de los niveles observados en los países de la OCDE.

Gráfico 2.8.1

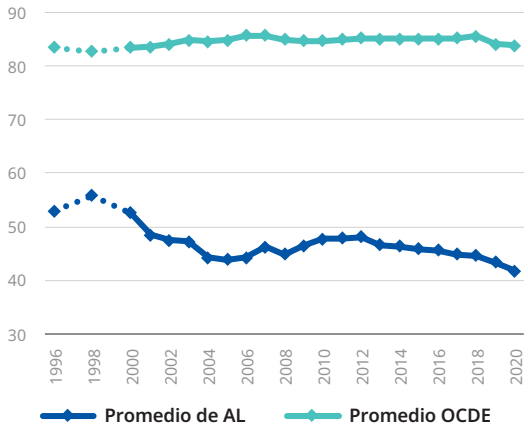
Calidad regulatoria con una escala del 0 al 100 (mejor), 2020



Fuente: Banco Mundial (2023b).

Gráfico 2.8.2

Tendencia de la calidad regulatoria con una escala del 0 al 100 (mejor)



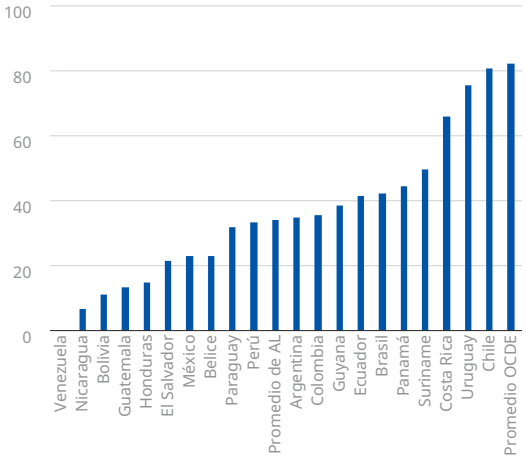
Fuente: Banco Mundial (2023b).

El índice de Estado de derecho publicado por el Banco Mundial mide la percepción sobre el grado de confianza y cumplimiento de las leyes, y utiliza una escala del 0 al 100 (mejor resultado). En este ámbito, Venezuela registró el menor índice en el año 2020, con un valor de 0. El segundo índice más bajo fue de 7,2 para Nicaragua, seguido de 11,5 para Bolivia. Para ese año, el promedio de la OCDE fue un índice equivalente a 2,3 veces lo registrado en América Latina. Así, se observa que el promedio de la OCDE estuvo por encima incluso del de las economías de AL con mayores índices. Estas fueron Costa Rica, con un índice de 66,3, Uruguay, con uno de 75,9, y Chile, con 80,7. A pesar de registrar los valores de calidad regulatoria y de Estado de derecho más elevados de la región, Chile ha reportado una contracción en ambos índices durante los últimos años.

La tendencia durante el periodo de 1996 a 2020 del índice de Estado de derecho para los promedios de AL y la OCDE se observan en el gráfico 2.8.3. En el caso de la OCDE, la tendencia ha sido casi plana, registrando un índice de 82,3 en 1996 y uno de 81,9 en el año 2020. Por otro lado, la estadística promedio de América Latina registra una disminución durante este mismo periodo, con valores de 41,2 para 1996 y 34,5 para el año 2020. Estas diferencias en las tendencias de los dos grupos de países llevaron a que la brecha entre ellos aumentara.

Gráfico 2.8.3

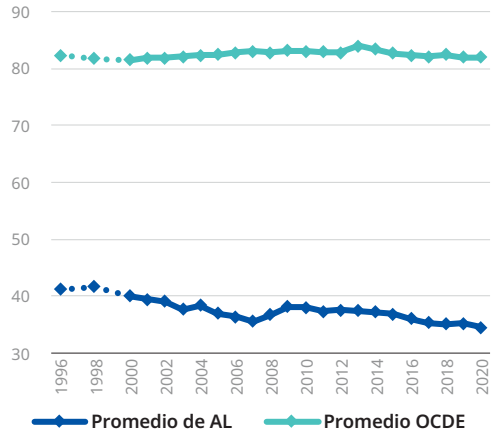
Percepción del Estado de derecho con una escala del 0 al 100 (mejor)



Fuente: Banco Mundial (2023b).

Gráfico 2.8.4

Tendencia de la percepción del Estado de derecho con una escala del 0 al 100 (mejor)



Fuente: Banco Mundial 2023b).

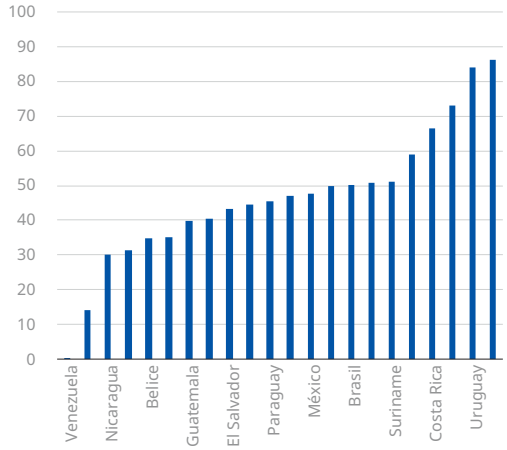
Por su parte, el Estado de derecho (el marco de leyes e instituciones) es primordial para asegurar que se cumplen los derechos fundamentales para las personas y empresas, incluidos los derechos de propiedad. Un Estado de derecho eficiente y de buena calidad beneficia el crecimiento de las pequeñas empresas (Islam 2003), fomenta la innovación y la inversión extranjera, y aumenta la recaudación fiscal (Esposito *et al.* 2014). En esta misma línea, un estudio con una muestra de 120 países encuentra una relación estadísticamente significativa entre el Estado de derecho y variables económicas como el PIB per cápita y la productividad laboral (Guillemette *et al.* 2017).

El índice de derechos de propiedad utiliza una escala del 0 al 100 (mejor resultado), en la que, a partir de 80, los derechos de propiedad se consideran dentro de la categoría de Estados «libres» (gráfico 2.8.5). Venezuela registró el índice más bajo en el año 2022, con un valor de 0,1, seguido de Bolivia, con un índice de 14,1, y Nicaragua, con uno de 30,1. El promedio de la OCDE para ese mismo año fue casi el doble del índice de AL. Costa Rica y Chile están entre las economías latinoamericanas con mayores índices, con valores de 66,4 y 73,0 respectivamente. Uruguay fue la única economía de AL con datos disponibles que registró un índice de derechos de propiedad mayor de 80, llegando a la categoría de Estado «libre». Sin embargo, todos los índices de las economías latinoamericanas estuvieron por debajo del promedio de la OCDE en el año 2022.

El gráfico 2.8.6 muestra la trayectoria del índice de derechos de propiedad para el promedio de AL y de la OCDE durante el periodo de 1995 a 2022. La región pasó de tener un índice que consideraba a los derechos de propiedad «mayormente no libres» en 1995 a «reprimidos» en el año 2022. Lo contrario se observó en los países de la OCDE. Durante este mismo periodo, los derechos de propiedad promedio en la OCDE pasaron de considerarse «mayormente libres» a «libres». En el primer año del gráfico, el índice de AL fue 50 y el de la OCDE fue 75. Casi tres décadas después, en 2022, AL registró un índice de 44 (retrocediendo significativamente) y la OCDE, uno de 86 (mejorando de manera importante).

Gráfico 2.8.5

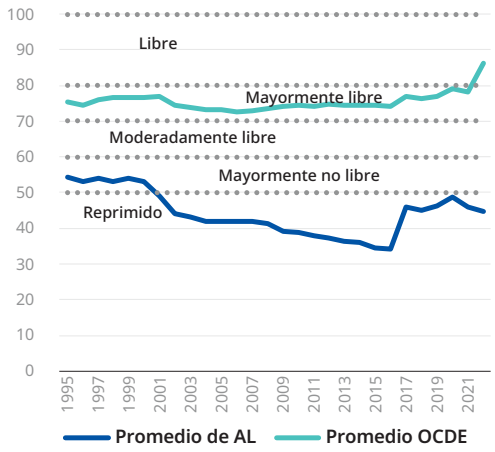
Índice de derechos de propiedad, 2022



Fuente: The Heritage Foundation (2023).

Gráfico 2.8.6

Tendencia del índice de derechos de propiedad



Fuente: The Heritage Foundation (2023).

9. Gobernanza y políticas anticorrupción

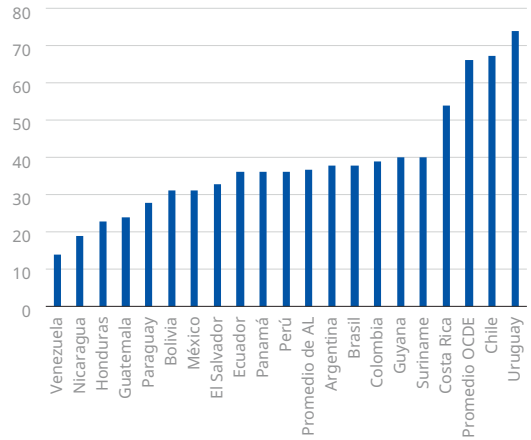
La corrupción puede mitigar el crecimiento de la productividad al crear distorsiones en la asignación de recursos en una economía, lo cual reduce el nivel de eficiencia. De acuerdo con Rose-Ackerman y Palifka (2016), los gobiernos corruptos toman decisiones basados en la búsqueda de rentas personales, por lo que fallan en maximizar el bienestar social, pues otorgan la provisión de bienes y servicios públicos a contratistas con conexiones o dispuestos a ofertar sobornos, antes que a aquellos que ofrezcan mejor calidad (Rose-Ackerman y Palifka 2016). En este sentido, de acuerdo con un estimado de la OCDE, la corrupción aumenta en cerca de un 10 por ciento los costos del sector privado para hacer negocios (OCDE 2014).

A pesar de los esfuerzos implementados para disminuir la corrupción en diversas economías de América Latina, esta región todavía se percibe como una de altos niveles promedio de corrupción (Rotberg 2018). Un estudio encuentra que mejoras en los indicadores de corrupción de la región están asociados con incrementos en los ingresos per cápita de las economías; sin embargo, las expectativas de corrupción están profundamente arraigadas en las sociedades de América, lo que dificulta su erradicación (Lipton, Werner y Gonçalves 2017). El índice de percepción de la corrupción utiliza una escala que va del 0 al 100, donde los valores cercanos a 100 indican una percepción de transparencia en las instituciones públicas (gráfico 2.9.1). En 2022, Venezuela fue la economía con el índice más bajo, registrando un valor de 14, 2.6 veces menor que el promedio de AL. La organización Transparencia Internacional hizo recientemente un llamado en contra de la aprobación de una ley que busca limitar el espacio cívico en Venezuela; asimismo, el documento menciona la relevancia de la sociedad civil en Venezuela para mejorar el índice de corrupción del país, que es el más bajo en toda América (Transparencia Internacional 2023).

Por otro lado, Uruguay registró el mejor resultado en este componente, llegando a un índice de 74, equivalente a dos veces el promedio de América Latina, además de colocarse por encima del promedio de la OCDE. En el año 2018, Uruguay fue el único país en AL que prohibía las contribuciones en efectivo durante las campañas electorales (OCDE 2018). Chile ocupó el segundo lugar, con un valor de 67, también por arriba del promedio de la OCDE. A nivel regional, se observa que el resto de los países en AL reportaron índices de corrupción más bajos que el promedio de los países de la OCDE, lo que indica la presencia de mayores niveles de corrupción en la región. En el periodo de 2012 a 2022, la brecha entre la región y los países de la OCDE para el índice de percepción de corrupción se mantuvo constante, y América Latina registró niveles consistentemente más bajos durante todos los años (lo que indica una mayor percepción de corrupción). En 2012, el índice para el promedio de AL fue de 38,1 y el promedio de la OCDE fue 66,6. Una década después, en 2022, el índice fue de 36,8 para AL y de 66,3 para la OCDE (gráfico 2.9.2).

Gráfico 2.9.1

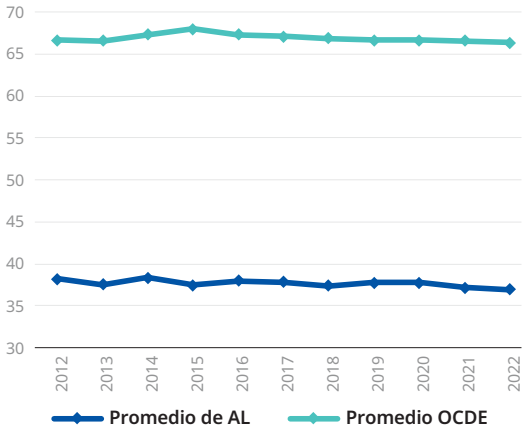
Índice de percepción de la corrupción con una escala del 0 al 100 (mejor), 2022



Fuente: Transparencia Internacional (2022).

Gráfico 2.9.2

Tendencia del índice de percepción de la corrupción con una escala del 0 al 100 (mejor)



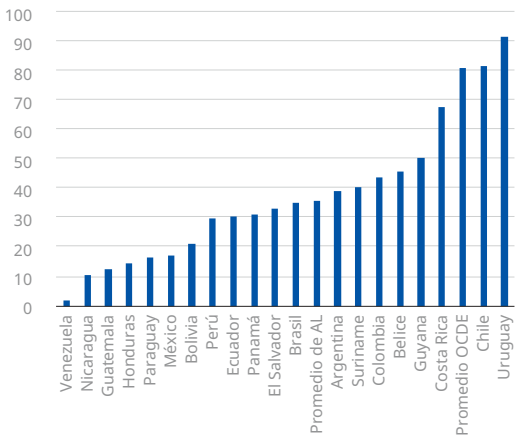
Fuente: Transparencia Internacional (2022).

El índice de control de la corrupción publicado por el Banco Mundial refleja la percepción de la población sobre el uso del poder público para beneficio privado. Utiliza una escala del 0 al 100, donde 100 es el mejor valor. En el gráfico 2.9.3, se observa que Venezuela registró el índice más bajo en el año 2022, con un valor de 1,9. El segundo índice más bajo fue el de Nicaragua, que fue 5,2 veces el índice de Venezuela, lo que refleja un rezago significativo por parte del último lugar de la región en términos de control de la corrupción. Asimismo, Chile y Uruguay fueron nuevamente los únicos países de AL que registran índices por arriba del promedio de la OCDE, con valores de 81 y 91 respectivamente.

El gráfico 2.9.4 muestra la tendencia del índice de control de corrupción para el grupo de países de AL y de la OCDE. Se observa que la brecha entre los dos grupos se ha incrementado en el periodo de 1996 a 2020. En este primer año, el índice para AL fue 43, mientras que el promedio de la OCDE fue 81, casi el doble del de la región. En el año 2020, la región promedió un índice de 35 y la OCDE uno de 80, más del doble. Ambos grupos registraron una disminución en el índice de control de corrupción; sin embargo, la caída en los resultados promedio de América Latina fue significativamente más pronunciada que lo ocurrido en las economías de la OCDE.

Gráfico 2.9.3

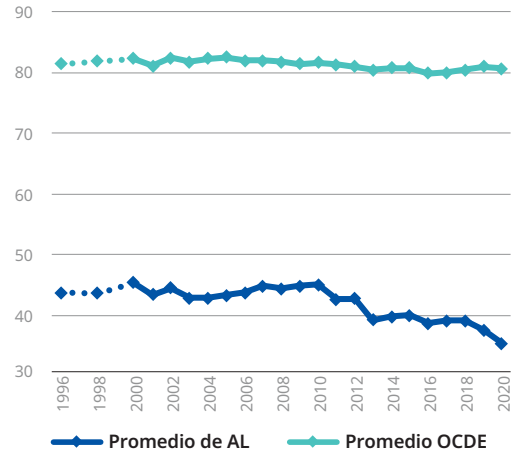
Índice de control de corrupción con una escala del 0 al 100 (mejor), 2022



Fuente: Banco Mundial (2023b).

Gráfico 2.9.4

Tendencia del índice de control de corrupción con una escala del 0 al 100 (mejor)



Fuente: Banco Mundial (2023b).

Capítulo 3

Análisis descriptivo de la relación entre las variables que crean un entorno propicio para hacer negocios y la productividad de los países

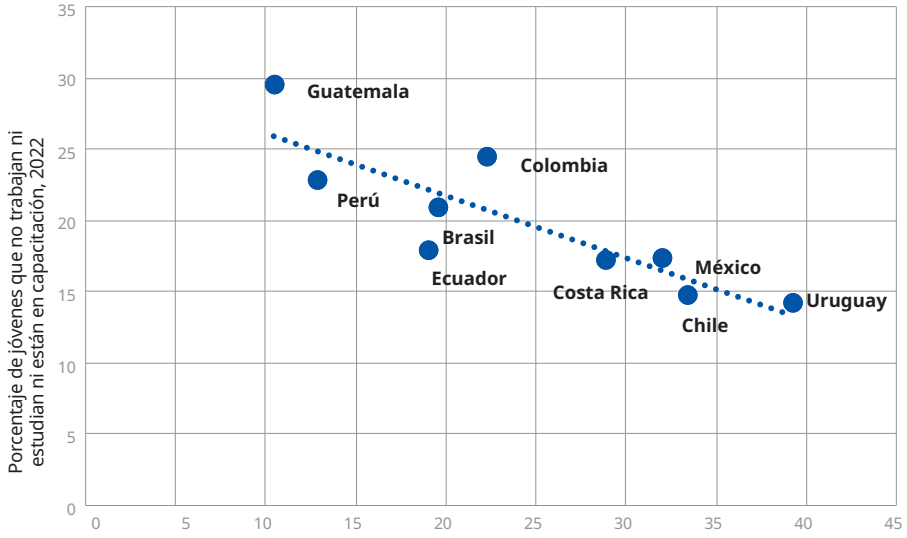
Tal como se documentó en la sección anterior, para crear un ambiente propicio para hacer negocios que impulse la productividad de las economías latinoamericanas, es importante tomar en cuenta un conjunto robusto de factores, tales como: estabilidad macroeconómica, calidad educativa y desarrollo de habilidades, mercados laborales inclusivos, informalidad laboral, innovación y emprendimiento, acceso a crédito, infraestructura y conectividad de mercados, calidad regulatoria y Estado de derecho, así como gobernanza y políticas anticorrupción.

Los diversos estudios citados en este documento encuentran evidencia cuantitativa que respalda la relevancia de cada uno de dichos componentes para incrementar la productividad. Como evidencia adicional, esta sección presenta diversas correlaciones entre dichos componentes y las estadísticas de productividad de las 13 economías latinoamericanas, con datos disponibles en The Conference Board. Se utilizan las estadísticas sobre la productividad laboral por hora trabajada. Aunque esta medida de productividad es parcial, pues solo mide la productividad de la fuerza laboral y no la del capital, presenta significativamente menor volatilidad con relación a la tasa de crecimiento de la PTF, lo que facilita la interpretación de datos anuales. Asimismo, las correlaciones identificadas abren las puertas a futuras investigaciones que profundicen en el análisis causal entre la productividad laboral y cada variable que se destaca, con el fin de identificar, a través de evidencia empírica, los canales por los cuales cada condición impulsa la productividad.

En primer lugar, es importante destacar que la falta de integración y capacitación de los jóvenes en el mercado laboral muestra una relación negativa y significativa con los niveles de productividad de las economías latinoamericanas. En el año 2022, dentro de la muestra de países de los que se cuenta con información, Guatemala registró la productividad laboral más baja, así como la proporción más elevada de jóvenes que no trabajan ni estudian ni están en capacitación; mientras que Uruguay registró la productividad laboral más elevada y la tasa más baja de jóvenes en esta condición. Además, se observa que el resto de los países registra valores cercanos a la línea de tendencia, lo que indica que este comportamiento es consistente para todos los países.

Gráfico 3.1

Porcentaje de jóvenes que no trabajan ni estudian ni están en capacitación, y la productividad laboral por hora trabajada, 2022

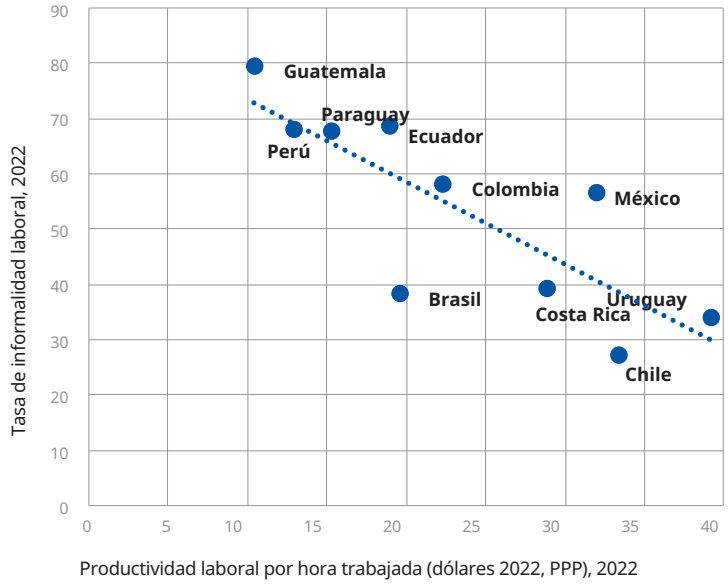


Fuentes: ILOSTAT (2023b), The Conference Board (2023).

La informalidad laboral demostró ser un indicador que está relacionado con la productividad laboral de los países. Esta relación es negativa y significativa, y Guatemala volvió a registrar la productividad laboral más baja en el año 2022, y la mayor tasa de informalidad laboral para el mismo año (gráfico 3.2.1). Además, se observa la misma relación entre la tasa de informalidad laboral para la población de jóvenes de entre 15 y 24 años, y en este caso la relación es más pronunciada, con un coeficiente de correlación más elevado y una línea de tendencia más inclinada (gráfico 3.2.2). Este resultado va en línea con los hallazgos sobre la baja productividad que registran los trabajadores informales comparados con los formales (Banco Mundial 2019a). En el caso de México, se observa un comportamiento atípico, ya que, para los niveles de informalidad de esta economía, se esperaría un nivel de productividad laboral promedio menor. Esto puede ser explicado porque el promedio en México considera a las empresas de mayor tamaño, que suelen ser multinacionales o manufactureras con tecnologías de frontera y un componente de exportaciones, cuya productividad laboral es significativamente mayor (McKinsey 2014).

Gráfico 3.2.1

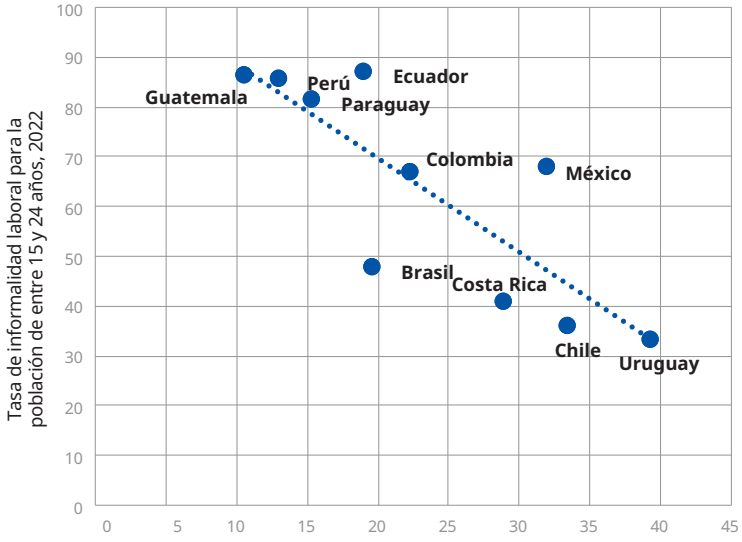
Tasa de informalidad laboral y productividad laboral por hora trabajada, 2022



Fuentes: ILOSTAT (2023c), The Conference Board (2023).

Gráfico 3.2.2

Tasa de informalidad laboral para la población de entre 15 y 24 años y productividad laboral por hora trabajada, 2022

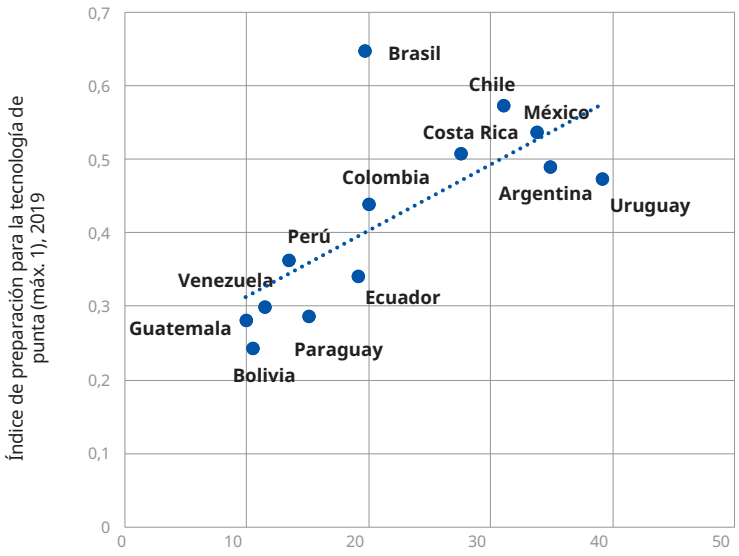


Fuentes: ILOSTAT (2023c), The Conference Board (2023).

En cuanto a la capacidad de una economía de adoptar tecnología de punta, se encuentra también una relación positiva con la productividad laboral de los países de la región (gráfico 3.3). Así, países como Guatemala y Bolivia registran los menores valores de productividad laboral por hora trabajada y menores valores en el índice de preparación para la tecnología de punta que estima la UNCTAD. Este índice cuenta con distintos componentes, como habilidades de la fuerza laboral y patentes en investigación y desarrollo. Por lo tanto, refleja las capacidades de los trabajadores para adoptar tecnología de punta, lo que influye en su productividad.

Gráfico 3.3

Índice de preparación de la tecnología de punta y productividad laboral por hora trabajada, 2019

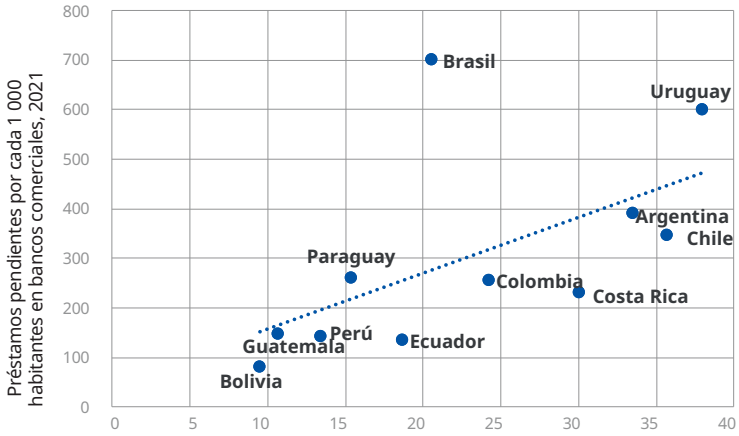


Fuentes: United Nations Conference on Trade and Development (2019), The Conference Board (2023).

El gráfico 3.4 muestra que la inclusión financiera de los países está relacionada con su productividad laboral. Así, a mayor número de préstamos por cada 1 000 habitantes en bancos comerciales, los países reportan mayor productividad laboral, y viceversa; es decir que, a menor número de préstamos, también se observan menores niveles de productividad laboral en América Latina. En este caso, Brasil cuenta con valores atípicos, registrando el mayor número de préstamos pendientes por cada 1 000 habitantes y, al mismo tiempo, su productividad laboral por hora trabajada está por debajo de la de otros países de la región. A pesar del comportamiento de Brasil, la relación es positiva y significativa. Esto destaca también la importancia de generar un ambiente de negocios propicio en todos los componentes abarcados en este *Informe*, ya que la mejora en el estado de uno solo de ellos puede no ser suficiente para detonar todo el potencial productivo de una economía.

Gráfico 3.4

Préstamos pendientes por cada 1 000 habitantes en bancos comerciales y productividad laboral por hora trabajada, 2021

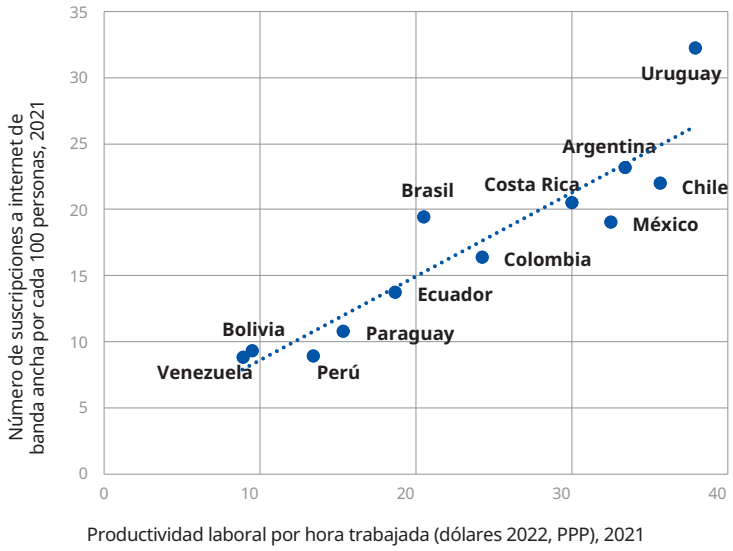


Fuentes: Banco Mundial (2021a), The Conference Board (2023).

La inclusión digital es relevante para impulsar la productividad laboral de la población. En el gráfico 3.5, se puede observar cómo Uruguay registra la mayor productividad laboral de las 13 economías con datos comparables disponibles en The Conference Board, y también el mayor número de suscripciones a internet de banda ancha, mientras que Venezuela es el país con menores niveles de productividad laboral y menor número de suscripciones a internet de banda ancha. La relación entre las dos variables es positiva y significativa, mostrando un patrón consistente en el resto de los países.

Gráfico 3.5

Número de suscripciones a internet de banda ancha por cada 100 personas y productividad laboral por hora trabajada, 2021

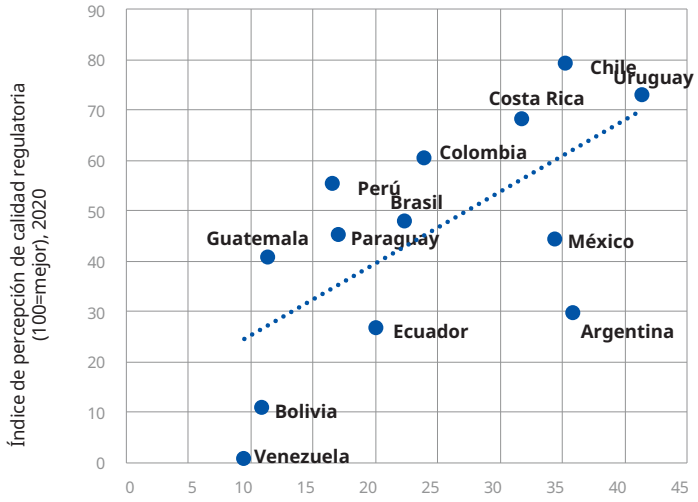


Fuentes: Banco Mundial (2023c), The Conference Board (2023).

La calidad regulatoria de los países en América Latina está relacionada con su productividad laboral, asimismo, se encuentra una relación positiva y significativa para la productividad laboral y la percepción de Estado de derecho. Por lo tanto, los países donde las leyes son respetadas y claras, tienden a registrar mayores niveles de productividad. Tanto en el caso de calidad regulatoria como en la percepción del Estado de derecho, Venezuela registra los valores más bajos, además de contar con los menores niveles de productividad laboral (gráficos 3.6.1 y 3.6.2). Adicionalmente, el índice de derechos de propiedad de un país los califica en las categorías de «reprimidos», «mayormente no libres», «moderadamente libres», «mayormente libres» y «libres», que reflejan la calidad y confianza que se tiene en los derechos de propiedad (gráfico 3.6.3). En este caso, se puede observar una relación consistente con los distintos resultados y categorías, en relación con los niveles de productividad de cada economía.

Gráfico 3.6.1

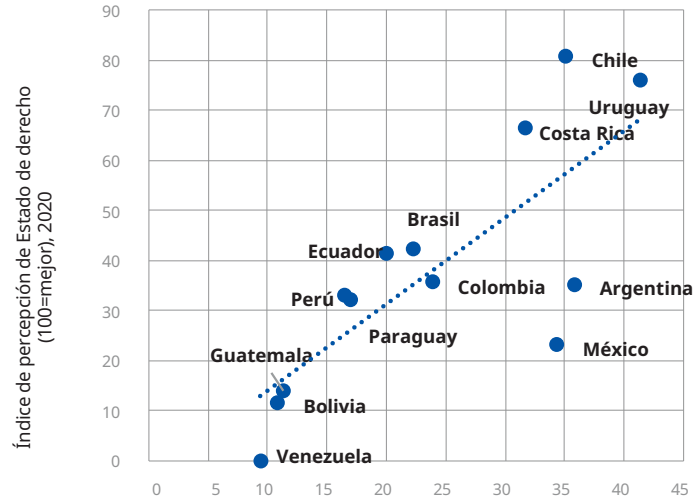
Índice de calidad regulatoria y productividad laboral por hora trabajada



Fuentes: Banco Mundial (2023b), The Conference Board (2023).

Gráfico 3.6.2

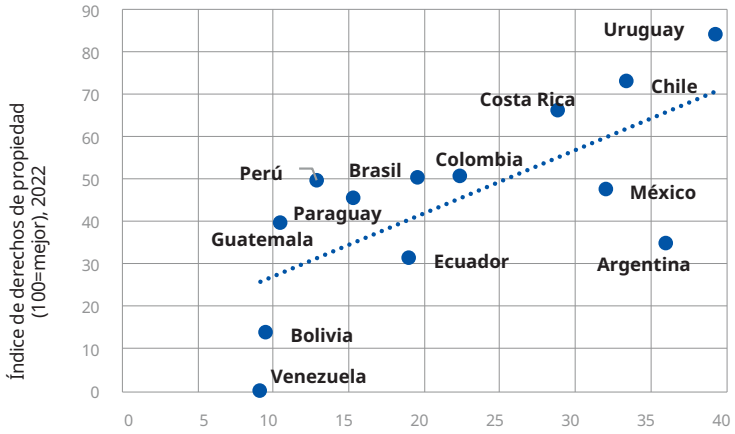
Índice de percepción de Estado de derecho y productividad laboral por hora trabajada, 2020



Fuentes: Banco Mundial (2023b), The Conference Board (2023).

Grafica 3.6.3

Índice de derechos de propiedad y productividad laboral por hora trabajada

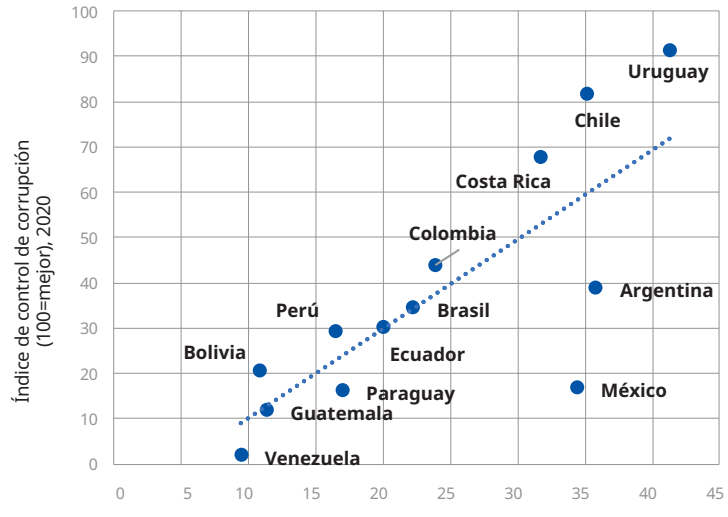


Fuentes: The Heritage Foundation (2023), The Conference Board (2023).

Por último, los niveles de corrupción influyen en el entorno para hacer negocios, fenómeno que significa un costo económico y social en la región, por lo que su reducción es uno de los mayores retos de los gobiernos (Engel *et al.* 2018). Los gráficos 3.7.1 y 3.7.2 muestran que existe una relación positiva entre los niveles de transparencia y la productividad laboral. En ambos gráficos, se observa que las economías con mejores resultados en términos de corrupción ocupan también los primeros lugares en términos de la productividad laboral por hora trabajada en la región.

Gráfico 3.7.1

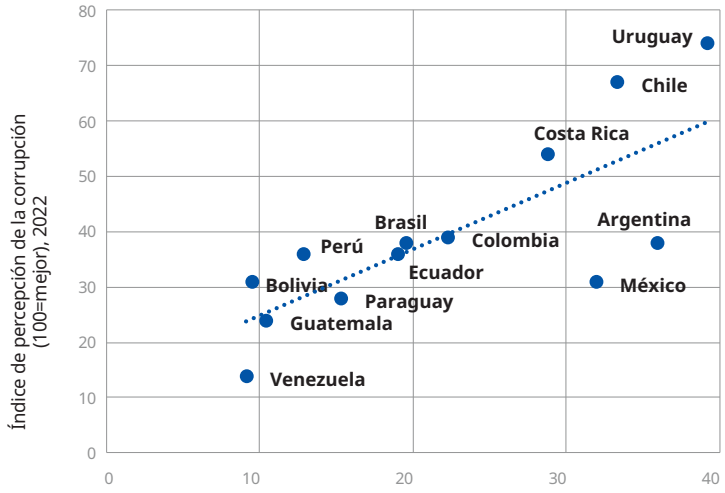
Índice de control de la corrupción y productividad laboral por hora trabajada, 2020



Fuentes: Banco Mundial (2023b), The Conference Board (2023).

Gráfico 3.7.2

Índice de percepción de la corrupción y productividad laboral por hora trabajada



Fuentes: Transparencia Internacional (2022), The Conference Board (2023).

Capítulo 4

Áreas prioritarias de política pública para impulsar la productividad en América Latina

En promedio, la productividad en América Latina medida como la tasa de crecimiento de la PTF ha sido negativa o cercana a cero para todos los quinquenios del siglo XXI. Ante ello, otros grupos de países en desarrollo han registrado tasas de crecimiento positivas en la PTF, así como mayores incrementos en la productividad laboral para el periodo de 2000 a 2022, tal como en el caso de las economías asiáticas en desarrollo (The Conference Board 2023). Dados estos resultados, se destaca la importancia de mejorar el marco regulatorio y de políticas públicas en las economías latinoamericanas, para crear un ambiente propicio de negocios e impulsar la productividad en la región.

1. Aumentar la escolaridad promedio de la población, así como la calidad del sistema educativo, con el objetivo de aprovechar el potencial productivo de la fuerza laboral. En América Latina, la escolaridad promedio de la región es menor que la que reportan los países de la OCDE, registrando valores de 9 y 12 años, respectivamente (UNESCO 2023a). Además, los estudiantes en la región reportan un rendimiento más bajo que los de la OCDE para las asignaturas de matemática, ciencias y lectura (Banco Mundial 2023a). Si bien el rezago educativo es general en América Latina, también es importante cerrar las brechas en calidad educativa dentro de las mismas economías latinoamericanas. Por ejemplo, ocho de cada diez estudiantes en Panamá no alcanzaron el nivel de competencia mínimo en matemática, mientras que, en Uruguay, esta relación fue de cinco por cada diez estudiantes (Banco Mundial 2023a). Dadas estas diferencias, los gobiernos deberán identificar los rezagos educativos particulares en su país para invertir en los programas y componentes adecuados.

Como primer paso, es relevante realizar un diagnóstico del acceso a la educación y el rendimiento académico de los estudiantes para identificar las barreras que enfrenta la población, en especial después de la pandemia de COVID-19. Actualmente, es necesario mejorar el acceso a datos comparativos sobre rendimiento académico de los estudiantes latinoamericanos. Además, es imprescindible invertir en la capacitación de los docentes en prácticas inclusivas para evitar que los grupos vulnerables enfrenten barreras para permanecer en la escuela; en general, es necesario incrementar los niveles de educación de los propios docentes (UNESCO 2020). Mejorar la educación de la región tiene el potencial de incrementar las capacidades de la fuerza laboral para desarrollar habilidades que las empresas demandan en los mercados laborales (OIT 2020a).Con esto en mente, es esencial que los gobiernos promuevan la participación del sector privado, representado por las organizaciones de empleadores, en las estrategias nacionales de desarrollo de habilidades. Esta colaboración debe implicar la consultoría por parte de las empresas, el intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades que llevan al diseño e implementación de sistemas de entrenamiento técnico, vocacional y educativo (TVET por sus siglas en inglés) que se ajusten a las habilidades demandadas (OIT 2020b).

2. Impulsar la integración de los jóvenes y las mujeres a los mercados laborales a través de oportunidades de desarrollo de habilidades. En América Latina, las mujeres han registrado tasas de participación laboral mucho más bajas que los hombres. Por ejemplo, en Guatemala, la tasa de participación de las mujeres es del 41 por ciento y la de los hombres es del 82 por ciento (ILO STAT 2023b). Asimismo, la proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian ni se encuentran en capacitación fue mayor para la región que para los países de la OCDE, en todos los años del periodo de 2002 a 2022; actualmente, dos de cada diez jóvenes en América Latina no realizan actividades laborales ni escolares (ILOSTAT 2023b). Además, los jóvenes latinoamericanos tienen una tasa de desempleo del 15,3 por ciento, valor que es más del doble de la tasa de desempleo promedio de la población (OIT 2023). Con esto en mente, los programas de educación dual representan una oportunidad para facilitar la transición de los estudiantes a los mercados laborales, cerrar la brecha de habilidades en estos, e incrementar la productividad de las empresas mediante ahorros en costos de contratación y la creación de un ambiente propicio para la innovación (Smeck *et al.* 2020). Sin embargo, es necesario que los gobiernos construyan un marco que regularice los puestos de aprendiz, además de establecer un sistema de certificación de habilidades relevantes con reconocimiento nacional que facilite la movilidad en los mercados laborales de los participantes en el programa (Smeck *et al.* 2020).

Adicionalmente, es necesario abordar la creciente demanda por habilidades digitales como consecuencia de la transformación digital. De acuerdo con un estudio de Oxford Economics, en el año 2016 la economía digital representaba el 15,5 por ciento del PIB mundial, y la inversión en tecnología digital brindaba un rendimiento 6,7 veces mayor comparado con las inversiones no digitales (Rivas 2018). Una encuesta realizada en empresas en cinco países de la región expone la importancia que otorgan los empleadores a las habilidades de procesos, sistemáticas y de resolución de problemas complejos (OIT 2022b). Por lo tanto, la demanda por nuevas habilidades en la fuerza laboral es una oportunidad para fomentar la integración de jóvenes y mujeres al empleo. Así, es esencial invertir en programas para la capacitación de la fuerza laboral en habilidades que complementen y apoyen la adopción de tecnología en la economía.

3. Impulsar la productividad y la formalización laboral y empresarial mediante políticas integradas. En la búsqueda de estrategias efectivas para reducir la informalidad laboral y empresarial en América Latina, las políticas públicas recientes han adoptado una serie de medidas que abarcan desde la simplificación del registro empresarial mediante plataformas de gobierno digital, hasta la promoción de sistemas fiscales progresivos especialmente diseñados para pequeñas empresas. Se han introducido productos financieros adaptados, como microcréditos y microseguros, que buscan atender las necesidades específicas del sector informal. La capacitación en gestión empresarial ha sido otro pilar, proporcionando a los emprendedores las herramientas necesarias para mejorar sus operaciones y eficiencia.

De manera adicional, se ha trabajado en expandir el acceso a la seguridad social y a servicios de salud para trabajadores informales, entendiendo que la protección social es un derecho y una necesidad que trasciende los tipos de empleo. Para facilitar la transición a la formalidad, se han implementado mecanismos de inspección laboral que se enfocan más en el apoyo que en la sanción, y se han desplegado campañas de concientización sobre los beneficios de estar dentro del marco legal y fiscal.

Las iniciativas también incluyen medidas para facilitar la inclusión de empresas formales en mercados más amplios y en cadenas de suministro, y la promoción de cooperativas como un paso intermedio hacia la formalidad. Además, se han adaptado leyes para satisfacer las necesidades de las micro- y pequeñas empresas, que a menudo son el primer eslabón hacia el crecimiento y la formalización.

Sin embargo, es crucial señalar que, aunque las políticas actuales representan avances significativos, existe una notable falta de estrategias que aborden directamente el aumento de la productividad en las unidades económicas informales, prevalentes en América Latina. Para abordar efectivamente la proliferación de estas unidades de negocio de baja productividad, las políticas públicas deben

también focalizarse en el fenómeno del emprendimiento por necesidad, capacitando a individuos que, enfrentados a perspectivas laborales limitadas, terminan estableciendo microempresas no registradas como un medio de subsistencia. Estas iniciativas deben ofrecer formación y orientación para aquellos que serían más productivos como trabajadores asalariados, asegurando una transición efectiva hacia el empleo formal. El aumento de la productividad es esencial para que las unidades económicas alcancen una escala de eficiencia y viabilidad económica que les permita competir en el mercado formal y, en consecuencia, favorecer la formalización de negocios y trabajadores, lo cual, a su vez, propulsaría un incremento de la productividad sectorial y agregada. Esta sinergia, en la que la productividad impulsa la formalización y viceversa, es un aspecto crítico que debe ser integrado en el diseño de futuras políticas para lograr un desarrollo económico inclusivo y sostenible.

4. Eliminar las barreras que dificultan el crecimiento de la productividad en las mipymes de América Latina. Las mipymes latinoamericanas representan el 99 por ciento del universo de empresas y el 67 por ciento del empleo, pero su participación en el PIB regional es de tan solo el 25 por ciento (CEPAL 2020). Este tipo de empresas registran relativamente bajos niveles de productividad y se concentran en sectores de baja productividad (OCDE 2019). De acuerdo con un estudio reciente de la OIT, existen distintos factores que influyen en el éxito y crecimiento de las mipymes, los cuales abarcan las características de la persona emprendiendo, la estructura del negocio y el entorno en el que se desarrolla. Dentro de los determinantes principales para una estructura empresarial efectiva se encuentra el acceso a capital humano, a una red de emprendimiento y a recursos financieros (OIT 2021c). En términos del último factor, el acceso al crédito, los gobiernos en América Latina han implementado distintos programas que impulsan la inclusión financiera de las empresas que enfrentan problemas para recibir préstamos (CEPAL 2020).

El acceso al crédito es importante para impulsar la transición fuera de la trampa de baja productividad y pocas ganancias que limita la acumulación de capital de las mipymes (OIT 2021c). Ante ello, el diseño de políticas públicas y mejoras regulatorias deberá reconocer que existe una relación bidireccional entre la productividad y el acceso al crédito. Por un lado, un bajo acceso al crédito puede frenar a las empresas para realizar inversiones que les permitan mejorar su productividad. Por otro lado, una baja productividad también puede dificultar el acceso al crédito, ya que las instituciones financieras pueden percibir un mayor riesgo e incrementar el costo del crédito.

5. Gasto público en línea con la sostenibilidad de la deuda gubernamental. Durante la pandemia de COVID-19, la deuda pública como porcentaje del PIB en América Latina alcanzó un máximo histórico (Ocampo y Eyzaguirre 2023). Así, a partir de 2020 se ha observado una tasa de crecimiento negativa de la deuda; sin embargo, países como Venezuela y Suriname registraron valores de deuda mayores del 100 por ciento de su PIB en el año 2022. Por otro lado, la deuda de Guatemala y Guyana para ese mismo año fue del 27 y 30 por ciento respectivamente (FMI 2022). Estas diferencias en la región destacan la necesidad de que cada gobierno evalúe las necesidades y restricciones de su deuda antes de implementar nuevos programas y políticas para el apoyo de la productividad. Con esto en mente, es esencial que los gobiernos encuentren un equilibrio en la estructuración de su gasto que les permita invertir en políticas que impulsen la productividad, sin poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas.

6. Establecer un marco regulatorio que garantice mayor transparencia en las instituciones públicas e incremente la confianza ciudadana. En América Latina, la percepción general de la calidad institucional en la región cayó durante el periodo que va de finales de los noventa al año 2020 (The Heritage Foundation 2023; Banco Mundial 2023b). Así, los latinoamericanos pasaron de considerar que los derechos de propiedad eran «mayormente no libres» en sus países, en 1996, a considerarlos como «reprimidos» en 2022 (The Heritage Foundation 2023). En la misma línea, la percepción de corrupción en América Latina se ha mantenido constante o se ha deteriorado durante la última década, reportando

consistentemente menores niveles de transparencia que el promedio de las economías de la OCDE (Transparencia Internacional 2022; Banco Mundial 2021). La corrupción tiene un alto costo social que se da a través de evasión de impuestos, disminución en la inversión, obstáculos a la innovación y productividad, asignación ineficiente de recursos y menor crecimiento económico (Engel *et al.* 2018). Por ende, en América Latina se requiere de una transformación sistemática que incremente la confianza en las instituciones (Engel *et al.* 2018; Lipton *et al.* 2017).

Referencias bibliográficas

Acemoglu, D., y F. Zilibotti. 1997. «Was Prometheus unbound by chance? Risk, diversification, and growth». *Journal of Political Economy* 105 (4): 709-751.

Adler, G., y S. Sosa. 2011. «Dependencia de las materias primas en América Latina: ¿Qué pasaría si el auge se convirtiera en una caída?». *IMF Blog* (blog). 24 de octubre de 2011. https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2011/11/01/latin-americas-commodity-dependence-what-if-the-boom-turns-to-bust.

Agudelo, M. 2021. *La economía digital y las industrias digitales basadas en el conocimiento*. Caracas: CAF. https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1766.

Amin, M., F. Ohnsorge y C. Okou. 2019. *Casting a Shadow Productivity of Formal Firms and Informality*. https://documents1.worldbank.org/curated/en/116331563818341148/pdf/Casting-a-Shadow-Productivity-of-Formal-Firms-and-Informality.pdf.

Azeng, T. F., y T. U. Yogo. 2013. *Youth unemployment and political instability in selected developing countries*. Túnez, Túnez: African Development Bank.

Banco Mundial. 2017. TCdata360. https://tcdata360.worldbank.org/topics

_____ (Amin, M., F. Ohnsorge y C. Okou). 2019a. *Productivity of Formal Firms and Informality*. WB. https://documents1.worldbank.org/curated/en/116331563818341148/pdf/Casting-a-Shadow-Productivity-of-Formal-Firms-and-Informality.pdf.

_____. 2019b. GovData360. Quality of roads, 1-7 (best). https://govdata360.worldbank.org/indicators/h157fb881?country=BRA&indicator=41294&viz=line_chart&years=2007,2019

_____. 2021a. The Global Findex Database 2021. https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data

_____. 2021b. «Índice de Gini». https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI.

_____ (Ha, Jongrim, M. Ayhan Kose y F. Ohnsorge). 2021c. «One-Stop Source: A Global Database of Inflation». Policy Research Working Paper 9737. Washington D. C.: World Bank

_____ (Pennings, S. M.). 2022. *A Gender Employment Gap Index (GEGI): A Simple Measure of the Economic Gains from Closing Gender Employment Gaps, with an Application to the Pacific Islands*. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/56e5ea70-33dd-54f0-bd00-d5b04b5f0814.

_____. 2023a. Education Statistics. DataBank. https://databank.worldbank.org/source/education-statistics-%5E-all-indicators

_____. 2023b. Worldwide Governance Indicators. DataBank. https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

_____. 2023c. World Development indicators. DataBank. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

_____. 2023d. «Crecimiento del PIB, variación porcentual anual». https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ZJ&most_recent_value_desc=true.

Becker, G. 1994. «Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education». 3.ª ed. National Bureau of Economic Research.

Bessant, J., y J. Tidd. 2007. *Innovation and Entrepreneurship*. Wiley.

Bhatta, S. D., y M. P. Drennan. 2003. «The economic benefits of public investment in transportation: A review of recent literature». *Journal of Planning Education and Research* 22: 288-296.

BID (Basco, A. I., y C. Lavena). 2021. *América Latina en movimiento: Competencias y habilidades para la Cuarta Revolución Industrial en el contexto de pandemia*. https://publications.iadb.org/es/america-latina-en-movimiento-competencias-y-habilidades-para-la-cuarta-revolucion-industrial-en-el

Bloom, N., y J. Van Reenen. 2006. «Measuring and Explaining Management Practices across Firms and Countries». National Bureau of Economic Research. doi:10.3386/w12216.

Bloom, N., A. Mahajan, D. McKenzie y J. Roberts. 2010. «Why do firms in developing countries have low productivity?». *American Economic Review: Papers & Proceedings 2010*, 100 (2): 619-623.

Bloom, N., R. Sadum y J. Van Reenen. 2016. «Management as a Technology?». National Bureau of Economic Research. doi:10.3386/w22327.

Brichetti, J. P., L. Mastronardi, M. E. Rivas, T. Serebrisky y B. Solís. 2021. *La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe: estimación de las necesidades de inversión hasta 2030 para progresar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Banco Interamericano de Desarrollo.

CBI (Confederation of British Industry). 2017. *Unlocking regional growth. Understanding the drivers of productivity across the UK's regions and nations*. https://www.cbi.org.uk/ media/1170/cbi-unlocking-regional-growth.pdf.

_____ (Jamei, M.). 2022. «Is your business finding new ways to deal with labour shortages?». *CBI Economics Projects*. https://www.cbi.org.uk/articles/is-your-business-finding-new-ways-to-deal-with-labour-shortages/.

CEPAL (Bértola, L., y C. Lara). 2017. «Política industrial en el ciclo de los commodities en Uruguay». En *Políticas industriales y tecnológicas en América Latina*. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43939/S1700602_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

_____ (Pérez Caldentey, E., y D. Titelman, Eds.). 2018. *La inclusión financiera para la inserción productiva y el papel de la banca de desarrollo*. Libros de la CEPAL N.º 153 (LC/PUB.2018/18-P). Santiago: CEPAL. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/48c62b04-7611-4a61-bd9f-f6dcc5c27c7d/content.

_____ (Dini, M., y G. Stumpo, coords.). 2020. *Mipymes en América Latina: Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento*. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/2c7fec3c-c404-496b-a0da-e6a14b1cee48/content.

_____ . 2022a. *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2022*. República Bolivariana de Venezuela. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c13573cd-7694-467c-bbcc-f12bbbe606df/content.

_____ . 2022b. *Policies to address the challenges of existing and new forms of informality in Latin America*. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/431aed2d-2e7a-4f05-a942-b2d12db14bb5/content.

_____ . 2022c. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Dinámica y desafíos de la inversión para impulsar la recuperación sostenible e inclusiva*. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/f221aa4c-8df5-439f-aaa4-f4b1bb5c0e82/content.

_____ . 2023a. *Estudio Económico de América Latina 2023. El financiamiento de una transición sostenible: inversión para crecer y enfrentar el cambio climático*. https://repositorio.cepal.org/items/5ef73e88-db74-44d2-872a-eb77612a4e8d.

_____ . 2023b. *Desigualdades, inclusión laboral y futuro del trabajo en América Latina*. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48947/1/S2300427_es.pdf

Cette, G., J. Fernald y B. Mojon. 2016. «The pre-Great Recession slowdown in productivity». *European Economic Review* 88: 3-20. http://dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.03.012.

Chong, A., J. Galdo y J. Saavedra-Chanduví. 2007. *Informality and Productivity in the Labor Market: Peru 1986-2001*. IDB Working Paper 511.

Crespi, G., y P. Zuniga. 2012. «Innovation and productivity: evidence from six Latin American countries». *World Development* 40 (2): 273-290.

Da Costa, K., M. Castilho y M. Puchet. 2021. «Fragmentación productiva, comercio exterior y complejidad estructural: análisis comparativo del Brasil y México». *Revista CEPAL* 133. https://repositorio.cepal.org/items/28329760-621e-4c71-b845-db0402ac94a5.

Deng, T. 2013. «Impacts of transport infrastructure on productivity and economic growth: Recent advances and research challenges». *Transport Reviews* 33 (6): 686-699.

Dietrich, H. 2012. *Youth unemployment in Europe. Theoretical considerations and empirical findings.* https://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/09227.pdf.

Duggal, V. G., C. Saltzman y L. R. Klein. 1999. «Infrastructure and productivity: a nonlinear approach». *Journal of Econometrics* 92 (1): 47-74.

Engel, E., B. S. Noveck, D. Ferreira, D. Kaufmann, A. Lara, J. Londoño, M. Piet y S. Rose-Ackerman. 2018. *Report of the Expert Advisory Group on Anti-Corruption, Transparency, and Integrity in Latin America and the Caribbean*. https://publications.iadb.org/en/report-expert-advisory-group-anti-corruption-transparency-and-integrity-latin-america-and-caribbean.

Esposito, G., S. Lanau y S. Pompe. 2014. «Judicial System Reform in Italy: A Key to Growth». IMF Working Paper. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1432.pdf.

Fiszbein, A., C. Cosentino y B. Cumsille. 2016. *El desafío del desarrollo de habilidades en América Latina. Un diagnóstico de los problemas y soluciones de política pública*. Washington: Diálogo Interamericano, Mathematica Policy Research, CAF. https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1031.

FMI (Fondo Monetario Internacional) (Hakura, D.). 2020. *What is debt sustainability?* IMF. https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2020/09/what-is-debt-sustainability-basics.

_____ (El-Ganainy, A. *et al.*). 2021. «Inclusivity in the Labor Market». IMF Working Paper 21/141.

_____ . 2023a. Financial Access Survey (FAS). https://data.imf.org/?sk=e5dcab7e-a5ca-4892-a6ea-598b5463a34c&sid=1460055200236.

_____ . 2023b. World Economic Outlook. https://www.imf.org/external/datamapper/GGXWDG_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Gamboa, R., y C. Segovia. 2016. «Chile 2015: Falla política, desconfianza y reforma». *Revista de Ciencia Política (Santiago)* 36 (1): 123-144. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2016000100006

Gaete, R. 2020. «Caracterización de la inclusión financiera en Chile a nivel comunal». Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas. Memoria para optar al título de ingeniero civil industrial. https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/176676/Caracterizaci%C3%B3n-de-la-inclusi%C3%B3n-financiera-en-Chile-a-nivel-comunal.pdf?sequence=1

GEM. 2017a. *Entrepreneurial framework conditions*. https://www.gemconsortium.org/data/key-nes

GEM. 2017b. *Resumen Ejecutivo GEM – Argentina 2017*. https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50313

Giang, M. H., B. H. Trung, Y. Yoshida, T. D. Xuan y M. T. Que. 2019. «The causal effect of access to finance on productivity of small and medium enterprises in Vietnam». *Sustainability* 11 (19): 5451.

Guillemette, Y., A. Kopoin, D. Turner y A. De Mauro. 2017. *A revised approach to productivity convergence in long-term scenarios*. OECD Working Paper.

Hanushek, E., y L. Woessmann. 2012. «Do better schools lead to more growth? Cognitive skills, economic outcomes, and causation». *J Econ Growth* 17: 267-321. https://hanushek.stanford.edu/sites/default/files/publications/Hanushek%2BWoessmann%202012%20JEconGrowth%2017(4).pdf.

Hazarika, G., M. Khraiche y L. Kutlu. 2023. *Gender Equity in Labor Market Opportunities and Aggregate Technical Efficiency: A Case of Equity Promoting Efficiency*. IZA Discussion Paper 16096. https://ssrn.com/abstract=4431369 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4431369.

Hsieh, C.-T., E. Hurst, C. Jones y P. Klenow. 2019. «The Allocation of Talent and U.S. Economic Growth». *Econometrica* 87 (5): 1439-1474. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.3982/ECTA11427.

ILOSTAT. 2023a. «Database: Education and Mismatch Indicators (EMI)». https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer14/?lang=en&id=SDG_0552_NOC_RT_A

_____ . 2023b. «Database: Labour Force Statistics (LFS)». https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer14/?lang=en&id=SDG_0552_NOC_RT_A

_____ . 2023c. «Database: Informal sector and informal employment». https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer14/?lang=en&id=SDG_0552_NOC_RT_A

_____ . 2023d. «Database: SDG Labour Market Indicators (ILOSDG)». https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer3/?lang=en&id=SDG_0552_NOC_RT_A

INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica). 2022. «Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel)». https://inec.cr/estadisticas-fuentes/encuestas/encuesta-nacional-demanda-laboral-enadel.

Isaksson, A. 2007. *Determinants of Total Factor Productivity: a literature review*. Research and Statistics Branch, UNIDO.

Islam, R. 2003. *Do More Transparent Governments Govern Better?* https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=636439.

ITC (International Trade Centre). 2018. *SME Competitiveness outlook 2018. Business Ecosystems for the Digital Age*. ITC. https://intracen.org/file/smeco2018pdf

Jacob, O. 2011. «Prefacio». En *Inversión en infraestructura pública y reducción de la pobreza en América Latina*. Konrad Adenauer Stiftung.

Kim, Y. E., y N. Loayza. 2019. «Productivity Growth: Patterns and Determinants across the World». World Bank Policy Research Working Paper 8852.

Krugman, P. 1997. *The Age of Diminished Expectations: U.S. Economic Policy in the 1990s*. ISBN: 9780262611343.

La Porta, R., y A. Shleifer. 2014. «Informality and Development». *Journal of Economic Perspectives* 28 (3): 109-126. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.28.3.109.

Lawry, S., C. Samii, R. Hall, A. Leopold, D. Hornby y F. Mtero. 2014. «The impact of land property rights interventions on investment and agricultural productivity in developing countries: a systematic review». *Campbell Systematic Reviews* 10 (1): 1-104.

Lipton, D., A. Werner y C. Gonçalves. 2017. *Corrupción en América Latina: Un balance*. https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2017/09/21/corruption-in-latin-america-taking-stock

Loayza, N. 2018. «Informality: why is it so widespread and how can it be reduced?». World Bank Research and Policy Briefs 133110.

Loayza, N., L. Servén y N. Sugawara. 2009. *Informality in Latin America and the Caribbean*. https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/4888.html.

Lopez-Salido, D., C. Chikis y J. E. Goldberg. 2021. *Do Low Interest Rates Harm Innovation, Competition, and Productivity Growth?* CEPR Discussion Paper DP16184. https://ssrn.com/abstract=3886624.

March, J. 1991. «Exploration and Exploitation in Organizational Learning». *Organization Science* 2 (1), 71-87. https://www.jstor.org/stable/2634940.

McKinsey (Bolio, E., J. Remes, T. Lajous, J. Manyika, E. Ramírez y M. Rossé). 2014. *A tale of two Mexicos: Growth and prosperity in a two-speed economy*. https://www.mckinsey.com/featured-insights/americas/a-tale-of-two-mexicos

_____. 2015. *McKinsey & Company. Global growth: Can productivity save the day in an aging world?* https://www.mckinsey. com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20 and%20Growth/Can%20long%20term%20global%20growth%20be%20saved/MGI_Global_growth_Full_report_February_2015pdf.pdf.

_____ (Burghin, J., E. Hazan, S. Lund, P. Dahlström, A. Wiesinger y A. Subramaniam). 2018. *Skill shift: Automation and the future of the workforce*. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce

Moss, E., R. Nunn y J. Shambaugh. 2020. *The Slowdown in Productivity Growth and Policies That Can Restore It.* The Hamilton Project – Brookings Institution. https://www.brookings. edu/wp-content/uploads/2020/06/Productivity_Framing_LO_6.16_FINAL.pdf.

Ocampo, J. A. 2005. «A Broad View of Macroeconomic Stability». DESA Working Paper 1. United Nations.

Ocampo, J. A., y R. Eyzaguirre. 2023. *Sostenibilidad de la deuda pública en América Latina*. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/48764-sostenibilidad-la-deuda-publica-america-latina-caribe

OCDE. 2001. *Measuring Productivity: Measurement of Aggregate and Industry-level Productivity Growth,* OECD Manual. https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/measuring-productivity-oecd-manual_9789264194519-en

_____ (Noteboom, B.). 2013. «Making labour markets inclusive». *OECD*. https://www.oecd.org/employment/making-labour-markets-inclusive.htm#:~:text=An%20inclusive%20labour%20market%20is,in%20many%20sectors%20and%20economies.

_____. 2014 «The rationale of fighting corruption». *CleanGovBiz. Integrity in Practice*. https://maritimecyprus.com/wp-content/uploads/2017/09/oecd-1.pdf.

_____. 2015. *The Innovation Imperative. Contributing to Productivity, Growth, and Well-Being*. https://www.OECD.org/innovation/the-innovation-imperative-9789264239814-en.htm.

_____ (Andrews, D., C. Criscuolo y P. Gal). 2016. «The best versus the rest: The global productivity slowdown, divergence across firms and the role of public policy». Working Paper 05.

_____. 2017. La educación en Costa Rica. https://www.oecd.org/education/school/La-Educacion-en-Costa-Rica-Resumen-Ejecutivo.pdf.

_____. 2018. *Perspectivas de Integridad. América Latina y el Caribe 2018. Ficha país. Uruguay.* https://www.oecd.org/gov/integridad/ficha-pais-integridad-uruguay.pdf

_____. 2019. «The "new" development traps» (cap. 3). En *Latin America Outlook 2019: Development in Transition*. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/abc9ef52-en/index.html?itemId=/content/component/abc9ef52-en#:~:text=Productivity%20trap%3A%20Persistently%20low%20productivity,global%20value%20chains%20(GVCs).

_____. 2022. *Employment outlook 2022. Tackling the cost-of-living crisis. Why bold government action is needed in labour markets*. https://www.oecd.org/employment-outlook/2022/

OIT (Organización Internacional del Trabajo). 2013. *Informal enterprises: policy supports for encouraging formalization and upgrading*. Ginebra: Suiza: International Labour Organization. https://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_210463/lang--en/index.htm.

_____. 2014. «Medidas para promover un empleo pleno, decente, productivo y libremente elegido». En *Políticas de empleo para una recuperación y un desarrollo sostenibles. Discusión recurrente en el marco de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_240031.pdf.

_____. 2015. *Formalizando la Informalidad Juvenil. Experiencias innovadoras en América Latina y el Caribe*. Organización Internacional del Trabajo. ISBN 978-92-2-129692-8. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_359270.pdf.

_____. 2016. *Políticas de desarrollo productivo en América Latina. Discusiones recientes, creación de empleo y la OIT*. https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_536568/lang--es/index.htm.

_____. 2017. *El futuro de la formación profesional en América Latina y el Caribe: desafíos y lineamientos para su fortalecimiento*. https://www.oitcinterfor.org/publicaciones/futuro_fp

_____. 2020a. *Impulsando la productividad. Una guía para organizaciones empresariales*. ACT/EMP. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/ documents/publication/wcms_759690.pdf.

_____. 2020b. *Employer organizations in the governance of TVET and skills systems*. 9789220324035 [ISBN]. https://www.ilo.org/skills/areas/skills-policies-and-systems/WCMS_750563/lang--en/index.htm.

_____. 2021a. *El Trabajo y la Productividad. Sección de Formulación de Políticas. Segmento de Empleo y Protección Social*. Departamento de Empresas. GB.340/POL/3. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757894.pdf

_____. 2021b. *Panorama Laboral 2022 de América Latina y el Caribe*. 23050276[ISSN]. https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_867497/lang--es/index.htm

_____. 2021c. *Internal and external factors for SME success What EBMOs should know to promote more competitive enterprises*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_830580.pdf

_____ (Ernst, E., R. Merola y J. Reljic). 2022a. *Labour market policies for inclusiveness: A literature review with a gap analysis*.

_____. 2022b. *Informe Regional: Productividad Transición digital, cambio tecnológico y políticas de desarrollo productivo en ALC: desafíos y oportunidades*. Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. ISBN: 978-92-2-037135-0. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_847153.pdf.

_____. 2023. *Examen de las políticas de empleo en el mundo, 2023. Políticas macroeconómicas para la recuperación y la transformación estructural*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_888925.pdf.

_____. s. f. «3. Crecimiento económico con alto coeficiente de empleo». *OIT*. https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/employment-rich/lang--es/index.htm.

Orozco, R., R. Padilla y V. Romero. 2021. *Análisis del comercio exterior intrarregional entre el Canadá, los Estados Unidos y México: ¿quién ha obtenido los mayores beneficios comerciales en términos de valor agregado?* https://repositorio.cepal.org/items/2e31c16d-9eed-4576-9df7-f90bc58ee0ed.

Rivas, G. 2018. «La revolución digital: el potencial de estar en las nubes». *Punto sobre la I* (blog). 10 de abril de 2018. https://blogs.iadb.org/innovacion/es/la-revolucion-digital-cumbre-de-las-americas/.

Rose-Ackerman, S., y B. J. Palifka. 2016. *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.

Rotberg, R. 2018. *The Corruption of Latin America*. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-94057-1_1.

Schwarzer, J. 2017. *The effects of exporting on labour productivity: evidence from German Firms*. CEP Working Paper, 2.

Smeck, S., M. Oviedo y A. Fiszbein. 2020. *Educación dual en América Latina: Desafíos y oportunidades*. El Diálogo. https://www.thedialogue.org/analysis/educacion-dual-en-america-latina-desafios-y-opportunidades/?lang=es.

Takanohashi, M., M. Ribeiro y F. Schneider. 2023. *The Impact of Inequality on the Informal Economy in Latin America and the Caribbean with a MIMIC Model*. https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp10461.pdf.

The Conference Board. 2023. «Data Central. Total Economy Database – Output, Labor and Labor Productivity, & Total Economy Database – Growth Accounting and Total Factor Productivity». https://data-central.conference-board.org/

The Heritage Foundation. 2023. «Index of Economic Freedom». https://www.heritage.org/index/explore

Transparencia Internacional. 2022. «Corruption Perception Index (CPI)». https://www.transparency.org/en/countries/afghanistan?redirected=1

_____. 2023. «Transparencia Internacional condena el intento de cerrar el espacio cívico en Venezuela». Nota de prensa. https://www.transparency.org/es/press/transparencia-internacional-condena-el-intento-de-cerrar-el-espacio-c%C3%ADvico-en-venezuela.

Ulyssea, G. 2018. «Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil». *American Economic Review* 108 (8): 2015-2047.

_____. 2020. «Informality: Causes and Consequences for Development». *Annual Review of Economics* 12: 525-546.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 2022. «Frontier technology Index, annual».

UNCTAD Data Centre. 2019. «Statistics». https://unctadstat.unctad.org/datacentre/

UNESCO. 2004. «América Latina y el Caribe rezagada en investigación y desarrollo». Nota de prensa. https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-rezagada-investigacion-desarrollo.

_____. 2020. *Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2020, América Latina y el Caribe: inclusión y educación: todos y todas sin excepción*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374615.page=48.

_____. 2021. «América Latina». En *Informe sobre la ciencia 2021*. https://www.unesco.org/reports/science/2021/es/latin-america.

_____. 2023a. «Educational Attainment: September 2023 release». UIS Statistics. http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=NATMON_DS&Lang=en

_____. 2023b. «Science,technology and innovation: October 2023 release». UIS Statistics. http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=NATMON_DS&Lang=en

UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). 2023. «World Development Indicators». https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

Valenzuela, J. P., y N. Yáñez. 2022. *Trayectoria y políticas de inclusión en educación superior en América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia*. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47877/S2200364_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

WEF. 2019. «World Economic Forum Global Competitiveness Index». Utilizando el portal de Tcdata360 del Banco Mundial. https://tcdata360.worldbank.org/indicators/ha3df0512?country=COL&indicator=41541&countries=MEX,HND,CHL,URY,ARG&viz=line_chart&years=2017,2019

_____. 2022. «Inflation: there's a vital way to reduce it that everyone overlooks – raise productivity». WEF. https://www.weforum.org/agenda/2022/06/inflation-there-s-a-vital-way-to-reduce-it-that-everyone-overlooks-raise-productivity.

WITS (World International Trade Statistics). 2021. «Trade Statis by indicator. International Trade Indicators Merchandise Trade». World International Trade Statistics (WITS). https://wits.worldbank.org/country-indicator.aspx?lang=en

Organización Internacional del Trabajo | ACT/EMP

Oficina Regional de la OIT
para América Latina y el Caribe